9

Colección Papeles de paz

Renunciar a la opción armada

Experiencias de reintegración política de grupos insurgentes en Colombia y El Salvador

9

Renunciar a la opción armada

Experiencias de reintegración política de grupos insurgentes en Colombia y El Salvador

Colección Papeles de paz

Colección Papeles de paz

Renunciar *a la* opción armada

Experiencias de reintegración política de grupos insurgentes en Colombia y El Salvador

©Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (CINEP/PPP)

©Fundación Berghof

Director general
Luis Guillermo Guerrero Guevara

Subdirector
Sergio Coronado Delgado

Coordinador equipo Ciudadanía y Paz
Fernando Sarmiento Santander

Coordinador del proyecto IPS
David Rampf

Director general
Hans J. Giessmann

Coordinadora del proyecto IPS
Véronique Dudouet

Autores
David Rampf
Marcela Llano
David Castillo
Diana Chavarro Rodríguez
Carlos Guillermo Ramos
Roberto Oswaldo López
Aída Carolina Quintero

Equipo de producción editorial

Coordinación editorial
Margareth Figueroa Garzón

Corrección de estilo
Luis Julián León Castellanos

Diseño, diagramación e impresión
Impresol Ediciones

CINEP/ Programa por la Paz
Carrera 5 n.° 33B - 02
PBX: (57-1) 2456181
Bogotá, D.C., Colombia
www.cinep.org.co

Fundación Berghof
Altensteinstr. 48a
14195 Berlín, Alemania
www.berghof-fundation.org

Junio de 2015

Esta publicación es posible gracias al apoyo del International Development Research Center (IDRC).

ISBN: 978-958-644-195-7

Bogotá, D.C., Colombia

El contenido de esta publicación puede ser utilizado total o parcialmente siempre y cuando se cite como fuente al CINEP/ Programa por la Paz y a la Fundación Berghof.

Impreso en Colombia / *Printed in Colombia*

Contenido

Presentación 7

Entrar en la escena política
Un análisis de las experiencias de exguerrilleros en la política legal colombiana

Por David Rampf y Diana Chavarro 10

Los cuatro grupos guerrilleros antes de la ANC 12

El Partido Comunista de Colombia Marxista Leninista y su Ejército Popular de Liberación 12

El Movimiento 19 de Abril 13

El Partido Revolucionario de los Trabajadores 14

El Movimiento Armado Quintín Lame 15

La decisión de dejar las armas y entrar a la política legal 15

Las expectativas de los antiguos grupos guerrilleros frente a la ANC y la participación política 18

La experiencia de los desmovilizados en la ANC 20

La experiencia de los grupos ex guerrilleros después la ANC: el caso de la ADM-19 23

La inclusión como idea rectora 23

Ascenso y declive 25

Conclusión 30

la arena política de las fuerzas contendientes en el salvador. ¿De incluidos a inclusivos?

Por Carlos Guillermo Ramos, Roberto Oswaldo López y Aída Carolina Quinteros 34

Etapas de los actores contendientes desde la década de los años 70 a 1992 36

Los orígenes del FMLN 36

El camino hacia la opción armada 37

El conflicto armado abierto 39

El FMLN como actor político en el sistema de partidos de la posguerra 40

La supremacía de lo político..... 40
FMLN como partido político (1992-2009)..... 42
La inclusión respecto a la agenda de reformas de la sociedad civil..... 43
El FMLN como partido de gobierno 44
Política Pública alrededor de la exclusión social 45
Desafíos en seguridad ciudadana..... 46
Relación entre el FMLN y las Fuerzas Armadas..... 47
Conclusiones 48

La historia no contada del Partido Revolucionario de los Trabajadores: La transición del PRT de un partido clandestino a un actor de la política legal

Por David Rampf, David Castillo y Marcela Llano 52
Origen, ideología y características del PRT 54
Ruptura ideológica y negociaciones de paz..... 57
Entrando en la política nacional y regional y la primavera democrática del partido 61
Se cambian armas por curules: la participación electoral del partido..... 61
la obra social de la ONG Corpadec..... 63
La incidencia del proyecto político: el papel de la ADM-19 y la reacción de las élites regionales..... 65
Conclusión..... 68

Presentación

>>

Negociaciones y acuerdos de paz también son siempre la oportunidad de un nuevo comienzo, una oportunidad de reparar injusticias socio-económicas, relegitimar el Estado, recuperar confianzas perdidas y reconstruir relaciones rotas después de años de guerra. Mientras que, solo de vez en cuando, cambios substanciales son establecidos directamente en lo pactado en la mesa de negociaciones; los acuerdos de paz generalmente abren "al menos" la puerta para que sectores anteriormente excluidos puedan defender y promocionar su agenda y sus propuestas en la arena política legal. En general, es justamente la credibilidad de esta promesa lo que logra inclinar el cálculo costo-beneficio de grupos insurgentes hacia un cambio de estrategia, es decir, para pasar de la lucha armada a la partición política legal. La nueva táctica es una transición de la insurgencia a la democracia. El objetivo es aportar a las fallas del sistema al ser parte del mismo.

Desde esta perspectiva, la clave para la paz es la inclusión; la inclusión de los anteriormente excluidos, de sus agendas, preocupaciones, visiones y bases sociales. Pero, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan los procesos de transición de grupos insurgentes a particos políticos? Y, ¿tienden realmente los anteriormente excluidos a transformarse en agentes de cambio, en defensores de los intereses de los tradicionalmente marginalizados o, más bien, a reproducir los mismos patrones excluyentes anteriormente criticados? ¿Qué tan incluyente es su proyecto político legal?

Los tres artículos presentados en esta edición de *Papeles de Paz* arrojan luces sobre estas y otras cuestiones por medio de las lecciones aprendidas de dos casos latinoamericanos: Colombia y El Salvador. Todos los artículos son resultados del proyecto de investigación colaborativo "Evitando recaídas en el conflicto a través de acuerdos políticos incluyentes" (*Proyecto IPS*), financiado por IDRC y coordinado por el CINEP/PPP y la Fundación Berghof con aliados en seis países con una historia en común: experiencias en torno a un conflicto armado interno (Aceh/Indonesia, Colombia, El Salvador, Nepal, Sudáfrica y Sudán del Sur).[1] En línea con anteriores proyectos conjuntos,[2] esta investigación, de manera especial, busca incluir en el debate las lecciones aprendidas desde la perspectiva de los mismos protagonistas de los procesos. Por esta razón, los artículos se basan principalmente en testimonios de actores de transición de la insurgencia a la democracia.

Mientras que el primer artículo, ***Entrar en la escena política: Un análisis de las experiencias de exguerrilleros en la política legal colombiana***, analiza el

1 Todos los resultados del proyecto pueden ser descargados en las páginas web del CINEP/PPP (www.cinep.org.co), de la Fundación Berghof (www.berghof-foundation.org) o en la página del proyecto (www.ips-project.org).

2 Los resultados de dichos proyectos se pueden consultar en la página web de la Fundación Berghof y/o en las publicaciones:
García-Durán, M. (2009). *De la insurgencia a la democracia: Estudios de caso.* Bogotá: CINEP/PPP.
Dudouet, V.; Giessmann, H. J., & Planta, K. (2012). *Post-war security transitions: Participatory peacebuilding after asymmetric conflicts.* Abingdon: Routledge.

balance retrospectivo de desmovilizados de los años 90 respecto a su participación en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y la experiencia de la Alianza Democrática M-19; el segundo artículo, ***La arena política de las fuerzas contendientes en El Salvador: ¿De incluidos a inclusivos?***, discute los aportes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional salvadoreño en términos de inclusión. ¿Ha logrado el FMLN, después de su transición a partido político, que las diferentes expresiones de la ciudadanía tengan una voz y capacidad de participar en la conducción del Estado y del país? ¿Qué tanto las necesidades de los grupos excluidos de la sociedad salvadoreña han logrado colocarse en la agenda del nuevo partido político? Finalmente, el tercer artículo, ***La historia no contada del Partido Revolucionario de los Trabajadores: La transición del PRT de un partido clandestino a un actor de la política legal***, al contar una de las historias del conflicto armado colombiano, ampliamente desconocida, analiza el pedregoso camino del PRT en la política legal, tanto al nivel regional como nacional, y resalta los factores que contribuyeron al relativo fracaso de su proyecto político.

En síntesis, esta edición rescata algunas experiencias de negociaciones con grupos armados, con el ánimo de mostrar la primordial importancia de una verdadera inclusión política, la cual, al entregar la posibilidad real de un tránsito de los actores contestatarios del poder, a ser servidores públicos en cargos políticos relevantes, es capaz de generar argumentos contra una recaída en el conflicto armado por parte de desmovilizados, y de formar la base de una sensación de responsabilidad con el sistema político reformado, en los mismos. En este sentido, los artículos albergan aportes importantes para el actual proceso de La Habana, el cual, posiblemente, dará paso a la transformación de uno de los más viejos y poderosos opositores armados del Estado colombiano. Un proceso que debe ser muy eficaz en convencer a las FARC de la viabilidad de su nuevo camino no armado, si se quiere aprovechar la oportunidad de lograr una paz sostenible.

David Rampf
Investigador del Equipo Ciudadanía y Paz y coordinador del Proyecto IPS del CINEP/ Programa por la Paz.

1.

A finales de la década de los años 80, luego de cambios significativos en el contexto nacional e internacional, cuatro grupos guerrilleros colombianos dejaron las armas y entraron en la política legal por medio de su participación en la Asamblea Nacional Constituyente. El hecho de que estos grupos insurgentes, que se encontraban en negociaciones de paz, fueran autorizados por el Gobierno para formar parte en el proceso constituyente, generó la gran expectativa de que un posible giro social y político, a través de medios no violentos, sería posible.

Más de dos décadas después de la desmovilización de estos grupos y a la luz del limitado éxito electoral del proyecto político colectivo ADM-19, resultado de la unión entre el M-19 y otros movimientos de la izquierda colombiana, este artículo analiza cómo se percibió la participación en la Asamblea Nacional Constituyente, el intento fallido de establecer una verdadera oposición y un cambio en la cultura política, desde el punto de vista de los mismos grupos desmovilizados. El ejercicio parte de la revisión de las expectativas de algunos exmiembros del EPL, el M-19, el MAQL y el PRT, y su contraste frente a las experiencias de cada uno en la política colombiana de los años 90.

Entrar en la escena política
Un análisis de las experiencias de exguerrilleros en la política legal colombiana

>>

Por David Rampf y Diana Chavarro

En 1996, el Estado colombiano se enfrentó de nuevo a una grave crisis. A solo cinco años de ser firmada la Constitución de 1991, que buscó generar un cambio en la cultura política del país, el presidente Ernesto Samper encaraba acusaciones —posteriormente comprobadas— sobre el ingreso de dineros del narcotráfico a su campaña presidencial. Al mismo tiempo, el prolongado conflicto armado entraba en una nueva fase, en la cual los niveles de violencia alcanzaron una escala nunca antes vista.[1] Políticos, líderes sociales y defensores de Derechos Humanos continuaron siendo blancos de atentados para minar su actividad de incidencia.

Ante este panorama, Enrique Flórez, exintegrante del *Partido Revolucionario de los Trabajadores* (PRT) y el politólogo Pedro Valenzuela plantearon una reflexión en la que se preguntaban si "la lección que grupos [como las FARC y el ELN] han derivado del desempeño político de la Alianza [Democrática M-19] es que las posibilidades reales de un movimiento alternativo al bipartidismo tradicional en la arena institucional son limitadas" (Flórez & Valenzuela, 1996, p. 37), y si esto, por ende, influenciaba negativamente sus consideraciones de cambiar la lucha armada por la competencia legal electoral tras un proceso de negociación y desmovilización.

Después de haber analizado el grado real de inclusión, tanto en el proceso de negociación de la nueva Constitución de 1991 como en su aplicación; y de haber destacado el éxito limitado del cambio de la cultura política colombiana y el poco impacto de la nueva oposición política que surgió en torno a la desmovilización de grupos guerrilleros (Rampf & Chavarro, 2014), este artículo revisa el proceso de toma de decisiones que tuvo lugar en la *Asamblea Nacional Constituyente* (ANC) y su posterior impacto en la política colombiana, desde la perspectiva de algunos miembros de los cuatro grupos guerrilleros desmovilizados que participaron en las negociaciones de paz, en la ANC y en la arena política legal después de 1991. Por medio del contraste entre sus reflexiones actuales y las expectativas anteriores a los eventos mencionados, este trabajo busca discutir las impresiones subjetivas que se han asentado en estos actores, a partir de sus experiencias en la arena política legal. Igualmente, pretende explicar el relativo fracaso del proyecto político *Alianza Democrática M-19* (ADM-19), desde la lectura de sus propios protagonistas.

Para lograr este objetivo, el documento se basa primordialmente en entrevistas[2] con exmiembros de alto rango

1 La tasa de homicidios llegó a 68 por cada 100.000 habitantes en 1996, este fue el año en que comenzó la expansión paramilitar y cuando las FARC lograron algunos de sus más grandes victorias sobre el Ejército Nacional (UNDP, 2006; Echandía, 2000).

2 Todas las entrevistas citadas, con excepción de las que se tienen con los exmiembros de la MAQL (citadas en Peñaranda, 2010 y Tattay, 2005) y con Antonio Navarro Wolff (publicada en Revista Foro Nº 24), se llevaron a cabo por los autores de este trabajo, entre septiembre de 2013 y febrero 2014, en las ciudades de Bogotá (Barrios, Flórez, Mejía, Patiño, Villa y Villarraga), Medellín (Fajardo), Pereira (Toro), Barranquilla (Ortiz) y Sincelejo (Restrepo).

de los cuatro grupos guerrilleros que firmaron acuerdos de paz con el Gobierno Nacional entre 1989 y 1991, y que luego también fueron representados en la ANC, lo cual incluye tanto la experiencia ampliamente estudiada del *Movimiento 19 de Abril* (M-19),[3] así como la del *Ejército Popular de Liberación* (EPL), el *Movimiento Armado Quintín Lame* (MAQL) y el *Partido Revolucionario de los Trabajadores* (PRT). El escrito se divide en tres secciones: La primera, a manera de introducción, presenta el momento vivido por los cuatro grupos guerrilleros antes de la ANC y resalta los factores que los llevaron a la dejación de sus armas; la segunda analiza las expectativas de los actores armados en relación con la ANC y su papel dentro del ámbito institucional; y la tercera compara las expectativas de estos actores con la realidad a la que se enfrentaron durante la década de 1990.

Los cuatro grupos guerrilleros antes de la ANC

Los grupos guerrilleros que firmaron acuerdos de paz con el Gobierno colombiano, entre 1989 y 1991, fueron hijos de un momento histórico particular, en Colombia y en el mundo. Por un lado, la izquierda revolucionaria colombiana emergió, según su propio discurso, en un contexto nacional caracterizado por patrones excluyentes, los cuales fueron resaltados como principal motivo compartido de su militancia. Mientras que dicha exclusión estructural impregnaba, desde su perspectiva, todas las áreas sociales, culturales, económicas y políticas, al dejar a una parte importante de la ciudadanía (no blanca, no conservadora o liberal y no católica) por fuera de los procesos de toma de decisiones y en la miseria, fue, sobre todo, el último aspecto (la exclusión política), el que constituyó la justificación de su elección de la lucha armada como principal estrategia para el cambio ([ee.][4] Flórez, 2013; Mejía, 2013; Ortiz, 2014). Según los discursos de la insurgencia, la firma del pacto del Frente Nacional en 1957 marcó la intensificación de la exclusión política en el país y dejó —debido a los canales políticos que se cerraban cada vez más y a las acciones represivas por parte del Estado en contra de sectores opositores a los partidos tradicionales— a este camino como el que aparentemente era el único posible (Archila, 2008, p. 154).

Por otro lado, el contexto internacional de Guerra Fría y guerra de guerrillas en América Latina dio una base ideológica para el florecimiento de las múltiples iniciativas revolucionarias armadas, que buscaron emular el camino seguido por la Revolución Cubana y la experiencia china.

El Partido Comunista de Colombia – Marxista Leninista y su Ejército Popular de Liberación

El *Partido Comunista de Colombia - Marxista Leninista* (PCC-ML) y su brazo armado, el *Ejército Popular de Liberación* (EPL), fueron producto de la escisión del *Partido Comunista de Colombia* (PCC) a comienzos de la década de 1960, que se dio debido, en parte, a herencias de las tensiones del comunismo a nivel internacional[5] y, en parte, debido a posturas antidemocráticas al interior de la izquierda colombiana.[6] Estos procesos llevaron a la fundación del PCC-ML en 1965 y, posteriormente, del EPL en 1967. Esta combinación de partido y ejército obedeció a la base ideológica maoísta que tuvo tanto el

3 Para obtener información adicional sobre los antecedentes en la historia del M-19 véase, por ejemplo, Darío Villamizar (1995), Ana Carrigan (2009) y Hernando Correa (2005), quienes ofrecen una mirada más cercana en el asedio del Palacio de Justicia en 1985. Ver también Patiño, Grabe y García (2009) para más detalles sobre el proceso de negociación y desmovilización del M-19.

4 Con una abreviatura "e." o "ee." se señalará que la fuente consultada es una entrevista; esta consideración, dispuesta como una aclaración directa del texto, resulta relevante para la comprensión del mismo.

5 Es importante recordar la ruptura entre la línea soviética y la línea maoísta a mediados de la década de 1950, cuando la URSS se declaró a favor de una convivencia pacífica con el capitalismo a nivel internacional. Esto marcó una ruptura entre maoístas y soviéticos, siendo los primeros simpatizantes de continuar con la vía armada para tomar el poder, al mismo tiempo que calificaron de "reformistas" a sus contrapartes pro soviéticos. En Colombia, el Partico Comunista de Colombia optó por mantener la combinación de las formas de lucha, actuando en la política nacional, al tiempo que se proclamó la conformación de *autodefensas* para contener las acciones represivas del Estado; por su parte, la tendencia Marxista-leninista se desligó de la opción electoral y se radicalizó por la vía armada como único camino posible para lograr un cambio social y político en el país (Delgado, 2008; Archila, 2008; Villarraga y Plazas, 1994).

6 Como se verá, también se dieron tensiones en las discusiones al interior del *Partido Comunista Colombiano* que llevaron a la expulsión de líderes como Pedro Vázquez y Carlos Arias, posteriores fundadores del PCC-ML. En la conformación de este partido confluyeron diversos sectores que habían comenzado a cuestionar los procedimientos de la izquierda en Colombia desde inicios de los años 60, como el *Movimiento Obrero Estudiantil Campesino* (Moec), la *Juventud Comunista* (Juco), el *Partido de la Revolución Socialista* (PRS) y unos sectores de la juventud del *Movimiento Revolucionario Liberal* (MRL) (Villarraga y Plazas, 1994, p. 21).

PCC-ML como el EPL durante su primera década y media de existencia.

El EPL surgió como resultado de la confluencia del interés de los líderes urbanos fundadores de esta guerrilla para conformar un ejército revolucionario, quienes se habían desplazado por todo el país en la búsqueda de conformar dicha empresa, con los remanentes de las llamadas "juntas patrióticas", conformadas por antiguos dirigentes liberales que habían sido desplazados durante *La Violencia* y que lograron sobrevivir a la ola represiva que operó con fuerza durante la década de 1950 (Villarraga y Plazas, 1994; Fajardo [e.], 2013). Estos actores confluyeron en el sur de Córdoba, norte de Antioquia y Chocó y se convirtieron en los orígenes de lo que sería más adelante (durante la década de 1970 y hasta su desmovilización) una organización de carácter nacional, con frentes regionales en la región de la Costa Atlántica, el Magdalena Medio y el sur del país, principalmente en la región del Putumayo; así como frentes urbanos en grandes ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Barranquilla (Fajardo [e.], 2013).

En su accionar a nivel regional, el PCC-ML y el EPL tuvieron sus principales bases en el campesinado rural y en los movimientos sindicales locales, con especial presencia en el magisterio, al interior del cual también tuvieron una influencia de gran importancia a nivel urbano y, en general, en la dirigencia nacional, llegando a lograr la presidencia de la *Federación Colombiana de Educadores* (Fecode). Esta apropiación del espacio del profesorado impactó igualmente a los estudiantes de secundaria que secundaron con frecuencia, tanto en lo urbano como lo rural, las acciones del partido y del EPL; y se convirtieron en fuente de importantes cuadros políticos y militares para la organización. Las universidades, en particular las de carácter público, también contaron con una importante influencia de estas organizaciones (Villarraga, s.f., p. 38).

En el plano ideológico, en sus inicios, el partido y su brazo armado esgrimieron consignas maoístas, fuertemente radicales en cuanto al apoyo a la vía armada como único mecanismo válido para el cambio social y de rechazo a las alianzas temporales con la burguesía proyectadas por el PCC. Como resultado de sus primeros congresos:

> [Se] aprobó un discurso contestatario, de negación de la lucha política e instrumentalización de las luchas sociales en apoyo a la lucha armada; de ruptura y destrucción del Estado y su régimen político y social; de rechazo a la dependencia del imperialismo (Villarraga, s.f., p. 34).

Estos planteamientos dejaron de lado la actividad política electoral y llevaron a la concentración de las acciones en formar cuadros al interior de los movimientos estudiantiles, sindicales y campesinos, que prepararan el terreno para la revolución por venir y alimentaran los avances de la lucha armada (Villarraga, s.f., p. 34; Villarraga & Plazas, 1994, p. 29). Sin embargo, gracias al contexto represivo nacional y a los cambios a nivel internacional, que llevaron al distanciamiento del maoísmo en la década de 1980, el partido tuvo un giro radical en el XI Congreso. El cambio giró principalmente en torno de las estrategias de acción, ya que:

> [...] reconoció como principal la lucha política, relativizó la importancia de la lucha armada, consideró la posibilidad de pasar a una fase de legalización del partido y uso de la lucha electoral y cambió la estrategia de guerra popular prolongada por la de guerra popular con perspectiva de una insurrección popular (Villarraga, s.f., p. 41).

Esta nueva orientación abrió la puerta para lo que posteriormente sería el diálogo con el Gobierno Nacional.

Finalmente, en cuanto a la lectura que realizaba esta organización política y militar del contexto del país y las principales demandas esgrimidas, inicialmente se concentraron en un cambio revolucionario total del modelo político del país, pero fueron derivando en aspectos más puntuales como la apertura democrática que permitiera superar la exclusión generada por el pacto del Frente Nacional, la superación del estado de sitio como principal instrumento de Gobierno, la violación sistemática por parte del Ejército Nacional de los Derechos Humanos y la exclusión económica, producto de la concentración de los recursos en unas pocas familias ([ee.] Mejía, 2013; Fajardo, 2013; Villa, 2013).

Adicionalmente, y debido a sus bases en el medio rural, una demanda constante fue la reforma agraria, consistente principalmente en la solicitud de la redistribución de los títulos de propiedad ([ee.] Flórez, 2013; Mejía, 2013).

El Movimiento 19 de Abril

Una década después de la fundación del PCC-ML y como parte de una nueva generación de movimientos

armados revolucionarios, fue creado el M-19. Este movimiento político-militar nació de una fusión entre facciones de las *Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia* (FARC) y la *Alianza Nacional Popular* (ANAPO), y debe su nombre a la experiencia traumática del fraude electoral ocurrido en las elecciones presidenciales de 1970,[7] el cual se transformó en una referencia para justificar su decisión de tomar las armas como "último recurso" ante la imposibilidad de alcanzar el poder político por la vía pacífica —la electoral—.

Al igual que el PCC-ML, el EPL y más tarde también el PRT, el M-19 ubicó las raíces del conflicto armado y social del país, y por ende, el motivo de su lucha, en la exclusión política fortalecida por el Frente Nacional, y acudió al uso de la violencia como principal instrumento para resolver los desacuerdos políticos y el conflicto por la tierra.[8] Esta posición incluía, además de los señalamientos contra el diseño institucional, una revisión crítica de la cultura política en general y una acusación contra el estilo de mano dura del Gobierno, basado en el uso permanente del estado de sitio. Desde el punto de vista de estos grupos guerrilleros, el Estado colombiano sufría una clara crisis de legitimidad, que se manifestó a través de la degradación del Congreso y la desconfianza pública sobre el ejército, alimentado por las experiencias de violaciones de los Derechos Humanos.

A pesar de estas similitudes, el M-19 se diferenció de las demás organizaciones de la izquierda revolucionaria colombiana de este entonces, por dos características, altamente relacionadas, que representaron el movimiento durante toda su existencia: su crítica a la concepción tradicional de la lucha armada y la importancia de lo urbano. Desde su fundación, el grupo armado subrayó su inconformidad con la ideología de liberación a través de una guerra rural prolongada, la cual guió la estrategia compartida (aunque con algunas variaciones) por todos los grupos guerrilleros colombianos de la primera generación. En contraste con las FARC, el ELN y el EPL, los fundadores del M-19 sintieron la necesidad urgente de concentrarse en el nivel urbano como una reacción a la creciente urbanización del país en la década de 1970 e introdujeron el componente táctico de la propaganda armada (Patiño, Grabe, & García, 2009).

Esta reacción al contexto cambiante, también se expresó en la composición del movimiento e influenció su agenda. Desde el inicio, el M-19 fue un movimiento urbano. Sus miembros procedían de la clase media con educación universitaria de las principales ciudades. Aunque esta composición fue ampliada más adelante,[9] la conformación principal del movimiento se mantuvo urbana durante toda su existencia. Por otra parte, y con más fuerza que otros grupos, el M-19 incluía, en sus consideraciones sobre las necesidades del país, la urbanización acelerada y las precarias condiciones sociales resultantes (Patiño et al. 2009).

El Partido Revolucionario de los Trabajadores

El PRT surgió en 1982 de la *Tendencia Marxista-Leninista-Maoísta* (TMLM), un sector mayoritario que había sido expulsado del PCC-ML y del EPL a mitad de los años 70. A pesar de su influencia en los sindicatos y movimientos campesinos en otras regiones del país y de su participación en todas las coordinadoras guerrilleras de los años 80, el grupo tuvo un claro enfoque regional en la Costa Atlántica y conservó su carácter de actor marginal del conflicto a lo largo de su existencia.

Pese a las diferencias en cuanto a su tamaño e importancia relativa, el PRT compartió elementos de la interpretación realizada por el PCC-ML y EPL sobre los problemas del sistema político colombiano, dada su base ideológica marxista-leninista-maoísta. Las tres organizaciones consideraron la lucha de clases como una cuestión central, y se identificaron a sí mismos con el proletariado, y a las élites colombianas con la burguesía. También criticaron

7 Uno de los ejemplos más relevantes de la exclusión criticada del sistema político colombiano tuvo lugar el 19 de abril de 1970, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla —el candidato de la ANAPO para la elección presidencial, que iba en contra de Misael Pastrana Borrero, el candidato del establecimiento— perdió la competencia en un resultado muy extraño. El M-19 decidió su nombre sobre la base de este hecho, para recordarle al país que no era posible alcanzar el poder a través de medios democráticos.

8 El conflicto por la tierra se ha identificado como una de las causas fundamentales del conflicto armado colombiano. Consiste en el desplazamiento forzoso sistemático de los trabajadores de la tierra y los campesinos por los terratenientes para aumentar la acumulación de tierras. Para obtener más información, ver, por ejemplo, Fajardo (2002) y la alimentación y la agricultura; y Reyes (2009).

9 Después de su VI Conferencia, en 1978, el M-19 comenzó a desarrollar, además de sus estructuras urbanas, unidades militares en diferentes zonas rurales del país.

enérgicamente el cierre del sistema político que, según su entendimiento, excluyó del acceso a la política a cualquier otro movimiento político diferente de los dos partidos tradicionales (Liberal y Conservador). En particular, la práctica de gobernar sobre la base del estado de sitio y el suspender los derechos políticos básicos fue condenada como herramienta para frenar la oposición política (Rampf, Castillo, & Llano, 2014, pp. 5-ss.).

El Movimiento Armado Quintín Lame

El cuarto y último grupo de interés para este trabajo es el MAQL. Fundado en 1984 en la región sur del Cauca y con estrechas relaciones con el *Consejo Regional Indígena del Cauca* (CRIC), este movimiento operó entre las comunidades indígenas de esa parte del país y surgió como una autodefensa frente a los diversos grupos armados que luchaban por el control del territorio y de la población.[10] Los tres objetivos principales del mismo eran: ganar control sobre el monopolio de la violencia; contener la expansión de los grupos revolucionarios que operaban en la zona y proteger a las comunidades indígenas del conflicto armado; y utilizar una violencia legítima de defensa contra terratenientes locales, que amenazaban el accionar y la vida de líderes sociales indígenas (Peñaranda, 2010).

Marcos Avirama (como se citó en Peñaranda, 2010), exlíder del CRIC, explicó la situación en una entrevista:

> El proceso de lucha desde el principio está marcado por una fuerte represión. Represión política de los partidos tradicionales, represión política también de algunas organizaciones de izquierda que querían que se desarrollara un proceso pero bajo su orientación, bajo sus intereses de grupo, y no de un proceso de lucha democrática a partir de las comunidades indígenas. Sin embargo, la mayor represión recibida fue por parte del Estado, a través de la policía, a través de los servicios de inteligencia, a través del ejército. Los terratenientes comenzaron a organizar bandas de pájaros [grupos paramilitares][11] por allá en los años 72 y 73, y lograron asesinar varios compañeros dirigentes (p. 19).

Ante esta difícil situación, la agenda política del MAQL se ocupó principalmente de la exclusión social a nivel regional, sin dejar de lado una crítica a la cuestión de la cerrazón política y el racismo a nivel nacional.[12]

En este contexto de represión y discriminación, la principal demanda hecha por el MAQL fue la autonomía de las comunidades indígenas y el derecho de gobernar sus propios territorios y aplicar sus propias tradiciones en materia de justicia y economía. Como ya se mencionó, la región del Cauca contaba con la presencia de casi todos los movimientos armados de índole revolucionaria que existieron durante las décadas de los años 1970 y 1980, lo que ubicó a las comunidades indígenas en medio del conflicto armado y las obligó a acatar las ideas y prácticas promovidas por los movimientos armados, mientras que, al mismo tiempo, debían defenderse del Estado y los terratenientes. Toda esta situación impidió avanzar en un proceso de organización interna, por lo que se identificó, como un asunto urgente, la necesidad de una mayor autonomía (Peñaranda, 2010; Tattay & Peña, 2013).

La decisión de dejar las armas y entrar a la política legal

Dejar las armas e ingresar a la política legal no fue una decisión fácil para ninguno de los grupos estudiados. En general, varios elementos claves en el contexto internacional y otros de índole nacional provocaron múltiples discusiones tanto al interior de los grupos como entre ellos, y llevaron en su conjunto al EPL, el M-19, el MAQL y el PRT, finalmente, a la decisión de transformarse de grupos insurgentes en actores políticos legales.

En el plano internacional, la caída de la cortina de hierro afectó a casi todos los movimientos guerrilleros en América Latina, y Colombia no fue la excepción. Este

10 Es importante destacar que la mayor parte de los grupos guerrilleros operando en la década de 1980 en Colombia tenían alguna presencia en la región del Cauca en ese momento. Los más poderosos eran las FARC, el EPL y el M-19. También había grupos paramilitares financiados por los terratenientes locales para controlar las comunidades indígenas.

11 Los pájaros fueron grupos paramilitares financiados por terratenientes del *Partido Conservador* para eliminar a los líderes liberales durante *La Violencia.*

12 Las comunidades indígenas y negras fueron expuestas con frecuencia a leyes y políticas que tenían como base valores racistas. Uno de los ejemplos más claros de esta situación es el hecho de que, hasta la Constitución de 1991, no eran considerados como ciudadanos con plenos derechos. Lo anterior tuvo consecuencias graves para las comunidades en términos de la falta de apoyo del Estado, lo cual se traducía en educación deficiente, desnutrición generalizada y un muy difícil acceso a los servicios de salud pública.

evento aceleró las discusiones acerca de la pertinencia de la lucha armada, así como acerca del proyecto político del socialismo en sí, y cortó el apoyo económico internacional de la guerrilla (Mujica & Thoumi, 1996).

Por otro lado, a nivel nacional, una creciente escalada de la violencia durante la década de 1980 llevó a una fatiga del conflicto entre la sociedad colombiana y una deslegitimación de la lucha armada como estrategia para el cambio. Mientras que, por una parte, los carteles del narcotráfico lograron un enorme poder y declararon la guerra al Estado colombiano, por otra parte, y con estrechos vínculos con los barones de la droga y el Ejército Nacional, grupos paramilitares comenzaron a ganar poder económico, influencia política y capacidad militar, amenazando así a los grupos guerrilleros, sus bases sociales y a otros actores de la izquierda.[13] Esta confrontación se caracterizó, cada vez más —debido al dinero del narcotráfico que los grupos paramilitares habían comenzado a utilizar para financiar sus fines— por una desventaja militar para la insurgencia (la cual, al menos en parte, poco a poco también se abrió para este negocio) (López, 2007).

> "Tuvimos la convicción de que la bandera más revolucionaria que podíamos levantar en ese período, era la lucha por la democracia y por una apertura democrática"
> Germán Toro

Al mismo tiempo, se abrieron una serie de alternativas a la lucha armada, que paulatinamente causaron, al interior de algunos grupos insurgentes, un cuestionamiento de la premisa de que la misma era la "única medida" para conducir a cambios reales. Al romper con la política de mano dura de búsqueda de una solución militar de sus predecesores, los gobiernos encabezados por Belisario Betancur y, en particular, Virgilio Barco, empezaron a reconocer las raíces económicas y sociales del conflicto armado, y se orientaron hacia una solución política. Ambos gobernantes intentaron disminuir la exclusión, al dar señales de una apertura democrática. De acuerdo con este nuevo enfoque, se instauró, por ejemplo, la elección directa de los alcaldes a partir de 1986 y se creó el Plan Nacional de Rehabilitación, que buscaba dar respuesta a las llamadas causas estructurales del conflicto. Asimismo, ambos mandatarios hicieron varios intentos de llevar los diferentes grupos insurgentes a la mesa de negociación. El reconocimiento de las aspiraciones políticas de la insurgencia, por parte del Estado, sustituyó a su vieja lógica de represión de los "enemigos del Estado" (Flórez [e.], 2013; García, 1992). En línea con estos cambios en la arena política colombiana, la posterior convocatoria de la ANC se transformó en otro catalizador importante para llevar a las negociaciones de paz que tuvieron lugar en los años siguientes.

Ante este nuevo contexto internacional y nacional, alrededor del año 1987, el M-19 empezó una reflexión interna que lo fue conduciendo a la negociación de un acuerdo de paz con el Gobierno en 1989 y, posteriormente, a la dejación de la lucha armada, como consecuencia de la determinación interna de que lograr un pacto político con el Gobierno era la única vía realista hacia la consecución (al menos parcial) de su agenda.[14]

De acuerdo con antiguos dirigentes de la organización, tres elementos fueron cruciales en este proceso. El primer tema fue la constatación de que la estrategia militar utilizada por el M-19 después de la toma el Palacio de Justicia había fracasado. La "falta de eco popular que tuvieron estas acciones militares, llevó a Pizarro —y en general a todos nosotros— a convencernos de que la acción militar había llegado a su tope" (Patiño [e.], 2013, p. 6). El segundo tema, muy relacionado con la primera reflexión, fue el cambio del equilibrio militar y político en Colombia, lo que puso a la guerrilla en la situación de desventaja ya mencionada. La tercera cuestión fue el agotamiento interno. El excomandante del M-19 Otty Patiño ([e.] 2013) subraya que "muchas de las personas que formaron parte del movimiento estaban cansadas, y otros estaban realizando actividades que no eran de orden revolucionario" (p. 6), tales como actividades de extorsión o abuso de poder.

13 Un claro ejemplo de esto fue el llamado *Muerte a Secuestradores* (MAS) y el extermino contra la *Unión Patriótica* (García, 1992, p. 49), ocurrido desde mediados de la década de 1980 y hasta mediados de la de 1990 (con algunos casos de continuación hasta entrada la década del 2000).

14 Esta postura ya se había manifestado anteriormente en el movimiento en 1980, cuando el grupo realizó la toma de la Embajada de República Dominicana, lo que llevó a los primeros diálogos con el Gobierno Nacional en 1982 y a la declaración de amnistía a presos políticos, declarada por el presidente Betancur ese mismo año.

En la búsqueda de solucionar estas falencias y limitaciones, durante la segunda mitad de la década de 1980, el movimiento decidió cambiar su estrategia militar y centrarse en una guerra contra la oligarquía nacional, que se expresó en el secuestro del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado en 1988. Según Patiño ([e.] 2013), para muchos miembros del M-19, este secuestro presentó un último recurso para crear una nueva ventana de oportunidad para las negociaciones con el Gobierno Nacional.

Sin consulta previa con la *Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar* (CGSB) o las bases sociales del M-19, Pizarro, en tanto comandante máximo, buscó aprovechar el momento político y tomó la decisión de guiar a sus compañeros a la paz. Tras una negociación corta con el Gobierno Nacional, que puso un especial énfasis en las garantías para la participación política nacional del movimiento una vez en la vida civil (García, 1992, p. 94), el movimiento dejó sus armas en marzo de 1990. Dado que su principal objetivo era ingresar a la contienda política legal, el M-19 pronto conformó un partido político, en conjunto con otros sectores de izquierda (la *Alianza Democrática M-19*), que tuvo una acogida inmediata muy positiva por parte de la sociedad en general.

Fue justamente este relativo éxito electoral inicial el que se transformó, junto con la convocatoria de la ANC —la cual en ese entonces ya se vislumbraba en el horizonte cercano—, en otro elemento fundamental para que el EPL, MAQL y PRT recibieran un impulso para dejar las armas, pese a que en sectores de las FARC y del ELN la acelerada —y sin consulta al interior de la CGSB— decisión del M-19 de negociar con el Gobierno fue mal percibida.

En el caso del EPL y del PCC-ML, en el plano interno, las discusiones acerca de una posible solución negociada ya habían comenzado a inicios de la década de los años 80, cuando en la Segunda Conferencia Nacional del EPL se habló por primera vez de la posibilidad de dialogar con el Gobierno Nacional y se profundizó la ruptura con el maoísmo establecida en el XI Congreso del PCC-ML, llevado a cabo en 1980. Este viraje tuvo importantes repercusiones en la concepción de las estrategias de lucha del movimiento, expresadas, por ejemplo, en la fundación de la *Unión Democrática Revolucionaria* en 1982, como partido legal representante del PCC-ML; el vincularse a los diálogos de paz con Betancur, lo que llevó a la tregua bilateral con el EPL en 1984; el surgimiento de la propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente como único camino para lograr una verdadera paz, liderada por Óscar William Calvo;[15] y el rompimiento con el maoísmo internacional para iniciar un proceso de apertura política, que empezó a concebir las alianzas con otros grupos insurgentes, así como los vínculos con la política y los movimientos sociales (Villarraga, s.f., p. 43).

El exmiembro del PCC-ML Germán Toro ([e.] 2013) recuerda este debate interno acerca de los méritos y peligros de la propuesta de Calvo:

> En el Comité Central del partido, del 85 hacia delante, había dos tendencias, una tendencia que defendía a capa y espada el tema de la profundización de la guerra y otra tendencia, en la que estaba yo, [...] que considerábamos que profundizar la acción armada era contrario a los intereses de los sectores más desfavorecidos o a los sectores que decíamos nosotros que estábamos representando o por los cuales estábamos luchando (p. 1).

Sin embargo, el debate entre las dos tendencias se prolongó por una década más, sobre todo al interior del EPL. Particularmente, después del fracaso de las negociaciones de paz con Betancur, se generaron unas fuertes resistencias frente a la postura a favor de dejar las armas, situación que evidenció la fuerza del brazo armado en la toma de decisiones al interior del conjunto EPL/PCC-ML. Mientras que, sobre todo, la vieja guardia del EPL demandaba una profundización de la guerra, la gran mayoría de los dirigentes del partido clandestino llamaron la atención sobre la evidente fatiga social general frente a la confrontación armada y resaltaron el compromiso con sus bases sociales. Mejía ([e.] 2013) recuerda que:

> Todo empieza con unas discusiones internas con respecto al papel que nosotros jugábamos con respecto a la gente, la visión que nosotros teníamos era la visión de mesías y nosotros en cierta medida nos considerábamos salvado-

15 Esta propuesta fue liderada por el miembro del Comité Central del PCC-ML, Óscar William Calvo. Con su cuestionamiento abierto de la lucha armada como el camino correcto para alcanzar los objetivos políticos del grupo, Calvo desencadenó una discusión interna y estableció la trayectoria del EPL en los años posteriores (Villarraga y Plazas, 1994). Sin embargo, esta postura no fue completamente adoptada por el PCC-ML ni por el EPL, sino hasta que la ANC fue convocada como tal en 1990, producto de otros eventos históricos que serán abordados más adelante. Este fue un momento en el cual la organización encontró, en la posibilidad de participar en este espacio, un poderoso incentivo para firmar el acuerdo de paz con el Gobierno nacional y llevar a cabo su desmovilización (Toro [e.], 2013; Villarraga, s.f.).

> res... y llegamos a la idea de que era necesario sentarnos a conversar con el Gobierno Nacional (p. 7).

Fue en la preparación del XIII Congreso Nacional del PCC-ML, cuando se retomó con fuerza la discusión sobre la dejación de las armas. Allí se discutieron elementos claves de las razones para esto como la degradación de la guerra, las prácticas de descomposición que se estaban presentando al interior del propio movimiento guerrillero y la pérdida de la vigencia de la lucha armada, que se expresaba tanto a nivel nacional como internacional (García, 1992, p. 91; Villarraga, s.f., p. 47; Toro [e.], 2013). Finalmente, ante el éxito político logrado por el M-19, luego de su desmovilización y la convocatoria a la ANC, el movimiento se desmovilizó el 1 de marzo de 1991. Toro ([e.] 2013) recuerda que:

> La razón política principal fue la convicción de que lo más revolucionario que podíamos hacer en ese periodo era la lucha por la democracia. Y que si había una oportunidad de apertura democrática y el cese de la utilización de las armas para hacer política, la desmovilización valía la pena (p. 3).[16]

En el caso del PRT, los principales argumentos a favor del desarme eran, junto con los cambios resaltados al nivel internacional, la pérdida interna de la legitimidad de la lucha armada y el reconocimiento de la escasa repercusión de sus actividades sobre la sociedad ([ee.] Flórez, 2013; Ortiz, 2014). Asimismo, las posturas radicales que el grupo había tenido inicialmente de no participación en política y no negociación fueron fuertemente cuestionadas ante la coyuntura del país y, en especial, ante los mencionados éxitos políticos del M-19, después de su desmovilización. Con relación a la emergente ADM-19, el PRT percibió la posibilidad de constituir una iniciativa en la legalidad que articulase a los sectores progresistas del país y que planteara una alternativa política diferente. Por ello, finalmente, el partido clandestino firmó un acuerdo de paz con el Gobierno colombiano en Don Gabriel, corregimiento de Ovejas, Sucre, en enero de 1991 (García, 1992, p. 97; Rampf et al. 2014, pp. 10-ss.).

Por su parte, y teniendo en cuenta que se trataba de un grupo de autodefensa y de una fracción de movimiento social indígena en general, el proceso de transición del MAQL tuvo un carácter diferente. La principal razón interna del MAQL para la desmovilización fue la percepción del impacto negativo de su acción armada al interior de las comunidades indígenas; tal como el abuso de poder y el desgarramiento progresivo del tejido social. Igualmente, se observó con gran preocupación la creciente autonomía que fue ganando el movimiento armado con respecto de la dirección social y política del movimiento indígena, el cual además se vio cada vez más marginalizado por el Gobierno a causa de sus vínculos cercanos con el movimiento armado (García, 1992, p. 100). Por lo tanto, los líderes políticos del movimiento estaban buscando una manera de desmantelar su estructura armada de autodefensa (Peñaranda, 2010).

En este escenario, la ANC llegó como la oportunidad perfecta para cambiar el lugar de interlocución y permitir un espacio importante para el movimiento indígena en el proceso de toma de decisiones de la nueva constitución. Henry Caballero (como se citó en Tattay, 2005), el portavoz del MAQL en las negociaciones de paz con el Gobierno Nacional, recuerda que:

> [...] en este contexto, es evidente que las negociaciones de paz fueron vistas de manera positiva por la dirección indígena [...]. El interés de una negociación que incluyera a todas las comunidades indígenas era importante no sólo para los líderes de la región del Cauca sino para todo el movimiento indígena nacional.

La suma de todo lo anterior impulsó a los movimientos insurgentes a dar el paso final hacia la dejación de armas y su entrada a la política legal, o como Carlos Pizarro lo expresó, a arriesgar el "salto al vacío".

Las expectativas de los antiguos grupos guerrilleros frente a la ANC y la participación política

La trayectoria vivida por los grupos insurgentes en cuestión les llevó por el camino de la negociación y la dejación de las armas. No obstante, un tema central fue cuáles eran sus expectativas frente a esta decisión; frente a la ANC, como eje central en este proceso; y frente al futuro en materia de participación política.

Después de la sentencia 138 de 1990 de la Corte Suprema, que finalmente permitió la convocatoria de una

16 Incluso las FARC vieron también en la ANC un escenario político de importancia, que fue posteriormente desestimado por los efectos del ataque al campamento de *Casa verde* de este grupo armado.

Asamblea Nacional Constituyente, las expectativas de cambio de muchos sectores de la sociedad se concentraron en esta última. Para ese momento, la ANC se convirtió en el objetivo principal de los cuatro grupos guerrilleros analizados.[17] Todos los acuerdos finales de paz entre el EPL, PRT y MAQL con el Gobierno Nacional, ponen claramente de relieve la importancia fundamental de la posibilidad de participar en la ANC, una vez que abandonaran las armas.

El EPL, dada su propuesta histórica de una ANC planteada por el (posteriormente asesinado) comandante Calvo, encontró en este escenario una gran afinidad. Toro ([e.], 2013) afirma que aunque el futuro diseño de la ANC de 1991 no coincidía con la anterior propuesta de Calvo, "[la ANC] coincidió precisamente con nuestros antecedentes y nos sentíamos muy cómodos en ese proceso" (p. 4).

> "Creemos que de aquí no saldrá una visión unilateral de un sector, sino que la resultante será la emulsión de las mejores propuestas para conseguir una sociedad más justa"
> Bernardo Gutiérrez

De acuerdo con muchos de los antiguos miembros del EPL y PCC-ML, la ANC fue percibida como el lugar para lograr la transformación de todos los elementos controvertidos del sistema político y de poner fin a la exclusión ([ee.] Toro, 2013; Villa, 2103). Villa ([e.], 2013) ejemplifica algunos de estos elementos al decir:

> [...] la necesidad de abrir el sistema político estaba clara, esa era parte de las reformas fundamentales que había que lograr en la Asamblea Constituyente, pero también generar instituciones más legítimas, la justicia, el Congreso. (p. 6). [Él también añade]: Nosotros queríamos una asamblea delegataria del poder del pueblo, y que tuviera capacidad para tomar decisiones sobre todos los temas (p. 3).

Sobre todo el pluralismo de la ANC fue recibido por el EPL y el PCC-ML con optimismo, como lo expresó Bernardo Gutiérrez (1991) durante una intervención en una sesión plenaria:

> Creemos que de aquí no saldrá una visión unilateral de un sector sino que la resultante será la emulsión de las mejores propuestas para conseguir una sociedad más justa, más tolerante y donde, a pesar de la necesaria diversidad de proyectos estatales, no tengamos que recurrir al uso de las armas, o a la represión de los contrarios, sino que nos remitamos al terreno de la democracia (párr. 9).

En cuanto al PRT, las expectativas sobre la ANC asimismo eran altas, especialmente cuando las negociaciones bilaterales con el Gobierno llegaron al punto de que la amplia agenda del PRT, que incluía una serie de reformas estructurales, ya no sería discutida durante las negociaciones, sino que se dejaría para la discusión en la ANC:

> Al comienzo, digamos, había la expectativa de que en la mesa de negociación pudiéramos colocar una agenda que tuviera que ver con los cambios que necesitaba la sociedad en su estructura económica, en su estructura política para tener una sociedad más democrática, pero eso digamos, rápidamente, sobre todo con la convocatoria de la constituyente, eso se quedó... Nos quedamos sin agenda. Entonces, inclusive la propuesta inicial de Pardo hacia nosotros tres, hacia los tres grupos, es mire, ustedes lo que necesitan es... hagamos un acuerdo exprés, rápido, para que ustedes lleguen bien posicionados a la constituyente y en la constituyente plantean todas las cosas que tengan [...] (Flórez [e.], 2013, p. 6).

Por lo tanto, la ANC se convirtió en el escenario real para abordar la violencia estructural y la lucha contra la injusticia social y política, o por lo menos para sentar las bases para una democracia plural que permitiera atender los problemas por la vía legal. En una de sus primeras intervenciones, José Matías Ortiz, delegado del PRT en la ANC, compartió con sectores mayoritarios de la opinión pública el deseo de que la asamblea "resuelva, o por lo menos abra la vía para lograrlo, los principales problemas" (Ortiz, 1991, párr. 2).

Por su lado, el M-19 había pedido, como parte de su acuerdo de paz con el Gobierno Nacional, una reforma constitucional para ampliar la participación política en Colombia. La convocatoria de una ANC, como tal, no formó parte de la agenda de negociación. Sin embargo, en la medida en que la reforma constitucional pactada se hundió en el Congreso, el movimiento empezó a percibir la ANC como el escenario principal para la negociación de un nuevo acuerdo político. Por esta razón, sus antiguos dirigentes, los cuales ahora lideraron la ADM-19, concentraron sus acciones y recursos en tener éxito en las elecciones para este espacio político (Patiño [e.], 2013).

17 Para más información sobre la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ver Rampf & Chavarro (2014).

Finalmente, el MAQL también vio la ANC como una gran oportunidad para que sus demandas fueran incluidas en el nuevo acuerdo político, como se puede ver en una carta escrita por el MAQL a Monseñor Pedro Rubiano, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia en este momento, en el año 1990, en la cual el grupo hizo hincapié en que la ANC:

> [...] es la oportunidad para que nuestro país corrija sus errores históricos; para que el pueblo realmente se convierta en la esencia de la Nación y ello se plasme en sus instituciones. La Asamblea Constitucional ha de reconocer la variedad étnica del país y valorar el componente indígena del hombre colombiano (MAQL, 1990, párr. 3).

Con esto en mente, el movimiento construyó una alianza con el EPL y el PRT, para negociar en forma conjunta con el Gobierno Nacional y exigir la posibilidad de participar en la ANC.

La experiencia de los desmovilizados en la ANC

Después de haber sacado el segundo número más alto de curules y con Antonio Navarro Wolff como hábil dirigente político en sus filas; desde el principio, la ADM-19 reclamó el liderazgo de las fuerzas alternativas presentes en la ANC. Tanto el EPL, que contaba con dos delegados con voz y voto, como el PRT, con un representante con voz pero sin voto, aceptaron este liderazgo y coordinaron en gran parte sus acciones con la bancada de la alianza, incluso a partir de la activa participación de algunos miembros del EPL y el PCC-ML, en la elaboración del proyecto de constitución de la nueva fuerza política ([ee.] Mejía, 2013; Patiño, 2013). Por su parte, Alfonso Peña Chepe, delegado del MAQL, si bien igualmente buscó en ocasiones el intercambio directo con el movimiento y mantuvo generalmente cierta cercanía programática con los representantes del EPL, estableció, sobre todo, una alianza cercana e informal con los demás representantes indígenas en la ANC (Tattay & Peña, 2013, pp. 173-ss.; Villarraga [e.], 2013).

Dicha dinámica colectiva entre la ADM-19 y los delegados independientes exguerrilleros se mantuvo durante los 150 días de existencia de la ANC. En cierta forma, gracias a que Navarro, como líder de la bancada, convocaba reuniones diarias en las cuales se discutieron las posiciones frente a temas importantes y se coordinaron las intervenciones y el voto del grupo,[18] todos los delegados entrevistados evaluaron la atmósfera al interior de la alianza como productiva y respetuosa.

Al igual que al interior de la bancada de la ADM-19; en general, el ambiente dentro de la ANC se caracterizó por un amplio respeto mutuo. Como destaca Toro ([e.], 2013):

> [...] los miembros de la asamblea teníamos una relación entre nosotros que estaba muy por encima de las diferencias ideológicas y políticas. [Predominaba] el espíritu de consenso, el respeto por el pluralismo, [...] la capacidad de generar el reconocimiento del otro independientemente de que el otro tuviera una postura totalmente contraria a la mía (p. 8).

Esta impresión es compartida por los delegados del EPL. Mejía ([e.], 2013) recuerda, por ejemplo:

> Yo pienso que fue importante en la ANC el que todos habláramos, dijéramos lo que pensábamos y que en ese espacio la gente entendiera que somos un país único con mucha diversidad. O sea, la diversidad que había de pensamiento, de cultura, de hacer, todos éramos muy diferentes, entonces entender eso, yo creo que ese fue un espacio valioso para la época que estábamos viviendo —una época en donde la muerte era una cuestión muy común, la tortura era una cuestión muy común, la desaparición era una cuestión muy común— (p. 13).

A pesar de que en algunos temas las posiciones estaban lejos de ser consensuadas, cada constituyente estaba dispuesto a escuchar los argumentos de los demás. Si bien tal situación se presentó en cierta medida debido a la falta de una mayoría suficiente para imponer la posición de un partido o movimiento (Flórez [e.], 2013),[19] también se alimentó de un profundo sentimiento compartido de hacer algo significativo y de tener en sus manos una oportunidad histórica para reformar el sistema político excluyente criticado por décadas, que unió a todas las diversas fuerzas políticas. Mejía recuerda al respecto el momento en el que Alfredo Vázquez Carrizosa, constituyente de la *Unión Patriótica* (UP), propuso la retirada

18 Sin embargo, a pesar de este intento de lograr la mayor disciplina interna posible, la ADM-19 estableció que en algunos casos los constituyentes de la organización podían votar independientemente de la posición del grupo (Villa [e.], 2013), en la búsqueda de respetar las muy diversas corrientes que integraron el movimiento. De acuerdo con Buenahora (1995), uno de los constituyentes que más desvió su posición de su respectiva bancada con sus votos fue María Teresa Garcés de la ADM-19.

19 Para ser aprobados, todos los artículos tenían que ser aceptados por la mayoría absoluta en primer debate, o una mayoría de dos tercios en el segundo debate.

colectiva de todas las fuerzas de la izquierda de la ANC. Junto a otros representantes de los demás grupos insurgentes desmovilizados, él se negó a hacerlo y argumentó que "toda la vida se había pasado peleando porque la gente necesitaba de espacios, y que ahora que lo lograron, que la constitución tuviera por lo menos espacios de participación ciudadana, [no se] iba a retirar por nada en el mundo" (Mejía [e.], 2013, p. 5).

Retrospectivamente, algunos entrevistados utilizan la imagen de una isla para describir la dinámica al interior de la ANC. Por un lado, esta metáfora se refiere al relativo aislamiento entre los constituyentes y sus electores, o, en el caso de los cuatro delegados de la insurgencia recién desmovilizada, de sus bases. Debido a la restricción temporal de 150 días de la ANC y a la alta carga de trabajo necesaria, la comunicación y la consulta con personas fuera de la asamblea eran casi imposibles. Flórez ([e.] 2013) incluso subraya que muchos desmovilizados del PRT se enteraron de las decisiones de su delegado, principalmente a través de los medios de comunicación.

Por otra parte, Toro ([e.] 2013) contrasta el ambiente productivo de la ANC con el sistema político colombiano cerrado y excluyente. Desde su punto de vista, la ANC era una especie de isla idealista de respeto mutuo y pluralismo en el mar agitado de la *realpolitik* colombiana de los años 80 e inicios de los 90.

> El ambiente ideal de la confrontación política es el espíritu que reinó en la asamblea constituyente. Pero finalmente, eso [...], era una islita. Por fuera de la asamblea, en cierto sentido, el poder real dejó que nos embriagáramos en ese espíritu allá en la asamblea, y ellos siguieron manejando los hilos por fuera (Toro [e.], 2013, p. 8).

> "El ambiente ideal de la confrontación política es el espíritu que reinó en la asamblea constituyente"
> Germán Toro

Muchas anécdotas ilustran esta naturaleza idealista de la ANC, la cual fue capaz de reunir protagonistas que anteriormente se percibían mutuamente como enemigos a muerte y en algunos casos hasta logró crear la base para reconciliaciones individuales. Muestra de ello, es, por ejemplo, la amistad basada en el respeto mutuo desarrollado entre Jaime Fajardo y Darío Mejía, ambos miembros del EPL recientemente desmovilizados, por un lado; y Mariano Ospina Hernández y Álvaro Gómez Hurtado, por el otro lado: dos constituyentes cuyos familiares habían sido asesinados años atrás por el mismo grupo guerrillero ([ee.] Fajardo, 2013; Mejía, 2013). Probablemente, la mejor expresión del ambiente pragmático y constructivo general, independientemente de las diferencias políticas e ideológicas, fue la temprana alianza entre Navarro Wolff, excomandante del M-19, y Gómez Hurtado, líder conservador y miembro de la vieja clase política que había sido secuestrado por el M-19 en 1988. Ambos líderes políticos no solo asumieron conjuntamente la presidencia de la ANC, junto con Horacio Serpa, sino que definieron, en cierta medida, los procedimientos internos de la misma.

No obstante, y más allá de la percepción positiva de haberse sentido aceptados e incluidos, algunos de los excombatientes llegaron a la ANC con cierta sensación de inexperiencia en lo que se refiere al manejo de la política, como destaca Mejía ([e.] 2013). Esto apunta a las dificultades que algunos delegados de repente tuvieron que enfrentar durante su transformación de rebelde a protagonista de la política legal, al competir con políticos profesionales. Respecto a este punto, las entrevistas realizadas para este artículo también llaman la atención sobre una diferencia aparente entre la experiencia de los miembros de la ADM-19 —incluyendo el antiguo M-19 y cuadros civiles del PCC-ML— y los representantes delegados de los grupos recientemente desmovilizados, como el PRT y el EPL. Mientras que los primeros no mencionan ningún problema en relación con su transformación de activistas de una organización clandestina en actores de la arena política legal, los últimos destacan su necesidad de aprender primero el ABC de la política.

> Lo que pasa es que uno si llegó con una idea muy reformadora [a la ANC], de creer que, que lo que nosotros pensábamos iba a salir y uno se encontraba con un fenómeno y es que en la política juegan las alianzas. En la política juegan los compadrazgos, y ésta es una clase política, que tiene ciento cincuenta, doscientos años de experiencia, frente a unos muchachos que venían del campo soñadores, con muchas ideas muy poéticas, con una visión del poder totalmente diferente. Y eso sí, inicialmente lo golpeaba a uno. Pero después uno se daba cuenta que ese es el espacio en el que está, y buscaba las alianzas (Mejía [e.], 2013, p. 13).

Estas distintas experiencias pueden explicarse en parte por el hecho de que el M-19 se había desmovilizado casi un año antes que los otros grupos y ya había participado en elecciones nacionales y regionales al momento de entrar en la ANC, así como por el perfil individual de cada constituyente. Mientras que el excomandante del M-19 Navarro había promovido, desde finales del año 1989 —posterior a una amnistía presidencial—, el proyecto político de la naciente ADM-19 en círculos políticos alternativos al bipartidismo; Mejía, por ejemplo, había sido comandante militar de tiempo completo en el EPL antes de volverse delegado.

No obstante, a pesar de las dificultades iniciales, incluso delegatarios de grupos guerrilleros que se habían desmovilizado poco antes de la ANC comparten con otros constituyentes, más de 20 años después, un sentimiento positivo de haber conseguido muchos puntos de sus respectivas agendas. Aunque todos los entrevistados reconocen que no alcanzaron todos sus objetivos, no perciben que hayan sacrificado algunas demandas por encima de otras. "Yo pienso que no se sacrificaron temas, los temas nosotros los discutimos y defendimos, lo que pensábamos, pero así como hubo cosas en las que nosotros ganamos espacio, hubo cosas en las que otros ganaron espacio" (Mejía [e.], 2013, p. 14). En este sentido, la simple oportunidad de levantarse y defender en la legalidad cuestiones que ellos identificaron como importantes retrospectivamente, ya es reconocida como una victoria en sí misma.

Como resultado, la mayoría de las cuestiones de especial interés de los grupos desmovilizados se plasmaron en la nueva Constitución de 1991. En el caso del EPL, estos temas incluyeron principalmente una restricción constitucional del estado de sitio; el reconocimiento de la diversidad mediante la introducción de los derechos especiales de las minorías; una reforma del sistema de justicia a través de, por ejemplo, el nuevo mecanismo de la tutela para la protección del amplio catálogo de derechos fundamentales; y la apertura de nuevos espacios democráticos de participación política (Mejía [e.], 2013). Según los entrevistados de los cuatro grupos, el único tema importante que no se alcanzó a tocar plenamente fue la reforma del ordenamiento territorial, a pesar de que muchos miembros de la ADM-19 y, en particular, el delegado del PRT José Matías Ortiz, insistieron mucho en este asunto ([ee.] Flórez, 2013; Ortiz, 2014). Aunque la Constitución de 1991 logró incorporar algunas medidas de descentralización, como dar más recursos a los departamentos y municipios y permitir la elección popular de gobernadores, también dejó la especificación legal en manos del Congreso, que solo en 2011 llegó a promulgar la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, después de que casi veinte propuestas legislativas habían sido rechazadas. Ortiz ([e.] 2014) comenta críticamente que "[los Miembros del Congreso] llegaron con una ley que no honraba los principios que establecimos en el proceso constitucional" (p. 6).

No obstante, al evaluar los logros de los grupos guerrilleros desmovilizados en la ANC, desde su propio punto de vista, es esencial hacer hincapié en que los delegados de estas organizaciones apoyaron sobre todo una agenda reformista en lugar de un programa revolucionario. Esto quiere decir que todos los exguerrilleros participantes trataron principalmente las reformas políticas y dejaron de lado reformas al sistema económico en gran medida, un hecho que Villa ([e.] 2013) resalta cuando señala que "como no eran muchas las pretensiones pues tampoco fueron muchas las desilusiones" (p. 12). De esta manera, las agendas se presentaron en línea con la tesis del Gobierno de que las transformaciones económicas y sociales quedarían para después, para el debate democrático (Flórez y Valenzuela 1996; Wills, 1993, pp. 171-ss.).

En general, la bancada de la ADM-19 y su líder Navarro, en especial, evitaron tocar algunos temas sensibles (como, por ejemplo, la cuestión de una reforma de las Fuerzas Armadas), para no causar conflictos dentro de la ANC, pese a que sí ocurrió el debate al respecto. Dicha postura con frecuencia creó inconformidad en sectores de izquierda dentro y fuera de la ANC y la posición de la bancada fue calificada como conciliadora pero no satisfactoria (Villarraga y Plazas, 1994, pp. 454-ss.; Ortiz [e.], 2014).

A pesar de este balance, en gran medida positivo, algunos de los protagonistas entrevistados admiten retrospectivamente dos "errores históricos" (Fajardo [e.], 2013) de la ANC. Por un lado, los constituyentes subestimaron el impacto negativo tanto de los grupos narcotraficantes, como de los paramilitares, quienes en cierta forma se beneficiaron de las instituciones reformadas. Una muestra de ello es que la elección pública de los

gobernadores y alcaldes no solo amplió la democracia, sino que también abrió la puerta para una cooptación de las instituciones del Estado a nivel regional a través del fenómeno de la parapolítica (Fajardo [e.], 2013). Por otra parte, el Pacto de la Casa de Nariño, que inhabilitó a los constituyentes para la nueva elección del Congreso, es percibido como una medida que afectó negativamente la posterior implementación y el desarrollo legal de la nueva Constitución.[20]

Desde el punto de vista de muchos entrevistados, debido a estos errores, la ANC no cumplió con su ambicioso intento de cambiar las reglas del juego político colombiano, con respecto a erradicar la corrupción y el clientelismo ([ee.] Fajardo, 2013; Flórez, 2013; Mejía, 2013). Patiño ([e.] 2013) argumenta, además, que la ANC debía haber bloqueado las reformas constitucionales durante un período de tiempo específico después de la firma de la nueva carta política. De acuerdo con el excomandante del M-19, tal disposición habría dado al acuerdo político recién codificado, el tiempo necesario para consolidarse. Por otra parte, las fuerzas políticas emergentes no pudieron competir con éxito con los partidos tradicionales y establecer una verdadera tercera fuerza política alternativa al bipartidismo. Esa experiencia de fracaso se describe en la última sección, a modo de ejemplo, sobre el proyecto político ADM-19.

La experiencia de los grupos exguerrilleros después la ANC: El caso de la ADM-19

La inclusión como idea rectora

Desde su amnistía presidencial a finales de 1989, Pizarro y Navarro Wolff promovieron, desde la legalidad, un proceso que buscó la creación de un movimiento unificado de diversas fuerzas políticas ajeno al bipartidismo. Los primeros acercamientos con *Colombia Unida, Socialismo Democrático* y otros movimientos llevaron, finalmente, en los últimos días de marzo de 1990, a la fundación de un:

> [...] movimiento unificado nacionalmente [con el objetivo de] transformar la actual situación y donde, además, exista la convicción plena de que en la Colombia de hoy las vías civilista y los métodos de la democracia sean los únicos válidos para el ejercicio de la acción política (ADM-19, 1990, párr. 6).[21]

Como reacción al asesinato de Pizarro, pocos días después, y como expresión de solidaridad con el grupo desmovilizado por parte de los demás integrantes, la alianza cambió su denominación de AD en ADM-19 (Villarraga, 2013, pp. 46-ss.).

En línea con la anterior postura del M-19, que, al seguir la receta de un sancocho nacional de su histórico líder Jaime Bateman, había insistido en amplios espacios de participación durante su negociación de paz, desde su creación, el naciente proyecto político encarnaba su principio fundamental: la inclusión. Ya en las elecciones del 11 de marzo de 1990, solo dos días después de la desmovilización del grupo insurgente, el grupo *Acción Nacionalista por la Paz*, liderado por el mismo M-19, había enviado al país un mensaje de reconciliación tras la inclusión del general retirado José Joaquín Matallana como cabeza de su lista para el Senado. Especialmente, en la preparación de la ANC, la ADM-19 se adhirió a su declarado proyecto de formar un movimiento tan amplio como fuera posible para luchar contra el "reino de la exclusión" (Patiño [e.], 2013) de los dos partidos políticos tradicionales. Al invitar a otros movimientos de izquierda,[22] incluidos los tres grupos guerrilleros que en ese momento adelantaban negociaciones con el Gobierno, el partido intentó enviar un mensaje de unidad de la izquierda colombiana tradicionalmente dividida (Toro [e.], 2013). Por otra parte, la invitación a fracciones reformistas de los partidos tradicionales buscó, al mismo tiempo, romper con la marginalidad histórica de la izquierda y acercar más a

20 Si hay algo que puede ser percibido como una desventaja, desde el punto de vista de los entrevistados, es la decisión de incapacitar a los constituyentes para las próximas elecciones al Congreso ([ee.] Patiño, 2013; Villa, 2013). Algunos destacan también que esta decisión particular descansaba principalmente en manos de Navarro (Patiño [e.], 2013).

21 Firmantes de la declaración fueron: *la UP, el M-19, la Acción Nacionalista por la Paz, Colombia Unida, Socialismo Democrático, el Frente Democrático, el Frente Popular, los Inconformes de Nariño y el Frente Amplio de Magdalena Medio.*

22 Además de algunas facciones de la UP, otros movimientos de izquierda, como, por ejemplo, *Colombia Unida, Frente Popular, Movimiento Inconformes, Partido Socialista Revolucionario y Socialismo Democrático* se unieron al ADM-19.

la ADM-19 al centro político. El proyecto aspiró a dejar atrás el prejuicio de ser un vehículo de la insurgencia y convertirse en el lugar de una alianza de los reformistas, dispuestos y capaces de resolver la crisis política. "El que buscaba el cambio tenía que evitar, precisamente, oler demasiado a guerrillero" (Patiño [e.], 2013, p. 14).

> "El que buscaba el cambio tenía que evitar, precisamente, oler demasiado a guerrillero"
> Otty Patiño

Ambas estrategias se reflejaron en la composición de la lista de la ADM-19 para las elecciones de la ANC en diciembre de 1990 y de la bancada del partido en la misma. Además de excomandantes del M-19, como Otty Patiño y Antonio Navarro Wolff, la lista asimismo incluyó miembros del PCC-ML, como Germán Toro, integrantes del Partido Conservador y Liberal, e incluso, el entrenador apolítico pero muy popular de la selección nacional de fútbol, Francisco Maturana. Igualmente, con la decisión, internamente criticada, de incorporar en el mensaje de inclusión y reconciliación, con Augusto Ramírez Cardona, a un representante del paramilitarismo del Magdalena Medio, se rompió claramente con el marco de la izquierda (Toro [e.], 2013).

Al igual que anteriores divergencias respecto a la decisión de entablar conversaciones con el Gobierno, desacuerdos respecto a la relación pretendida entre el EPL desmovilizado y la ADM-19 caracterizaron el debate interno justo antes y después de la desmovilización del EPL. Si bien un consenso general compartió la percepción de importancia de un mensaje de unidad de la izquierda del M-19 y el movimiento *Esperanza, Paz y Libertad* —lanzado el 4 de abril de 1991 en Medellín—, inicialmente no se pretendió un proyecto político propio y alternativo de la organización; la manera de ingresar al nuevo movimiento político se convirtió rápido en el centro del debate entre antiguos cuadros del EPL y PCC-ML.

Mientras que muchos de los antiguos cuadros de bajo rango del EPL vieron la propuesta de vincularse plenamente a la ADM-19 con una mirada crítica —por lo que rechazaron, especialmente, la aparición del "M-19" en el nombre del proyecto político común, y con ello, debido a temores de una posible dominación interna por los líderes del M-19 (Uribe, 1994)—; no obstante, una tendencia mayoritaria vio dicho escenario con buenas ojos. Por lo menos en algunos sectores del EPL y el PCC-ML, unirse a un proyecto político bajo la bandera del más pequeño M-19[23] fue visto como la continuación del camino ya recorrido por el *Frente Popular*, que fue uno de los fundadores de la ADM-19 y, sobre todo, como el resultado de un cálculo político simple. Además de compartir la convicción de la importancia del símbolo de unidad con el ex M-19, ellos percibieron positivamente la imagen pública de dicho grupo y esperaron obtener una representación adicional en la ANC (además de los dos delegados del EPL acordados en el acuerdo de paz), mediante la inclusión de miembros del PCC-ML en la lista de la ADM-19 ([ee.] Fajardo, 2013; Mejía, 2013; Toro, 2013). Convencidos de que el fin justifica los medios, la etiqueta del M-19 no fue percibida como un problema, sino, más bien, como una fuerza motriz que animaba su entrada a la política nacional.

> Cuando lideramos el proceso de desmovilización, la decisión del partido que la democracia era lo fundamental no lo hicimos, pensando que nosotros éramos el ombligo del mundo ni que todos tenían que venir a sumarse a nosotros. Nosotros nos sumábamos o que construíamos una fuerza común entre todos los sectores progresistas y democráticos (Toro [e.], 2013, p. 11).

Dentro de esta fracción mayoritaria,[24] que defendió la propuesta de vincularse con la ADM-19, aparecieron, sin embargo, dos posiciones divergentes. Mientras que una argumentó en pro de una disolución e integración inmediata, la otra optó por una transición larga en una tendencia organizada dentro de la alianza (Villarraga & Plazas, 1994, pp. 457-ss.). Esta última entendió la ADM-19 más como una coalición amplia de diversas fuerzas políticas y desconoció con ello, hasta cierto punto, la visión de la misma, la cual no se proyectó como "una federación de grupos, sino [como] un movimiento unificado" (El Tiempo 1990, párr. 6).

Después de que la IV Plenaria de la dirección nacional de *Esperanza, Paz y Libertad* había aprobado, el 14 de abril 1991, que el movimiento hiciera parte de la ADM-

23 Según Uribe (1994), el número de guerrilleros combatientes desmovilizados del M-19 y EPL ascendió, respectivamente, a 791 y 2.149.

24 Una facción minoritaria optó por mantener la independencia de Esperanza, Paz y Libertad.

19, pero igualmente votado en contra de una disolución en la misma, la declaración de la VI reunión plenaria nacional pronunció, finalmente, también tras la presión de Navarro,[25] la decisión de disolver el movimiento en la ADM-19.

Por su parte, sobre todo la dirección del PRT percibió la adhesión del partido a la ADM-19 no solo como una manera de subirse al carro ya arrancado con éxito del M-19, sino también como una manera de continuar con su reivindicación tradicional de la unidad de las fuerzas alternativas. Así mismo, por sus vínculos cercanos con *Colombia Unida*, fundador de la alianza, el partido había acompañado la trayectoria del nuevo movimiento desde cerca. No obstante y como en el caso del EPL, tampoco faltaron sectores dentro del PRT que expresaran preocupaciones. Si bien estos no se opusieron a la disolución del PRT en la ADM-19 per se, sí resaltaron el peligro de que la organización podía perder su identidad política y, por ente, sus vínculos con su base social (Rampf et al., 2014, pp. 19-20).

Dichas preocupaciones se comprobaron cuando algunos segmentos del antiguo M-19, en torno a Navarro y Vera Grabe, tomaron la decisión de disolver todas las estructuras y las fracciones de antiguos grupos guerrilleros dentro del movimiento con el fin de unificarlo, (Patiño [e.], 2013). Esta decisión confirmó, hasta cierto punto, la sospecha de que la percepción de supremacía de los miembros del M-19 podría resultar en una pérdida de la identidad propia en otros grupos. Varios entrevistados de otras guerrillas (como Flórez del PRT o Mejía del EPL) resaltan como error este cambio, como se argumentará más adelante.

Ascenso y declive

Con su estrategia amplia e incluyente, al permitir y buscar la participación de todos los movimientos de la izquierda, de políticos y progresistas interesados, incluso de las élites tradicionales,[26] y al beneficiarse tanto del aire favorable producido por los procesos de paz[27] como del apoyo electoral de muchos colombianos frustrados, el nuevo partido comenzó su experiencia exitosa (al menos inicialmente) en la política colombiana. En 1990, se postuló para las elecciones presidenciales. Navarro Wolff, quien substituyó al carismático candidato presidencial Pizarro, terminó tercero (12,5 %) y tomó el cargo de Ministro de Salud en el Gobierno Gaviria. Medio año después, la nueva fuerza política ganó 26,7 % del total de sufragios emitidos en las elecciones de la ANC y se convirtió en la segunda bancada más amplia después del Partido Liberal. La ADM-19 parecía tener excelentes perspectivas de consolidarse como alternativa política a largo plazo para el bipartidismo.

Sin embargo, después de los favorables resultados en las elecciones de Congreso en 1991, en las cuales el partido ganó nueve curules en el Senado y 13 para la Cámara de Representantes, en las siguientes elecciones al Congreso del año 1994, la ADM-19 solo ganó un puesto en la Cámara y no logró obtener una sola curul en el Senado. El mismo año, Navarro claramente perdió la carrera por la presidencia mediante la recepción de menos del 4 % de los votos (Dirección General Para La Reinserción, 2000, p. 101). Una vez más, el bipartidismo logró conservar su hegemonía tradicional. Los dos partidos tradicionales ganaron, en las tres elecciones al Senado celebradas entre 1991 y 1998, un resultado electoral estable con alrededor del 80 % de los curules. El resto se distribuyó entre un máximo de 13 movimientos y partidos alternativos diferentes (Pizarro, 2002). La idea de una oposición unida ajena al bipartidismo y el establecimiento de una fuerza política alternativa coherente parecían ser más que nunca un sueño utópico.

Al analizar las causas de este descenso electoral inesperado de la ADM-19, Toro ([e.] 2013) llega, retrospectivamente, a la dura conclusión de que: "aquí no ha prosperado [...] un mayor pluralismo político por la incapacidad de

25 Según Villarraga y Plazas (1994, p. 462), Navarro había afirmado anteriormente en varias reuniones que "el problema de la Alianza son ustedes, pues no se disuelven y donde voy me los encuentro con banderas, camisetas y grupos de activistas propios del EPL. Como si la ADM-19 fuera un frente de izquierda, reclamando participaciones de grupo, sin entender que la gran mayoría de la gente quiere es al M-19".

26 Al igual que en las elecciones de la ANC, la lista del partido para el Congreso en 1991 también incluyó, además de veteranos del M-19 y antiguos miembros del EPL y PRT, varios políticos del Partido Liberal y Conservador, sindicalistas y empresarios (Dirección General Para La Reinserción, 2000).

27 Muchos colombianos asociaron positivamente el ADM-19 con los acuerdos de paz que acababan de ser firmados entre el Gobierno y el M-19, EPL, PRT y MAQL. Para muchos votantes del ADM-19, el partido representaba una elección a favor de una salida negociada del conflicto armado.

sectores que debíamos haber sacado ventaja de todo el proceso constituyente" (p. 8) y explica, en línea con estudios de corte académico sobre el caso de la ADM-19,[28] el fracaso traumático del proyecto político incluyente, no solo por factores externos, sino explícitamente también por errores internos.

> "Aquí no ha prosperado (...) un mayor pluralismo político por la incapacidad de sectores que debíamos haber sacado ventaja de todo el proceso constituyente"
> Germán Toro

En este sentido, y respecto a los factores externos, vale la pena resaltar primero que la nueva Constitución de 1991 y otras reformas cambiaron el sistema electoral hasta cierto punto en favor de fuerzas políticas menores o nacientes, a pesar de que se habían hundido en el Congreso puntos importantes del acuerdo de paz con el M-19, que hubieran asegurado una favorabilidad electoral para el grupo desmovilizado. Aparte de acabar con el sistema tradicional de tarjetones repartidos por cada partido, estas reformas crearon, por ejemplo, un solo distrito electoral para las elecciones al Senado, lo que junto con el sistema electoral proporcional tiende a favorecer, o al menos a no desfavorecer, a fuerzas políticas pequeñas sin bases locales fuertes (Moreno, 2005; Pizarro, 2002).

Adicional a estos factores externos de corte más institucional, se sumaron, al menos a inicios de los años 90, otros que crearon, según Zuluaga (1999), una base propicia para el nuevo movimiento ajeno a la élite política tradicional (pp. 59-ss.). Mientras que las instituciones y partidos confrontaron una profunda crisis de legitimidad, la ADM-19 entró como actor nuevo e independiente a una arena política caracterizada justamente por la ausencia de una fuerza política alternativa.

Sin embargo, a pesar de esta posición inicial favorable, el entorno político de los inicios de los años 90 se volvió gradualmente desfavorable para el nuevo partido político. Por un lado, la élite política tradicional y el bipartidismo mostraron una impresionante habilidad de adaptarse a las nuevas reglas del juego y de recuperar su hegemonía política, después de que la elección para la ANC había creado en muchos colombianos la impresión precipitada de un cambio de las relaciones de fuerzas (Pizarro, 2002). Tal restauración del predominio de los partidos tradicionales hizo evidente que la nueva Constitución no había logrado cambiar las matrices excluyentes de la cultura política. En tal contexto, la ADM-19 siguió en una competencia desigual, al tener que confrontar a un adversario respaldado por su maquinaria electoral, el clientelismo y superiores fondos para la campaña electoral.

Por otro lado, las primeras elecciones, posteriores a la ANC, se encontraron empañadas por una difícil coyuntura nacional, caracterizada por la agudización de la violencia (del narcoterrorismo y el incrementado conflicto armado) y un colapso parcial del Estado. Tal situación afectó el nuevo movimiento democrático primordialmente en dos sentidos: Primero, la ADM-19, que había encarnado, para muchos, un cambio político deseado más que cualquier otra fuerza, se vio obligada a experimentar la disminución de su respaldo público, debido a un cambio de ánimo en el país. La euforia de inicios de la década, nutrida por la ANC y los procesos de desmovilización, que aspiró a la paz y a una reforma del sistema político, se transformó en una sensación de desilusión, causada por la continuidad del conflicto armado y por los primeros impactos sociales de la política neoliberal del Gobierno Gaviria.

Durante el cambio de la coyuntura —que previamente había pasado de una euforia nutrida por la ANC en pro de la paz, a la reforma constitucional y los procesos de desmovilización, a una sensación de desilusión causada por la continuidad del conflicto armado y por los primeros impactos sociales de la política neoliberal del Gobierno Gaviria— disminuyó el respaldo público para la ADM-19, la cual, había encarnado, para muchos, este deseo de cambio más que cualquier otra fuerza. Segundo, la incrementada violencia política afectó a líderes políticos y sociales en general y a los grupos desmovilizados en especial (Zuluaga, 1999). Al respecto, Fajardo ([e.] 2013) subraya, por ejemplo, que: "Todos tuvimos amenazas permanentes [...] bueno este es el costo de venir a hacer la paz" (p. 14).

La dimensión del factor externo de ausencia de garantías de seguridad para los actores en transición a la polí-

28 Ver sobre todo Boudon (2001), Villarraga (2013), Zuluaga (1999).

tica legal, la resalta Flórez ([e.] 2013), al referirse al caso del PRT:

> [En] este proceso tan traumático de reinserción, fueron muy pocos los que en este ambiente tan riesgoso optaron por lanzarse [a la política]. Por ejemplo ahí [...] en Bolívar tuvimos un caso, en San Jacinto, donde lanzamos una lista al consejo y eran ocho personas y mataron siete. Solo quedó uno vivo. El alcalde de Chalán lo mataron. Otro compañero que tuvimos como candidato al consejo de Sincelejo lo mataron. En San Marcos nos mataron otros dos. Entonces eso produjo un rechazo. [...] Las familias empezaron a decirle a la gente que no se metiera en política, por un criterio de supervivencia, de supervivencia personal (p. 9).

Como reacción a las permanentes amenazas de muerte y a la ola de asesinatos, muchos desmovilizados salieron de la política, o incluso del país, como en el caso de Bernardo Gutiérrez, excomandante del EPL y elegido senador de la ADM-19.

Respecto a los factores internos que, según algunos protagonistas de la ADM-19, jugaron un rol aún más importante que los factores externos en el declive gradual del partido después de la ANC ([ee.] Flórez, 2013; Toro, 2013; Villa, 2013), los entrevistados resaltan una serie de errores, centrados tanto en el enfoque incluyente y reconciliador de la alianza como en su afán de conseguir, a corto plazo, resultados positivos en las elecciones, basados en lo que Zuluaga (1999) identifica como "la creencia de estar en el umbral del poder" (p. 41).[29] Todos coinciden en señalar estos factores, de alguna manera, como la causa de la disolución del contorno del perfil político de la ADM-19. Si bien la fundación del partido se había basado sobre un acuerdo que definió la paz, la reconciliación y la democracia, como ejes centrales de la plataforma política inicial; posteriormente, dichos conceptos nunca fueron concretados en un programa político preciso (Villarraga [e.], 2013; Zuluaga, 1999, pp. 36-ss.).

> "Todos tuvimos amenazas permanentes (...) Este es el costo de venir a hacer la paz"
> Jaime Fajardo

Por un lado, la elaboración de esta plataforma política sólida fue obstaculizada por la agenda electoral apretada, la cual dictó el ritmo del partido después de la ANC. En un plazo de solo cuatro años, la ADM-19 se lanzó a siete elecciones[30] y entró básicamente en una campaña electoral permanente. Sobre todo después de que la ANC había tomado la decisión de inhabilitar a los constituyentes para las elecciones para la reconvocatoria del Congreso en octubre 1991, cuando el partido solo tuvo tres meses para organizar su campaña electoral y reemplazar sus cabezas carismáticas y populares en sus listas para las dos cámaras. En esta dinámica inquieta, la tarea de definir las líneas programáticas con frecuencia pasó al segundo plano. Mientras que Boudon (2001, p. 77) atribuye esta situación, principalmente, al carácter pragmático general de Navarro. Villarraga ([e.] 2013) y Flórez y Valenzuela (1996) van aún más lejos y argumentan que muchos de los antiguos miembros del M-19 simplemente subestimaron la importancia de una base programática bien elaborada. Justamente debido a esta postura, muchas conferencias programadas con el propósito de superar la elasticidad ideológica del movimiento fueron aplazadas por compromisos de campañas electorales supuestamente más urgentes (Villarraga [e.], 2013; Zuluaga, 1999, p. 50).

Igualmente, la prisa por obtener éxitos a corto plazo desvió la atención de la importancia de construir una estructura interna eficiente que permitiera mantener, por un lado, a sus miembros en línea y, por el otro, la influencia de los procesos de decisión internos de manera democrática de abajo hacia arriba. Esta omisión se volvió espinosa sobre todo ante la ola de oportunistas que, atraídos por los éxitos electorales del inicio, entraron al partido en los primeros años de su existencia.

Mientras que la opinión pública en general esperaba que el resultado electoral del partido fuera elevado, especialmente debido al resultado abrumador de las elecciones para la ANC, la alianza tenía poco tiempo y ningún mecanismo adecuado para filtrar los candidatos en función de su compromiso real con el ambicioso proyecto

29 Según Zuluaga (1999, pp. 40-ss.) esta convicción de estar a punto de tomarse el poder constituye una herencia directa del M-19 e incidió en la "conducción política [de la ADM-19] y determinó en muchos aspectos su comportamiento ambiguo entre la oposición al Gobierno y colaboración" (p. 40).

30 Elecciones presidenciales de 1990 y 1994, elección de la ANC 1990, elecciones al Congreso 1991 y 1994 y elecciones regionales en 1992 y 1994.

político antes de añadirlos a la lista del partido.[31] En este momento, muchas personas entraron al mismo, principalmente en búsqueda de una carrera política y con un interés limitado en contribuir al desarrollo del proyecto político como tal (Patiño [e.], 2013).

> Eso era una locura, mejor dicho la sede, la ADM... eso llegaba gente y gente, gente, porque pensaban que íbamos a tomarnos el cielo con las manos y que eso la gente iba a votar así casi sin haber campaña. Entonces había gente que estaba segura que íbamos a sacar 30, 40 congresistas y estaban felices de que hayan puesto 25, puesto treinta, eso casi no les importaba, digamos después del puesto 30 para abajo todo el mundo estaba feliz (p. 13).

En noviembre de 1991, Navarro lanzó finalmente el primer intento real de construir una estructura de organización interna mediante la creación de una dirección nacional y un comité ejecutivo, aunque sin mucho éxito (Boudon, 2001, p. 80). En los siguientes meses la nueva estructura no logró la unificación de los diversos grupos regionales e ideológicos, ni tampoco sentó las bases para una comunicación fluida entre el partido y su bancada en el Congreso, lo cual habría asegurado una actuación más coherente ([ee.] Flórez, 2013; Patiño, 2013; Villa, 2013). Mientras que en la ANC, la disciplina de grupo dentro de la bancada había presentado cierta novedad en el manejo de la política del país, tal dinámica se perdió en el Congreso después de las elecciones de 1991 totalmente. Excepto en algunos asuntos puntuales, los diputados del partido no lograron coordinar sus acciones ni forzar proyectos realmente significativos en nombre de la ADM-19 (Zuluaga, 1999, pp. 51 y ss.).

Al reflexionar sobre las razones de los desastrosos resultados de las elecciones al Congreso en 1994, el propio Navarro explicó el declive del ADM-19 justamente con esta pérdida del espíritu colectivo dentro del partido. En una entrevista, luego de las elecciones, subrayó problemas serios de liderazgo que de alguna manera llevaron a una pérdida de control de la dirección nacional sobre la bancada del partido en el Congreso. El partido fue incapaz de asegurar una acción colectiva coherente y, por lo tanto, perdió gradualmente su imagen pública de unidad (Navarro, 1994).

> Lo que ocurrió fue una disolución del espíritu colectivo. Allí empieza la disolución orgánica el resultado de 1994 es su consecuencia. No hubo espíritu, ni pensamiento, ni un accionar colectivo. La cultura política tradicional de los jefes de grupo se impuso. Nuestra gente empezó a replicar el método de que cada uno era el jefe de un pedacito del movimiento y perdimos la potencialidad de actuar colectivamente (Navarro, 1994, p. 60).

Más allá de no ser coherente y no crear una imagen de unidad ni de línea de acción clara, las acciones del partido tampoco lograron canalizar los intereses y preocupaciones de los diversos integrantes de la alianza y sus respectivas bases en un catálogo programático con propuestas concretas. En las palabras de Zuluaga (1999), "se aumentó la distancia con los sectores populares [hasta tal punto que] la ADM-19 pareció olvidar la existencia de los pobres y de los excluidos a cuyo favor había empuñado las armas el M-19 veinticinco años atrás" (p. 52). Al tratar de explicar esta falencia, algunos entrevistados destacan críticamente la falta de una estructura organizativa efectiva y, particularmente, la carencia de espacios democráticos para la retroalimentación desde abajo de decisiones tomadas por la dirección o la bancada. Según Flórez ([e.] 2014) y Ortiz ([e.] 2014), al interior de la ADM-19 prevaleció, en este entonces, una estructura estrictamente vertical concentrada en su líder, Navarro, cuya hegemonía se volvió gradualmente en una forma de autoritarismo. Aunque la alianza desde el inicio fue incluyente respecto a la selección de sus integrantes, el movimiento se mantuvo así, durante toda su existencia, excluyente en relación con la posibilidad de influenciar la toma de decisiones y de definir la línea política.

Más allá de la carencia de un perfil propio y propuestas concretas frente a problemas vigentes, que hubieran permitido una delimitación positiva, el partido perdió, además, la posibilidad de perfilarse de manera negativa frente a los partidos tradicionales por su participación en el Gobierno;[32] por la inclusión de políticos de los partidos tradicionales en sus listas y por varias coaliciones electorales. Mientras que la participación del partido en el gabinete de Gaviria impidió, de cierta forma, recurrir al rol de una oposición critica del Gobierno y se convirtió en una desventaja, sobre todo cuando el presidente for-

31 En esta agitada y difícil situación, Navarro, como un líder pragmático, supervisó la selección de nuevos miembros y la composición de la lista de candidatos.

32 Por el lado positivo, la participación en el Gobierno brindó a la nueva fuerza política la oportunidad de mostrarse capaz de gobernar y eliminar prejuicios de que movimientos políticos provenientes de grupos desmovilizados representaran un peligro para la democracia (Flórez y Valenzuela 1996; Zuluaga 1999, pp. 41-42).

zó la aplicación de impopulares reformas neoliberales, propuso una reforma fiscal y apuntó cada vez más hacia una solución militar al conflicto armado con los dos grupos guerrilleros restantes, FARC y el ELN —una línea política que ni la ADM-19 ni su electorado aprobaron—; los últimos dos puntos complicaron la disociación del movimiento con la élite política tradicional en general.[33] Igualmente, aunque al inicio Navarro había logrado diferenciarse del manejo administrativo tradicional y proyectar una imagen de lucha contra la corrupción, esta nueva ética se vino perdiendo gradualmente hasta el punto de que el Ministerio, para los líderes del partido, también se volvió un simple fortín burocrático (Flórez y Valenzuela, 1996).

Al seguir el espíritu de consenso de la ANC y con el fin de asegurar resultados electorales positivos y alcanzar cargos políticos a corto plazo, el partido, y su líder Navarro, quien aspiró personalmente a la presidencia en 1994, forzaron coaliciones políticas que se volvieron un estorbo para su perfil de fuerza alternativa. En particular, durante las elecciones regionales de alcaldes, consejeros y gobernadores en 1992, la ADM-19 estableció una serie de pactos con barones regionales del bipartidismo y grupos económicos que desdibujaron aún más los límites entre el partido y las élites tradicionales. Un ejemplo fue la alianza electoral con Carlos Albornoz, candidato del partido Conservador en Nariño, con el objetivo de ganar apoyo político para el candidato propio, Raúl Delgado. Gabriel Barrios ([e.] 2014), desmovilizado del PRT y exconcejal de San Juan de Nepomuceno (Bolívar), recuerda, para el caso de su municipio, incluso acercamientos entre la dirección de la ADM-19 y reconocidos promotores regionales del paramilitarismo con el fin de conseguir apoyo para el candidato del partido al consejo municipal. Dos años más tarde, el propio Navarro describió algunas de estas coaliciones como graves errores tácticos. De acuerdo con él, sobre todo la proximidad a Pedro Bonnet, miembro del grupo económico Santo Domingo, había creado la impresión de que la ADM-19 había sido "entregada a las fuerzas tradicionales de la economía del país" (Navarro, 1994, p. 60).

33 Después de haber cambiado dos veces la persona en el cargo, la ADM-19 se retiró en 1992 finalmente de la cartera a manera de protesta frente a la guerra integral, declarada por el Gobierno.

En el cambiante contexto colombiano de la década de 1990,[34] y sobre todo después de las elecciones de 1991, la ADM-19 finalmente pagó el precio de sus errores estratégicos. Sin ninguna base social, cultural, religiosa o étnica, con una muy vaga plataforma ideológica, y sin un programa político más allá de los simples principios de la inclusión, la democracia y la paz, el partido dependió principalmente de votantes indecisos que fueron atraídos por el carisma de candidatos individuales[35] o cuestiones coyunturales[36] (García, 1994). Después de haber conducido inicialmente, en una ola de expectativas eufóricas, a una salida negociada del conflicto y una solución a la crisis política, de una forma estrechamente vinculada a la popularidad de su líder Navarro, la ADM-19 se vio ante la falta de un apoyo social leal una vez el conflicto armado se intensificó y se destacó la falla de la nueva Constitución como un pacto de paz. A partir de entonces, se disminuyó la presencia de Navarro en los medios de comunicación significativamente.[37]

Al reflexionar sobre esta difícil situación, algunos antiguos miembros del EPL y el PRT consideran, retrospectivamente, como un error clave, la decisión de disolver las estructuras y de romper con las identidades políticas de los diversos integrantes de la alianza. Por ejemplo, desde el punto de vista de Mejía ([e.] 2013), mediante la destrucción de la identidad común del EPL, el ADM-19 había "destruido algo que a futuro podía ser un nuevo movimiento" (p. 15) y rompió finalmente el enlace con

34 Especialmente, el ambiente eufórico de optimismo de principios de 1990, que fue particularmente basado en las expectativas de que la ANC y los acuerdos de paz alcanzados podrían dar lugar a un verdadero cambio político y a la paz estable, fue roto por las negociaciones de paz fallidas con los grupos guerrilleros restantes, por un número creciente de víctimas, debido principalmente a los grupos paramilitares, y por la constatación de que una nueva Constitución no transforma automáticamente la cultura política.

35 Otty Patiño, como una cuestión de hecho, se refiere al ADM-19 en algunas ocasiones como "navarrismo" (Patiño [e.], 2013).

36 Basada en la experiencia reciente, de resultados positivos de las negociaciones de paz con el M-19, EPL, PRT MAQL, durante las elecciones de 1991, estas cuestiones individuales consistieron principalmente en la esperanza de un final negociado del conflicto armado.

37 Mientras Patiño señala críticamente una campaña sistemática pública emprendida por las élites tradicionales con el objetivo de difamar el prestigio de Navarro después de la ANC (Patiño [e.], 2013), Villa también menciona el cada vez más difícil acceso a los medios de comunicación en el contexto cambiante. Según él, los diferentes procesos de paz que inicialmente aseguraron presencia en los medios de comunicación, luego, cuando la atención se centró en otros temas, fue erróneamente dado por sentado (Villa [e.], 2013).

las bases sociales que algunos de sus integrantes habían estado construyendo y atendiendo en algunos casos durante más de 20 años. Dado el dominio de un enfoque nacional, promovido por Navarro, que tendió a desatender características regionales, el partido desaprovecho claramente el capital político acumulado por algunos de sus integrantes en las regiones. La mejor muestra de esto fue la práctica de la dirección nacional de imponer candidatos poco conocidos en la región de los Montes de María, por encima de antiguos líderes locales del PRT, los cuales contaban, por su parte, con un buen reconocimiento en sus municipios (Rampf et al., 2014, pp. 19-ss.).

Adicionalmente, y también debido a la falta de una fuerte organización interna, la dirección del partido no pudo evitar el distanciamiento de los grupos heterogéneos dentro del ADM-19 después de 1991 (Patiño [e.], 2013). Si bien la comunicación y la coordinación eran escasas, muchos de sus líderes regionales fueron tomando poco a poco una vida por su cuenta bajo la bandera del ADM-19.[38] Especialmente, la decisión del partido de abandonar la práctica de presentar las listas de candidatos unificados en 1992 fortaleció aún más las deserciones y divisiones internas (Boudon, 2001). Flórez ([e.] 2013) recuerda que "cada sector de la Alianza que tenía mayor peso en una región generaba su propio liderazgo, hacía sus propias listas y entraba en choque con los demás" (p. 12). Toro ([e.] 2013) incluso señala críticamente que, al no crear una verdadera cultura de disciplina, la ADM-19 copió la misma cultura política que había criticado anteriormente y, destaca así, la tendencia del partido hacia el establecimiento de sus propios barones políticos, microempresas electorales y redes clientelistas.

Incapaz de asegurar la cohesión interna, y de evitar que en algunos casos fracciones regionales salieran de la ADM-19, el partido tuvo que aceptar que el proyecto de unificación de los sectores políticos alternativos de la política colombiana y su enfoque incluyente había fracasado.

Una vez en competencia abierta con el Partido Liberal y el Conservador y con sus maquinarias, la ADM-19 tuvo que lidiar con sus limitados recursos financieros y logísticos. En especial, luego de que el apoyo inicial del Estado, que fue parte de cada acuerdo de paz,[39] fuera gastado, la base financiera de las campañas electorales fue más que apretada, como algunos excandidatos del partido lo recuerdan ([ee.] Flórez, 2013; Toro, 2013; Villa, 2013). El acuerdo único de una circunscripción electoral especial para la paz en las elecciones locales de 1994, en el que solo los insurgentes desmovilizados podrían ser elegidos, no fue suficiente para contrarrestar esta desventaja.

Conclusión

Al comparar las expectativas políticas de antiguos grupos guerrilleros, su participación en la ANC y su éxito limitado en la política posterior,[40] uno tiende a preguntarse por qué estos grupos nunca cuestionaron su decisión de poner fin a la lucha armada y entrar en la política legal. Si la Constitución incluyente de 1991 nunca fue realmente capaz de cambiar la cultura política excluyente del país, y si la oposición armada desmovilizada fracasó en gran parte al adoptar una postura colectiva legal de oposición política, ¿por qué nunca hubo una recaída en la lucha armada por parte de estos grupos?

El caso de la ADM-19 ofrece algunas lecciones aprendidas para hacer frente a esas cuestiones: en primer lugar, para la mayor parte de los exinsurgentes entrevistados, el solo hecho de haber sido incluidos en la ANC es suficiente para mirar hacia atrás con sentimientos positivos y para identificarse con la Constitución de 1991 como su constitución. Aunque muchos de los entrevistados ofrecen una evaluación más bien negativa de la aplicación de la nueva Constitución y hacen hincapié en el hecho de que nunca

38 Teniendo en cuenta esta tendencia Navarro criticó en 1994 el hecho de que importantes victorias electorales locales no habían sido transformadas en bastiones políticos del partido. Refiriéndose a Barranquilla, la ciudad más grande de Colombia en la costa del Caribe, expresó: "la alcaldía sirvió para dar crédito a un alcalde y su Gobierno pero nunca había sido parte de un proyecto político coordinado" (Navarro, 1994, p. 58).

39 Según Villa ([e.] 2013) el ADM-19 gastó la mayor parte del apoyo financiero en la campaña electoral para la ANC y el Congreso en 1990 y 1991.

40 Este artículo se refiere únicamente a la experiencia de la ADM-19, como proyecto político conjunto que buscó consolidarse como alternativa al bipartidismo. No se desconoce ni el relativo éxito de proyectos políticos como por ejemplo el Polo Democrático Alternativo (PDA), que contaron con un protagonismo importante de desmovilizados, ni los éxitos individuales de algunos antiguos líderes de grupos armados, como por ejemplo la alcaldía de Bogotá de Gustavo Petro o el desempeño como gobernador de Nariño y Senador de la Republica de Antonio Navarro Wolff.

ha sido capaz de dar lugar a un verdadero cambio en la cultura política colombiana, esta identificación también significó que el retorno a la lucha armada nunca llegó a estar en consideración. Muchos de ellos más bien expresan sentimientos de algún tipo de responsabilidad respecto a la protección de la nueva carta política.

No obstante, es importante tener en cuenta que, dentro de los antiguos grupos armados, la decisión clave de dejar las armas se hizo debido a la convicción compartida de que la lucha armada no había conducido a ninguna parte. Por tanto, el hecho de alcanzar o no el éxito en la política no era suficiente motivo para que se replantearan su estrategia elegida. Por otra parte, desde el punto de vista de todos los entrevistados, tanto los efectos limitados de la nueva Constitución, como el fracaso de la ADM-19, se explican no solo por factores externos relacionados con la cultura política excluyente, sino también por incompetencia interna de los mismos grupos desmovilizados, de sus delegados en la ANC y del partido político ADM-19. Esta interpretación implica algunas lecciones aprendidas puntuales, tales como la importancia de un período garantizado legal durante el cual debían prohibirse contra-reformas para que la constitución tuviera tiempo para desarrollar los acuerdos, o la conclusión de que el exceso de inclusión puede convertirse en un impedimento para el diseño y establecimiento de la base programática de un nuevo partido.

Veinte años después de la traumática derrota electoral del ADM-19 en 1994, muchos protagonistas aceptan estas lecciones aprendidas y, por lo tanto, concentran su atención en el actual proceso de paz entre las FARC y el Gobierno Nacional. Los mismos debates que tuvieron lugar hace 18 años parecen ser relevantes una vez más. ¿Qué lecciones pueden aprender las FARC de los procesos de la década de 1990?

Aunque el contexto actual es ciertamente diferente, por lo menos las circunstancias externas no parecen estar a favor de un nuevo movimiento político alternativo, más de lo que lo estuvieron en la década de 1990. Con esto en mente, queda por ver cómo las FARC se encargarán de su transición interna. Sin el ambicioso intento de unificar todo el espectro de la izquierda en Colombia, con una base programática clara y un enfoque mucho más local, por lo menos una cosa se puede decir ya: el proyecto de las FARC va en una dirección diferente que la de procesos precedentes.

Referencias

ADM-19. (3 de abril 1990). Declaración de creación. *El Tiempo*

Archila, M. (junio, 2008). El maoísmo en Colombia: La enfermedad juvenil del marxismo-leninismo. *Revista Controversia*, (190), 147-196.

Barrios, G. (10 de febrero de 2014). Entrevista realizada en Bogotá por Investigadores-autores a G. Barrios (antiguo dirigente de la ANUC y del PRT en Montes de María, exconcejal de San Juan de Nepomuceno) [transcripción]. Archivo del equipo Iniciativas de Paz. CINEP/ Programa por la Paz.

Boudon, L. (enero, 2001). Colombia's M-19 Democratic Alliance: A Case Study in New-Party Self-Destruction. *Latin American Perspectives, 28* (1), 73-92.

Buenahora, J. (1995). *La democracia en Colombia: Un proyecto en construcción.* Bogotá, D. C.: Contraloría General de la República.

Carrigan, A. (2009). *El Palacio de Justicia: Una tragedia colombiana.* Bogotá, D. C.: Icono Editorial.

Correa, H. (2005). *El Palacio de Justicia: ¿Con las armas al poder? Antecedentes, la toma, los desaparecidos*. Bogotá, D. C.: Editorial Carrera 7ª.

Delgado, A. (junio, 2008). Anotaciones a la política del partido comunista. *Revista Controversia*, (190), 55-96.

Dirección General para la Reinserción. (2000). *Huellas de paz: Los desmovilizados y su participación en los escenarios de elección popular. Balance 1990-2000*. Bogotá, D. C.: Ministerio del Interior.

Echandía, C. (mayo-diciembre, 2000). El conflicto armado colombiano en los años noventa: Cambios en las estrategias y efectos económicos. *Revista Colombia Internacional,* (49-50), 117-134.

EPL [Ejército Popular de Liberación]. (1991). *Acuerdo final entre el Gobierno Nacional y el Ejército Popular de Liberación*. Bogotá, D. C. Recuperado de http://publicaciones.libertadores.edu.co/index.php/DialecticaLibertadora/article/view/323/310

Fajardo, D. (2002). La tierra y el poder político: La reforma agraria y la reforma rural en Colombia. *Revista Reforma Agraria Colonización y Cooperativas,* (1), 4-20.

Fajardo, J. (14 de noviembre de 2013). Entrevista realizada en Medellín por Investigadores-autores a J. Fajardo (excomandante del EPL, exmiembro del Comité Central del PCC-ML y constituyente) [transcripción]. Archivo del equipo Iniciativas de Paz. CINEP/ Programa por la Paz.

Flórez, E. (12 de noviembre de 2013). Entrevista realizada en Bogotá por Investigadores-autores a E. Flórez (exmiembro y negociador del PRT, candidato al Senado por la ADM-19) [transcripción]. Archivo del equipo Iniciativas de Paz. CINEP/ Programa por la Paz.

Flórez, E. (1 de agosto de 2014). Entrevista realizada en Bogotá por Investigadores-autores a E. Flórez [transcripción]. Archivo del equipo Iniciativas de Paz. CINEP/ Programa por la Paz.

Flórez, E., & Valenzuela, P. (octubre-diciembre, 1996). De la oposición armada al frustrado intento de alternativa democrática en Colombia. *Revista Colombia Internacional*, (36), 31-40.

García, M. (1992). *De la Uribe a Tlaxcala. Procesos de paz.* Bogotá, D. C.: CINEP.

García, R. (1994). Elecciones parlamentarias 1994: El mercado político y la lógica de clientela. *Revista Foro, 23*, 17-25.

Grabe, V., & Patiño, O. (2014). Considerations Regarding Peace Negotiations in Colombia: 1990-2014. *Berghof Foundation. IPS Paper 3.* Recuperado de http://ips-project.org/wp-content/uploads/2015/02/Considerations-Regarding-Peace-3-.pdf

Gutiérrez, B. (7 de marzo de 1991). *Intervención del ex comandante Bernardo Gutiérrez, sesión plenaria de la ANC*. Bogotá, D. C.

López, C. (2007). La ruta de la expansión paramilitar y la transformación política en Antioquia: La década de la transformación 1997-2007. En M. Romero (Ed.), *Parapolítica: La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos* (pp. 123-232). Bogotá, D. C.: Intermedio.

MAQL [Movimiento Armado Quintín Lame]. (1990). [Carta para Monseñor Pedro Rubiano]. *Carta del MAQL a Monseñor Pedro Rubiano, Presidente de la Conferencia Episcopal colombiana y de la comisión "Cauca por la paz"*. Cauca.

MAQL [Movimiento Armado Quintín Lame]. (1991). *Acuerdo final entre el Gobierno Nacional y el Movimiento Armado Quintín Lame.* Campamento de Pueblo Nuevo, Caldono, Cauca. Recuperado de http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/CO_910527_Acuerdo%20Final%20Entre%20El%20Gobierno%20Nacional%20Y%20El%20Movimiento%20Armado%20Quintin%20Lame.pdf

Mejía, D. (13 de noviembre de 2013). Entrevista realizada en Bogotá por Investigadores-autores a D. Mejía (excomandante del EPL, constituyente) [transcripción]. Archivo del equipo Iniciativas de Paz. CINEP/ Programa por la Paz.

Moreno, E. (2005). Whither the Colombian two-party system? An assessment of political reforms and their limits. *Electoral Studies* (24), 485-509.

Mujica, M. E. & Thoumi, F. (1996). Las negociaciones de paz y la participación de las guerrillas colombianas en el narcotráfico. *Revista Colombia Internacional,* (36), 41-47.

Navarro, A. (1994). Entrevista a Antonio Navarro Wolff: ¿Qué paso con la AD M-19? "No supimos definir una personalidad política". *Revista Foro*, *24*, 57-62.

Ortiz, J. M. (22 de febrero de 1991). *Intervención del constituyente por el PRT José Matías Ortiz Sarmiento ante la Asamblea Nacional Constituyente*. Bogotá, D. C.

Ortiz, J. M. (21 de febrero de 2014). Entrevista realizada en Barranquilla por D. Chavarro a J. M. Ortiz (excomandante del PRT, constituyente y Senador) [transcripción]. Archivo del equipo Iniciativas de Paz. CINEP/ Programa por la Paz.

Patiño, O. (30 de septiembre de 2013). Entrevista realizada en Bogotá por Investigadores-autores a O. Patiño (excomandante del M-19, constituyente de la ADM-19) [transcripción]. Archivo del equipo Iniciativas de Paz. CINEP/ Programa por la Paz.

Patiño, O., Grabe, V., & García, M. (2009). El camino del M-19 de la lucha armada a la democracia: Una búsqueda de cómo hacer política en sintonía con el país. En M. García Durán (Ed.), *De la insurgencia a la democracia: Estudios de caso* (pp. 43-106). Bogotá, D. C.: CINEP/PPP.

Peñaranda, D. R. (2010). *El Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL): Una guerra dentro de otra guerra.* Bogotá, D. C.: ARFO Editores.

Pizarro, E. (1996). *Insurgencia sin revolución: La guerrilla en Colombia en una perspectiva comparada.* Bogotá, D. C.: Tercer Mundo Editores.

Pizarro, E. (2002). La Atomización Partidista en Colombia: El Fenómeno de las Micro-empresas Electora-

les. *Kellogg Institute.* Recuperado de www.kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/292.pdf

PRT [Partido Revolucionario de los Trabajadores]. (1991). Acuerdo final entre el Gobierno Nacional y el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Don Gabriel, Ovejas, Sucre. Recuperado de http://publicaciones.libertadores.edu.co/index.php/Dialectica-Libertadora/article/view/322/309

Rampf, D., & Chavarro, D. (2014). The 1991 Colombian National Constituent Assembly. Turning Exclusion into Inclusion, or Vain Endeavour? *Berghof Foundation. IPS Paper 1.* Recuperado de http://ips-project.org/wp-content/uploads/2015/02/The-1991-Colombian-National-Constituent-Assembly.pdf

Rampf, D., Castillo, D., & Llano, M. (2014). La historia no contada del Partido Revolucionario de los Trabajadores: Un análisis de la transición del PRT de un partido clandestino a un actor de la política legal. *Berghof Foundation. IPS Artículo 4.* Recuperado de http://ips-project.org/wp-content/uploads/2015/02/LahistorianocontadadelPartidoRevolucionariodelosTrabajadores.pdf

Restrepo, J. F. (21 de febrero de 2014). Entrevista realizada en Sincelejo por D. Rampf a J. F. Restrepo (exmiembro del PRT) [transcripción]. Archivo del equipo Iniciativas de Paz. CINEP/ Programa por la Paz.

Reyes, A. (2009). *Guerreros y campesinos, el despojo en la tierra en Colombia.* Bogotá, D. C.: Editorial Norma.

Santos, A., & Ibeas, J. (1995). Elecciones y Reforma Política en Colombia. *Revista de Derecho Político,* (40), 341-378.

Tattay, L. (2005). *Volviendo armados: Quintín Lame, relato de un proceso de paz* (Trabajo de grado). Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, D. C., Colombia.

Tattay, P., & Peña, (2013). *Movimiento Quintín Lame: Una historia desde sus protagonistas.* Bogotá: Fundación Sol y Tierra.

Toro, G. (3 de octubre de 2013). Entrevista realizada en Pereira por Investigadores-autores a G. Toro (exsindicalista, miembro del Comité Central del PCC-ML, constituyente de la ADM-19 y candidato al Senado por la ADM-19) [transcripción]. Archivo del equipo Iniciativas de Paz. CINEP/ Programa por la Paz.

UNDP [United Nations Development Programme]. (julio, 2006). Evolución del conflicto armado en cifras. *Hechos del Callejón,* (16), 2-5.

Uribe, M. V. (1994). *Ni canto de gloria ni canto fúnebre: El regreso del EPL a la vida civil* (Colección Papeles de Paz). Bogotá, D. C.: CINEP.

Villa, F. (18 de octubre de 2013). Entrevista realizada en Bogotá por Investigadores-autores a F. Villa (exmiembro del PCC-ML, líder estudiantil, constituyente y candidato al Senado por la ADM-19) [transcripción]. Archivo del equipo Iniciativas de Paz. CINEP/ Programa por la Paz.

Villamizar, D. (1995). *Aquel 19 será: Una historia del M-19, de sus hombres y sus gestas. Un relato entre la guerra, la negociación y la paz.* Bogotá, D. C.: Planeta.

Villarraga, A. (s.f.). *Ejército Popular de Liberación (EPL): Guerra irregular, pacto de paz y constituyente.* Documento inédito.

Villarraga, A. (10 de diciembre de 2013). Entrevista realizada en Bogotá por Investigadores-autores a A. Villarraga (exmiembro del Comité Central del PCC-ML y exmiembro del Congresito) [transcripción]. Archivo del equipo Iniciativas de Paz. CINEP/ Programa por la Paz.

Villarraga, A. (2013). Procesos de paz y tránsito de grupos alzados en armas a nuevos movimiento políticos. *Revista Controversia,* (200), 17-74.

Villarraga, A., & Plazas, N. (1994). *Para reconstruir los sueños: Una historia del EPL.* Bogotá, D. C.: Fondo Editorial para la Paz, Fundación Progresar.

Wills, M. E. (1993). Las políticas gubernamentales frente al proceso de paz: Entre el peso del pasado y un futuro incierto. En E. Ungar Bleir (Ed.), *Gobernabilidad en Colombia, retos y desafíos* (pp. 129-186). Santa Fe de Bogotá, D. C.: Universidad de los Andes.

Zuluaga, J. (1999). De guerrillas a movimientos políticos: Análisis de la experiencia colombiana: El caso del M-19. En R. Peñaranda & J. Guerrero (Eds.), *De las armas a la política* (pp. 1-74). Bogotá, D. C.: IEPRI - Tercer Mundo Editores.

2.

Los Acuerdos de Paz en El Salvador, firmados en 1992, establecieron las bases para refundar el Estado salvadoreño e inaugurar un contrato social basado en el respeto a las reglas de la democracia representativa.

Las élites del gobierno, el movimiento político militar contendiente y la comunidad internacional fueron los protagonistas primero del diálogo y, luego, de la negociación de la paz y del diseño de las nuevas reglas, pero fueron los partidos políticos los protagonistas de la transición. Así, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) pasó exitosamente de ser movimiento guerrillero y ejército contendiente a negociador de las reglas de la democracia formal y representativa salvadoreña y, posteriormente, a ser partido en el gobierno desde 2009.

En ese tránsito, algunas de las demandas originales de la protesta como la pobreza, la desigualdad y las precarias condiciones de vida de la gran mayoría de salvadoreños; quedaron relegadas de las negociaciones de paz y postergadas para mejores épocas en las que el partido contendiente tuviera más cuotas de poder, desde las que fuera posible modificar factores de orden económico y social. La naturaleza de los Acuerdos de Paz y de la transición particular a que dio lugar fue eminentemente política. El proceso no procuró —y no existían condiciones para hacerlo— la superación de las causas del conflicto social o la desigualdad, sino más bien se orientó hacia una reforma jurídica-institucional cuyos protagonistas, en las nuevas formas de lucha por el poder del Estado, serían los Partidos Políticos. La materia de lo económico y social y sus actores intervinientes constituyeron más bien, en esta fase, un factor estabilizador para dar viabilidad al proceso pacificador y modernizador del régimen político.

Veintidós años después de la firma de los Acuerdos de Paz, el Frente cuenta con altas cuotas de poder. Primero, como partido legal y legítimo aspirante a todos y cada uno de los puestos de elección popular, desde los que es posible hacer los cambios esperados y, luego, como partido en el gobierno y a cargo de la Presidencia de la República —por un segundo período—, con alcaldías y presencia parlamentaria amplia y, en ocasiones, mayoritaria. En ese camino de fuerza política excluida a fuerza política incluida, ¿ha logrado mantenerse como una fuerza incluyente?, ¿ha logrado, a su interior, que las diferentes expresiones de la ciudadanía tengan una voz y tengan la capacidad de participar en la conducción del Estado y del país?, ¿qué tanto las necesidades de los grupos excluidos de la sociedad salvadoreña han logrado colocarse en la agenda de este nuevo Frente? Esas preguntas son abordadas en este documento.

La arena política de las fuerzas contendientes en El Salvador
¿De incluidos a inclusivos?

>>

Por Carlos Guillermo Ramos, Roberto Oswaldo López y Aída Carolina Quinteros

Los Acuerdos de Paz de 1992, además de lograr un cese al fuego y el desarme de los grupos insurgentes, definieron un nuevo rumbo en la historia del país con cambios profundos en el sistema político, militar y judicial. Estos cambios brindaron condiciones favorables para la construcción de un Estado de Derecho legítimo y el fortalecimiento de la democracia representativa; condiciones favorables para la preeminencia del poder civil sobre el militar, el respeto a los derechos humanos —en especial los civiles y políticos— y el fortalecimiento de la cultura democrática.

Cambios, además, que se lograron con base en una negociación entre las principales fuerzas contendientes —Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Gobierno—; y que gozan —incluso a la fecha— de un importante consenso entre las élites y entre la ciudadanía. Es decir, se trata de una política nacional de largo alcance que sienta las bases del contrato social salvadoreño aún vigente.

Sin embargo, sus alcances para superar los problemas estructurales y las demandas ciudadanas de superación de la pobreza y un mayor desarrollo humano, fueron limitados. El modelo económico y social, responsable por la generación de exclusión de la mayoría de la población salvadoreña, no fue alterado con los Acuerdos. Sin duda que el respeto a los derechos humanos y el mejor acceso a la justicia benefician a toda la ciudadanía, pero la inclusión se alcanzó fundamentalmente para la fuerza contendiente, y ello, en términos estrictamente políticos. Lo social y lo económico quedaron como materias pendientes y aún no han sido resueltas.

Adicionalmente, en el transcurso de los años, se evidencian falencias en el sistema político que inciden negativamente en el mejoramiento de la democracia salvadoreña. Hoy puede encontrase parte de la problemática en los fuertes poderes otorgados a los partidos políticos en los Acuerdos de Paz, y en las pocas responsabilidades en términos de rendición de cuentas a la ciudadanía y hacia sus mismos militantes.

Estas afirmaciones conllevan las siguientes preguntas, ¿es posible aplicar estas mismas críticas al FMLN que pasó exitosamente de movimiento guerrillero a partido en el poder? ¿En el camino hacia su inclusión total en el sistema político, perdió algo de su impulso inicial de procurar mejores condiciones de vida para la población salvadoreña? Ahora que el Frente es un partido completamente insertado en la democracia representativa ¿es una fuerza política incluyente?

El objetivo de este documento es analizar las cuestiones relativas a la transición del FMLN y sus aportes en términos de inclusión, entendiéndolas como la posibilidad de lograr acceso para los grupos afectados por el conflicto a herramientas que les permitan participar en la gobernabilidad del país, ya sea a través de una participación directa en los proceso de toma de decisiones, o a través de que sus demandas sean atendidas y puestas en la agenda.

Para ello, el análisis se centra en al menos tres secciones: la sección 2 hace un recuento de las etapas de la lucha armada en El Salvador en el siglo XX, especialmente desde la década de los años setenta. La sección 3 revisa el recorrido histórico del Frente desde sus inicios como fuerza de oposición radical al modelo económico capitalista salvadoreño, hasta su participación como partido de gobierno en 2009. Finalmente, la sección 4 analiza el papel jugado por el Frente en su período presidencial de 2009 a 2014.

Nuestro trabajo ha sido desarrollado sobre la base de información documental y recopilaciones de entrevistas a actores clave del proceso realizadas por otros estudios, tales como Córdova (2002), Cruz (2013), Martínez (2012) y Ramos (1998).

Etapas de los actores contendientes desde la década de los años 70 a 1992

Si bien, en términos estrictos, el inicio de la lucha armada en el país puede ubicarse en la década de los años 70, las expresiones de descontento por los gobiernos militares, el bloqueo del sistema político frente a potenciales voces disidentes u opositoras, así como una economía excluyente son un tema histórico de larga data. La lucha por cambiar ese estado de las cosas es asimismo antigua, pues el país da cuenta, solo en el siglo XX, de al menos un levantamiento armado campesino e indígena reprimido muy violentamente en una acción prácticamente genocida en 1932.

¿Qué de especial tiene la década de los años 70? Si bien el Partido Comunista existe en El Salvador desde principios del siglo XX, es en esta década cuando se forman varias organizaciones —políticas en un inicio y político-militares más adelante—, que llevarían a cabo el movimiento contestatario de mayores dimensiones y repercusiones en la vida política nacional, aprovechando coyunturas de cierre de espacios políticos y de entornos nacionales e internacionales favorables a una escalada en la lucha contra los regímenes oligárquicos.

Los orígenes del FMLN

El sociólogo Raúl Benítez Manaut (1989) comenta que habría un primer momento en el conflicto bélico salvadoreño (1970-1981) caracterizado por el nacimiento y la consolidación de las organizaciones político-militares que, finalmente, conducirían a la conformación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Estas organizaciones plantearon como estrategia la lucha de masas, que incluía la creación de frentes, en los cuales la lucha reivindicativa de las organizaciones sindicales o campesinas se subordinaba a la lucha política revolucionaria.

El FMLN se constituyó con cinco grandes organizaciones político-militares: el Partido Comunista (PC), fundado en 1930; las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), surgidas en 1970; El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que aparece en 1971; las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (RN), que nacen en 1975 y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC), que surge en 1976. La organización entre frente político, militar y de masas, sigue, según Benítez Manaut, el orden indicado en la tabla 1.

Hasta 1977, el PC mantenía como estrategia la participación en las elecciones y fue la última de las organizaciones en sumarse a la lucha revolucionaria de carácter

Tabla 1. Orden de aparición y relación Partido-Ejército-Organizaciones de masas. FMLN

Organizaciones político-militares		Organizaciones de masas
Partido o frente político	Ejército	
PCS (1)	FAL (3)	UDN (2)
FPL (1)	FALP (3)	BPR (2)
PRS (2)	ERP (1)	LP-28 (2)
RN (1)	FARN (3)	FAPU (2)
PRTC (1)	FARN-LP (3)	MLP (2)

Nota: Los números indican el orden en que fueron creadas las organizaciones. Adaptado de "La teoría militar y la guerra civil en El Salvador" por R. Benítez Manaut, 1989, Salvador: UCA, p. 222.

militar. Hasta 1979, el PC no había formado un brazo militar y esta posición le valió varias deserciones consecutivas en la década de los años 70, las cuales luego formarían organizaciones y otros partidos político-militares, con claras posiciones de apuesta por la lucha armada, como parte de la estrategia a seguir en la lucha revolucionaria.

La primera escisión (1970) fue la de las FPL quienes propugnaban la lucha armada como motor fundamental de la lucha, bajo la estrategia de guerra popular prolongada. Según cita Benítez (1989), "Los principios ideológicos de las FPL son que la revolución en El Salvador debe ser antioligárquica, anticapitalista y antiimperialista y que la estrategia revolucionaria debe ser la denominada guerra popular prolongada" (p.216), cuyo elemento fundamental era la lucha armada de masas.

El ERP surge en 1972, nuevamente de una disidencia del PC, a la que se sumaron jóvenes del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Su tendencia hacia la lucha armada fue sumamente marcada, definiendo su estrategia desde la vía insurreccional, que dominó la coalición revolucionaria para la ofensiva guerrillera de 1981. Por su parte, la RN aparece más bien como una división de las ERP, que se separa de estas por un enfoque de trabajo político y de masas. Finalmente, el PRTC también resultó de una división al interior del ERP y con el interés en la lucha política y el trabajo mediante estructuras partidarias.

Cada una de estas organizaciones forma asimismo frentes populares para la lucha política —que no descartaban la participación en elecciones—, frentes de masas con organizaciones obreras, campesinas y estudiantiles, y frentes militares. Cada una de las ramas era fortalecida de acuerdo al énfasis de la organización particular. Así, si el énfasis de la estrategia era la guerra popular prolongada —como en el caso de las FPL—, el énfasis estaba en el trabajo con las "masas"; pero si el enfoque era más bien de una acción insurreccional, como en el ERP, la postura era fortalecer los ejércitos revolucionarios. Ello no implicaba necesariamente una jerarquía dentro de las organizaciones, sino más bien la orientación de los esfuerzos y las apuestas estratégicas.

> "Varios de los presidentes de principios del siglo XX –antes de la llegada de los militares a los gobiernos– eran miembros de familias cafetaleras"

En cuanto a las membresías, las personas participaban de alguna de las estructuras de las organizaciones político-militares, según el sector al que pertenecían, pero bajo instrucciones de la dirigencia podían pasar de una organización de masas a una militar, lo cual se consideraba, en cualquier caso, un nivel más comprometido de lucha que demandaba estricta clandestinidad.

Las cinco organizaciones político militares mantenían dentro de sus sectores de masas a estudiantes universitarios y de secundaria. Cuatro de ellas (FPL, ERP, RN y PRTC) incluían asimismo a obreros y campesinos. Dos de ellas (FPL y RN) congregaban también a gremios de maestros; dos más (FPL y ERP) convocaban a vendedores ambulantes y las FPL contenían adicionalmente a pobladores y artistas.

Según Benítez (1989), para 1980, y por cálculos del Departamento de Estado de los EE. UU. —que no dejan de ser dudosos por la misma naturaleza clandestina de la lucha guerrillera—, para 1980 había un total de 3.500 guerrilleros armados. Este dato excluye a quienes se encontraban organizados en movimientos de masas o estructuras partidarias políticas no militares, sobre los cuales no es posible determinar su número.

El camino hacia la opción armada

La escalada a la lucha militar se da a finales de la década de los años 70, de manera paulatina. Inicia con una lucha de guerrillas fundamentalmente urbana; para luego pasar a un enfrentamiento militar entre ejércitos, en 1981.

Dos acontecimientos políticos caracterizaron la escalada a la lucha armada: los fraudes electorales de 1972 y 1977. En el primero, algunas de las organizaciones disidentes, que luego formarían parte de las fuerzas contendientes —incluido el Partido Comunista, bajo la cobertura de la Unión Democrática Nacionalista (UDN)—, participaron en las elecciones presidenciales, con una amplia alianza de partidos políticos que pretendía utilizar las vías tradicionales de la democracia representativa, para llegar al poder y hacer los cambios que se consideraban justos. Toda la documentación existente, tal y como Benítez

(1989), Córdova (2002), González (2009), Martínez (2012) y Ramos (1998), entre otros, registran, apunta a que esta coalición ganó las elecciones, pero los militares impidieron el acceso al poder por parte del nuevo actor político, mediante un fraude de grandes proporciones que originó múltiples protestas que fueron reprimidas brutalmente.

Los militares, quienes accedieron al poder del Estado desde 1931, inician así una era de mayor represión y autoritarismo, con encarcelamiento de líderes, cierres de espacios de disidencia e incluso de pensamiento. A manera de ejemplo, la Universidad de El Salvador fue tomada por los militares generando daños irreparables a su infraestructura y acervo científico.

Es notable que, para estos años, el gobierno militar, en consonancia con algunos intentos de gobiernos militares reformistas en América del Sur, intentara realizar una reforma agraria para minimizar un poco las grandes desigualdades, sobre todo en el campo, y paliar el descontento que se iba generalizando en la sociedad salvadoreña. Sin embargo, el presidente de turno, coronel Armando Molina, que había asegurado no dar marcha atrás con su proyecto, hubo de cancelarlo ante las presiones de la élite económica del país formada por una oligarquía generada a partir del cultivo y exportación del café, fundamentalmente, aunque fuertemente ligada también a la banca.

Estos grupos estaban constituidos por familias —de inmigrantes europeos, principalmente; aunque con participación de comerciantes y terratenientes nacionales (de ascendencia criolla derivada del periodo de la colonia que finalizó en 1821)[1]— que consolidan la riqueza del país y con ello, el poder económico y político a lo largo del siglo XX. De hecho, varios de los presidentes de principios del siglo XX –antes de la llegada de los militares a los gobiernos– eran miembros de estas familias cafetaleras. Estos grupos provienen de las reformas liberales de finales del siglo XIX, que promovieron el cultivo del café a través de expropiaciones de tierras comunales, ejidos[2] indígenas y tierras de campesinos pobres, como créditos favorables para la compra de tierras y el cultivo del café (Menjivar, 1995). Posteriormente, en la década de los años sesenta, los cultivos se diversifican hacia la caña de azúcar y el algodón; no obstante, la base continúa siendo fundamentalmente cafetalera, hasta la década de los años noventa cuando estos grupos comienzan a asentarse en la banca y los servicios financieros.

La reforma agraria —que había sido anunciada en 1975 mediante la creación del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, y ratificada un año más tarde con el Decreto de Transformación Agraria, como un avance para resolver los problemas del país— hubo de echarse para atrás en menos de tres meses. La razón de este retroceso fue la intensa ofensiva que lanzó la cámara empresarial más representativa del país y, como lo calificara Ignacio Ellacuría (2005), "los elementos más reaccionarios del capitalismo burgués" (p. 651). En la opinión de este autor, con la propuesta de transformación agraria el Estado daba alguna muestra de autonomía frente a la oligarquía con posibilidades de dejar de ser guardián de esos intereses, para "pasar a ser promotor incipiente de los intereses de los oprimidos, intentando un cambio real en la estructura de la tenencia de la tierra" (p. 651). Sin embargo, con el fracaso de la medida... "Ganó el capital, ganó la clase dominante y perdió el Estado" (p. 654).

Si el fraude de 1972, la represión y las muestras de que el poderío de la oligarquía cafetalera impediría cualquier cambio al status quo, no fueron suficientes para hacer evidente el cierre de espacios de expresión, de disconformidad y de reformas, el fraude de 1977 terminó de reforzar la idea. Nuevamente, ese año se presenta una coalición amplia para cambiar los gobiernos militares y, nuevamente, hay un fraude electoral que impide a estas nuevas opciones el acceso al Gobierno y mantiene a los militares en el centro de la administración de Estado. Como resultado, se dobla la represión y las organizaciones contendientes acumulan fuerzas y estrategias para un nuevo nivel en la lucha.

Sin embargo, la tónica para estos años era de lucha guerrillera. Siguiendo a Benítez Manaut (1989), la lucha guerrillera se caracterizaría por ataques de carácter momentáneo, sorpresivo y con pocos combatientes, en la cual se cuenta con superioridad táctica, pero no estratégica; aun no nos encontramos en presencia de un ejército que pueda mantener una situación de relativo

1 "Criollos", en el periodo de la colonia, es una expresión que se refiere a un estamento social de origen étnico usado para designar a los descendientes de españoles nacidos en América. Llegaron a constituirse en un grupo poderoso que lideró los procesos de independencia.

2 "Ejidos" es una expresión que se refiere a las tierras indígenas comunitarias.

equilibrio con el ejército regular. A medida que se alcanza el final de la década, los niveles de descontento social con el régimen van escalando en magnitud y las organizaciones disidentes se transforman claramente en movimientos revolucionarios.

Para 1979 hay un nuevo intento de reformar el sistema. Varias organizaciones sociales y políticas, incluidas las revolucionarias, convocan una instancia llamada "Foro Popular", que era una plataforma política de coalición desde la cual se intentaba realizar propuestas. Sin embargo, el gobierno militar desatiende el llamado, mientras intensifica aún más la represión. Para el 15 de octubre de ese año, un grupo de oficiales jóvenes, junto a algunos civiles progresistas, descontentos con la represión generalizada, los repetidos fraudes electorales y la evidencia de la imposibilidad de lograr la apertura por parte de los militares, ejecutan un golpe de Estado (el último en la historia salvadoreña del siglo XX), e instauran una Junta Cívico–Militar, para la transición hacia un gobierno democrático. Esta junta se autodenomina Junta Revolucionaria de Gobierno y estaba integrada por el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), dos civiles de orientación social demócrata y dos coroneles de la Fuerza Armada.

En su edición del 12 de octubre de 2009, el periódico *Contrapunto* publicó una muy buena síntesis de las motivaciones que movieron este acontecimiento; señala:

> En su proclama, los golpistas reconocen los males políticos de El Salvador –fraudes, resistencia al cambio, caos económico y social, violencia, falta de democracia— y proponen un conjunto de medidas que, a su juicio, sacarán al país del atolladero en el que se encuentra: cese a la violencia y la corrupción, lo cual supone disolver (los cuerpos represivos) y combatir a las organizaciones extremistas que violan los derechos humanos; erradicar prácticas corruptas en la administración pública y de la justicia; garantizar el respeto de los derechos humanos; crear un clima para convocar a elecciones libres; permitir el pluralismo ideológico, de forma que se fortalezca la democracia; reconocer el derecho de sindicalización; adoptar medidas que lleven a una mejor distribución de la riqueza; crear las bases para un proceso de reforma agraria; impulsar reformas en el sector financiero; y garantizar el derecho a la vivienda. (González, 2009, párr. 4).

Empero, el intento transformador fue nuevamente fallido. Dos meses después, esta Junta de Gobierno —ante las presiones de las élites y de los militares, que aumentaron aún más la represión— fue disuelta, instalándose una nueva en la que el carácter reformador había quedado atrás y en la que las fuerzas revolucionarias se articulaban en una nueva dinámica.

Según el sitio web del FMLN, para diciembre de 1979, tres de las organizaciones político militares (PCS, FPL y RN) conforman la Coordinadora Político Militar (CPM) y, para enero de 1980, estas mismas organizaciones, junto al PRTC y el ERP, se transforman en la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM), que preconizaba la estrategia de la insurrección popular como forma de alcanzar el poder. En mayo de ese año, cuatro de estas cinco organizaciones deciden mantener una dirección integrada para todas con "un solo plan militar y un solo mando, en síntesis: una sola línea política-militar" (FMLN, s.f., párr. 7). El 10 de octubre de 1980 dan vida al FMLN y, dos meses después, se incorporaría el PRTC.

El conflicto armado abierto

Para enero de 1981, el FMLN lanza una ofensiva general que marcó el inicio del enfrentamiento militar entre el ejército regular y las fuerzas revolucionarias. Benítez sostiene que de enero de 1981 a agosto de 1982, la estrategia inaugurada oficialmente con la ofensiva general por el lado del FMLN, se caracterizaba por potenciar la vía insurreccional. Por el lado de las fuerzas armadas, la estrategia se definía como de "rápido despliegue", cuya intención era aniquilar rápidamente las fuerzas guerrilleras e inducir una victoria militar rápida. Esta última con un claro apoyo del gobierno de los EE. UU.

En poco tiempo se fue haciendo evidente que ninguna de estas estrategias era exitosa, por lo que ambas partes se vieron forzadas a modificarlas. El FMLN pasó a la "guerra popular prolongada" que incluía una acción permanente de desgaste del enemigo, paralelamente, a la especialización de su ejército y el establecimiento de control político y militar en determinadas zonas del país. Por su parte, el ejército inició una estrategia de desgaste para el FMLN y de aislamiento de la población civil, bajo el nombre de "guerra de baja intensidad", la cual evidenciaba un claro y creciente involucramiento de los EE. UU. Esta estrategia contrainsurgente abarcaba —además del respaldo político, financiero y logístico— al ejército de El Salvador; planteaba igual apoyo a las fuerzas

contrarrevolucionarias en Nicaragua y a las coordinaciones de apoyo con los gobiernos de los países vecinos de Honduras y Costa Rica. La estrategia contrainsurgente y la guerra de baja intensidad han sido descritas con más detalle en el primer *paper* de esta serie de entregas.

En definitiva, la guerra duraría hasta 1991 afectando no solamente la política y la convivencia pacífica del país, sino todos los aspectos de la vida nacional. La economía entera estaba puesta en función de la guerra y en situación de una gran dependencia, debido a estar siendo sostenida artificialmente por la ayuda estadounidense. La asistencia económica y militar de los EE. UU. fue vital para mantener el equilibrio de fuerzas militares en contienda y para frenar el avance del FMLN. Como consecuencia, El Salvador llegó a estar en situación de dependencia económica casi total y con un aparato militar creciente. A todo ello, habría que añadirle el costo humano en términos de violaciones a los derechos humanos, emigraciones, desplazamientos internos con población refugiada y la postergación de la construcción de una democracia y de un Estado inclusivo.

“En definitiva, la guerra duraría hasta 1991 afectando no solamente la política y la convivencia pacífica del país, sino todos los aspectos de la vida nacional”

El FMLN como actor político en el sistema de partidos de la posguerra

La supremacía de lo político

Los Acuerdos de Paz de 1992 marcan definitivamente un nuevo ciclo político para el país. Estos acuerdos incluyeron medidas clave sobre diversas áreas, destacando entre ellos la desmilitarización, la generación de un nuevo sistema de partidos y de un sistema electoral en el que se incluía a los antiguos insurgentes.

En diciembre de 1992, el FMLN pasa a ser un partido político formalmente reconocido por las autoridades oficiales, que ve legitimada su participación en elecciones como una manera de acceso al control del gobierno, y que de hecho comienza su participación en elecciones y su carrera desde un partido de oposición hacia un partido de gobierno.

El establecimiento del FMLN como partido político fue un proceso pactado en los acuerdos, que incluyeron desde la protección a los combatientes, la desmovilización y, finalmente, la garantía del respeto al derecho de formar un partido político.

Los primeros momentos de la pacificación funcionaron con bastante precisión, especialmente la fase de cese al fuego supervisada directamente por las Naciones Unidas. Sin embargo, al acercarse el momento de la desmovilización de los frentes del ejército revolucionario —con el consecuente retorno del control del Estado en las zonas de dominio guerrillero; la entrega de armas, incluidas las más pesadas como misiles tierra–aire; así como la depuración y reducción de las fuerzas armadas—, las cosas se tornaron un poco más complicadas.

Martínez (2012) afirma que la transformación del FMLN en el principal partido político de oposición muestra que no se trataba de una insurgencia que hubiera sido vencida y que debiera ser reintegrada a la sociedad, ello en contra de las posiciones del ejército y el gobierno que demandaban de los rebeldes un desarme y el cese al fuego unilateral como precondición para la negociación. Más bien, la forma como se dieron los acuerdos establece que se trataba de un actor político clave en el sistema político salvadoreño. Señala asimismo, que luego de la desmovilización, los antiguos combatientes tenían varias opciones de reintegración: incorporarse a la nueva Policía Nacional Civil, participar del programa de transferencia de tierras, participar en entrenamientos para establecer sus propios negocios, involucrarse con el trabajo de las ONG o pasar a trabajar en la construcción y cuadros del FMLN.

Los Acuerdos de Paz fueron realmente inclusivos en términos políticos, en tanto que aseguraron la presencia de todas las corrientes de pensamiento dentro del espectro político salvadoreño. La transición a la democracia, iniciada en 1992, sentó instituciones que favorecían en gran medida el respeto a los derechos civiles de la ciuda-

danía, la expresión de la disidencia, elecciones competitivas y bastante legitimadas.

Sin embargo, no hay que olvidar que las negociaciones para la paz las hicieron las élites contendientes. Ello se evidencia en la naturaleza de los acuerdos mismos que se centraban fundamentalmente en las reformas políticas en materia de incorporación de los combatientes a la vida civil y política del país, así como la desmilitarización y el establecimiento de condiciones para la institucionalización del FMLN. Ciertamente, se tenía la experiencia de Colombia en la que, tras el desmantelamiento del M-19, los líderes fueron asesinados, por lo que era comprensible que se intentara tener garantías de que no pasaría lo mismo en El Salvador. Sin embargo, ello no elimina el hecho de que fueron los aspectos relativos a las necesidades de las cúpulas o las élites, los que tuvieron relevancia a la hora de la negociación y el cumplimiento de los acuerdos, por encima de las reivindicaciones del resto de los salvadoreños.

> “Pasar de una coalición de cinco organizaciones político-militares con estrategias, ideologías y liderazgos muy distintos (...) a un solo partido jerárquicamente constituido mediante procedimientos formales, no resultó una tarea fácil”

Esto último puede evidenciarse en la decreciente participación en las elecciones, especialmente entre 1999 y 2000, pese a que efectivamente se ha ampliado el escenario y las tendencias políticas que se someten a votaciones cada vez más legitimadas, así como el descredito creciente de las expresiones institucionales de la democracia, tales como los partidos políticos y la Asamblea Legislativa.

Otra de las consecuencias de estas negociaciones de élite es el control que se le otorga a éstas sobre los órganos encargados de reconstruir un nuevo El Salvador. El Tribunal Supremo Electoral (TSE), por ejemplo, está dominado por los partidos políticos que controlan todo lo relativo a las elecciones y se encuentra de esta manera sesgado para favorecer los intereses partidistas, dejando poco espacio para actores que no solamente representarían grupos políticos disidentes, sino los intereses generales mismos. El TSE, por ejemplo, no tiene reparos en interpretar las leyes electorales en desmedro de las finanzas públicas, tal y como sucedió en 2009, año en que se elegirían en el mismo evento una nueva asamblea legislativa y un nuevo presidente; pero, el TSE decidió hacer dos eventos separados con la intención de establecer procesos favorables para los partidos más grandes.

La reforma constitucional resultante de los Acuerdos de Paz deja claramente establecido que los partidos constituyen el único instrumento legítimo de la representación política de los ciudadanos.

En este estado de supremacía de los partidos, los mismos se negaron reiteradamente, por ejemplo, a adoptar un sistema de votación por rostro para las elecciones legislativas, lo cual permitiría que la ciudadanía eligiera a los diputados que mejor le representaban. El sistema, mantenido hasta 2010, consistía en que los líderes de los partidos escogían la lista de candidatos y el orden en que ellos entrarían a la Asamblea Legislativa. Entonces, los diputados en la Asamblea no eran los más votados, sino aquéllos a quienes las cúpulas partidarias elegían. Así, las lealtades de los diputados no eran con el elector, sino con el líder de su partido. Para 2011, una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia decretó que este modo de elección era inconstitucional y que el elector tenía derecho a votar por su candidato. Los partidos hicieron lo posible para eludir esta resolución y finalmente la incorporaron a medias para las elecciones de 2012. Aún no es seguro que estos cambios se mantengan para el futuro.

Sin embargo, la supremacía partidaria no se expresa solo en componentes del proceso electoral. Todos los funcionarios de segundo grado están bajo control de los partidos políticos, llegando a establecer sistemas de cuotas o reparto de oficinas clave como la Corte de Cuentas de la República, la Fiscalía y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el mismo TSE. Las primeras han sido reiteradamente señaladas como poco efectivas en la lucha y prevención de la corrupción y de las malas prácticas en el ejercicio de gobierno. El control partidario de estas oficinas es uno de los principales obstáculos para su funcionamiento. Esta situación se ha mantenido prácticamente inalterada desde 1992; ha sido con la llegada de nuevos magistrados a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en

2009, que este control se ha puesto en entredicho y que se han configurado nuevos climas con la potencialidad de avanzar en el Estado de Derecho.

Los partidos políticos, como las verdaderas élites en el gobierno salvadoreño, parecen desdeñar todo tipo de interés general, lo que podría minar un poco los márgenes de acción y control que detentan. Incluso, se rehúsan a dar cuentas a la ciudadanía sobre los fondos que les ingresan y sobre las decisiones que toman. A la fecha, no existe una regulación que les obligue a dar cuentas de los dineros que reciben y de los montos que manejan para sus campañas. Si bien, gracias a presiones internacionales, en estos momentos se encuentran elaborando una ley contra el lavado de dinero; no obstante, han sido renuentes a incluir a los partidos políticos dentro de esa ley.

FMLN como partido político (1992-2009)

Sin embargo, pasar de una coalición de cinco organizaciones político-militares con estrategias, ideologías y liderazgos muy distintos —y que venían de un enfrentamiento armado intenso y largo—, a un solo partido jerárquicamente constituido mediante procedimientos formales, no resultó una tarea fácil. Uno de los primeros desafíos fue el de unificar la línea ideológica, por lo que se optó por definirse como un partido de tendencias, para que gradualmente las líneas y diferencias partidarias pudieran irse transformado. Pero, las diferencias internas que se arrastraban desde la década de los años 70 seguían presentes, y los liderazgos se mantenían en pugna constante.

El FMLN, como partido político, fue conformado por los cinco partidos político-militares del FMLN, como movimiento y ejército contendiente: PC, FPL, ERP, RN y PRTC. Cada uno de éstos se seguía manteniendo como bloque, pero el equilibrio de poderes, que pese a las diferencias entre ellos se había sostenido durante la guerra, no se mantuvo durante la paz. La primera escisión vino del ERP, quién de manera separada firmó unilateralmente los nuevos compromisos con el gobierno en 1993, que avalaban posiciones en materia económica no aprobadas por el resto de los partidos; ejemplo de ello, el aumento del impuesto al valor agregado, IVA.

Según Joaquín Villalobos (1999), uno de los líderes del FMLN en representación del ERP:

> Los acuerdos tenían vacíos que podían hacer peligroso el proceso. El acuerdo sobre la comisión ad-hoc que depuraría al Ejército, no establecía cómo se aplicaría éste y si debía o no hacerse público; no existían programas de reinserción específicos para los mandos de la guerrilla, algunos de éstos hasta con 20 años de participación; no existía seguridad del estado para los dirigentes del FMLN; no habían medidas para la reinserción a la vida civil de los oficiales depurados; no se establecía cuándo debía implementarse la amnistía; y tierras de gran valor productivo en manos de la guerrilla, no estaba garantizado que se transferirían a los excombatientes. La seguridad de los dirigentes del FMLN, era esencial para la estabilidad del proceso. El asesinato de dos dirigentes en octubre de 1993, produjo una crisis en el proceso (p. 26).

Por estas razones, según Villalobos, a principios de 1993 había que hacer una renegociación de los acuerdos y los plazos, pero la misma no pudo realizarse por la renuencia de los líderes de las otras organizaciones del FMLN (FPL, RN, PRTC y PC) a aprobar una mayor gradualidad en la depuración del ejército y la renuencia sobre la aprobación de una ley de amnistía.[3] Villalobos negoció por su cuenta con el entonces presidente de la República y el ejército. Éste acuerdo fue llamado "Pacto de San Andrés", por el lugar en que fue lanzado.[4] El pacto ocasionó una primera y grave disputa al interior del FMLN, a unos pocos meses de constituirse como partido político. Como resultado, Villalobos fue expulsado del FMLN en 1994 y calificado como traidor. Desde entonces vive en Inglaterra, estudió en Oxford y se mantiene como asesor en materia de gobernabilidad para varios gobiernos de América Latina. El ERP, por su parte, se separa del FMLN, y con él, 7 de los 21 legisladores electos forman su propia fracción legislativa, ocasionándose con ello el primer cisma público al interior de este partido.

Lejos de unificar a quienes se mantuvieron en el partido, el cisma era un indicio de que las tendencias dentro del partido eran algo más que líneas de pensamiento y de que se mantenían fuertes. Para años posteriores, las

3 La ley de amnistía ha sido declarada contraria a los derechos humanos por parte de la Corte Interamericana de Justicia y ha solicitado al Estado salvadoreño su derogación. Sucesivos gobiernos se han opuesto a esta acción argumentando que es la piedra angular de los "Acuerdos de Paz" (pese a que la misma no está incluida en dichos acuerdos), ya que es lo que ha permitido la reconciliación nacional. Por su parte, organizaciones de defensa de derechos humanos sostienen que esta es una norma que favorece la impunidad y deja desprotegidas a las víctimas.

4 Sitio arqueológico de San Andrés.

tendencias se definieron entre "renovadores" y "ortodoxos", siendo los segundos líderes más preocupados por la pureza ideológica —conformada fundamentalmente por la antigua dirigencia del PC—, mientras que entre los primeros destacaban líderes del partido vinculados con ejercicios de gobierno y administración pública, especialmente en las municipalidades. La tendencia renovadora estaba liderada por Facundo Guardado, líder de otro de los partidos del FMLN —en su fase de ejército revolucionario (FPL)— y candidato a la presidencia por el FMLN en las elecciones de 1999.

Las tensiones entre renovadores y ortodoxos nuevamente pasaron factura al partido con una nueva secesión en los primeros años de la década del 2000. En este caso, se observa una nueva ruptura en 2001. Facundo Guardado fue expulsado del partido acusado de desacato. Para el 2002 ya había fundado un partido nuevo y en él se acogieron otros seis diputados identificados con el ala renovadora, quienes también habían sido expulsados del FMLN. Sin embargo, esta ruptura no supuso la salida de las FPL del FMLN, sino más bien su mimetización con las líneas ortodoxas dominantes del PC, al igual que con los otros partidos PRTC y RN.

Sin embargo, el camino hacia la democracia y la inclusión al interior del Frente marcó tendencias disímiles. Por un lado, las diferencias internas fueron difíciles de manejar y, aunque se establecía el respeto por tendencias y liderazgos, los disidentes a la línea dominante estuvieron consistentemente sometidos a sanción. Por otro lado, si bien se estableció un proceso de elecciones internas para elegir a los candidatos, este no siempre resultó en un manejo adecuado de las corrientes internas. Los momentos de elección de las candidaturas constituían un escenario de enfrentamiento y de descalificaciones mutuas y, frecuentemente, las disidencias internas terminaban en expulsiones o escisiones, incluso de líderes carismáticos.

Al parecer, según Puyana Valdivieso (2008), las tendencias y diferencias en el Frente se ven reflejadas en el desarrollo organizativo del partido, que al 2005 contaba ya con cinco reformas estatutarias, en las cuales se imponía cada vez más el control del ala ortodoxa a través de expulsiones, fugas y sanciones. A juicio de este autor, la dinámica del partido:

> [...] se caracteriza por una incorporación en el juego democrático que contrasta con una dinámica interna poco estable y democrática. Lo anterior contradice la creencia generalizada de que el FMLN es uno de los partidos con mayores niveles de democracia interna en El Salvador. Esto se suele afirmar con base en el diseño institucional del partido que, desde 2000 (hasta fines de 2006), incorporó en sus Estatutos la selección de candidatos y autoridades a través de elecciones internas [...] (p. 9).

Sin embargo, dicho mecanismo no resultó tan transparente en la práctica y finalmente fue desechado.

Es interesante, a su vez, considerar que el partido no ha observado procesos identificables orientados a una renovación generacional. Los dirigentes del Frente son, en lo fundamental, los mismos grupos de dirigencia política y militar de la época de la guerra, y de hecho, el vicepresidente en el período 2009-2014 y presidente electo para el período 2014-2019 fue uno de los principales miembros de la comandancia general del Frente en su etapa contendiente y en su etapa firmante de los Acuerdos de Paz. De igual manera sucede con los diputados y autoridades dentro de partido.

Afortunadamente, es posible notar un avance en materia de género. Si bien aún hay brechas que vencer, el FMLN presenta ahora una regla para cuotas de candidatas a puestos de elección popular (35 % de las postulaciones deben ser de mujeres) y ha introducido más mujeres en sus estructuras partidarias, inclusive al más alto nivel.

Por supuesto, estas deficiencias no son exclusivas del FMLN. Su principal contendiente en el terreno político, la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) también ha contado con disidencias y fuertes debates internos, aún más agudos desde que perdió las elecciones en 2009.

La inclusión respecto a la agenda de reformas de la sociedad civil

En la época de la guerra, la lucha del FMLN en su fase contendiente, se hizo con el apoyo de diversas organizaciones y colectivos tales como sindicatos, organizaciones de campesinos, mujeres, jóvenes, etc. Sin embargo, los temas relativos a las demandas particulares de estos colectivos, la estructura social y económica excluyente y la distribución desigual de la tierra, no formaron parte de las negociacione s de paz y acuer-

dos para la posguerra, sino que fueron delegados a otra creación de los acuerdos: el Foro de Concertación Económico y Social (FES), junto con las medidas paliativas a los ajustes estructurales iniciados con la gestión del presidente Cristiani en 1989.

El FES fue un esfuerzo necesario, pero limitado, por involucrar a los actores sociales en las propuestas de las políticas económicas y sociales que no fueron abordadas por los Acuerdos de Paz. Establecía representación de sindicatos, asociaciones empresariales y el Estado, que no necesariamente eran parte de las organizaciones afiliadas a la lucha guerrillera o dentro del ejército revolucionario. Su agenda incluía temas tales como la distribución de las tierras en zonas conflictivas entre los excombatientes desmovilizados, así como la distribución de terrenos que excedieran las 245 hectáreas y aquellas de propiedad del Estado que no fueran reserva natural, a pequeños agricultores que carecían de tierras cultivables. Asimismo, se le pedía crear mecanismos efectivos para proteger al consumidor y promover el acceso de los trabajadores a la propiedad de las empresas privatizadas.

Empero, este foro no recibió apoyo decisivo de los firmantes de los acuerdos —ni siquiera del FMLN, que se enfocó más bien en afianzar su incorporación al sistema de partidos formales— y no logró institucionalizarse. Si bien consiguió algunos cambios en materia de derechos laborales relativos a la libertad de asociación y la negociación colectiva, que fueron materializados en una reforma al código de trabajo, no fue exitoso en instaurar un mecanismo permanente de diálogo social sobre las materias sociales y económicas.

Otro de los temas pendientes del ahora partido es la inclusión de las mujeres. Como señala Morena Herrera (como se citó en Martínez, 2012), las mujeres constituían el 30 % de los combatientes y el 60 % de las personas organizadas en los frentes de masas y políticos. Sin embargo, esta contribución fue ampliamente ignorada por muchos años, especialmente durante las negociaciones de los Acuerdos de Paz. Los ejércitos revolucionarios mantenían una división sexual del trabajo en la cual las mujeres aparecían como colaboradoras y no necesariamente era sencillo ascender a puestos de dirigencia. Adicionalmente, las demandas de las mujeres —a tono con las corrientes socialistas dominantes de la época— eran consideradas menos importantes que las demandas de clase o las demandas del partido (o inclusive eran consideradas burguesas). Las mujeres tampoco fueron las primeras beneficiadas de las tierras a entregar y se priorizaba a los hombres, incluso si eran los hijos de las antiguas combatientes.

Las demandas de las mujeres han tomado asimismo mayor importancia, especialmente en lo relativo a la prevención y sanción de la violencia de género y la protección a la maternidad. Sin embargo, los derechos sexuales y reproductivos siguen esperando ser reivindicados plenamente y, al menos para 2014, no hay señales de que el FMLN esté en favor de volverlos una realidad. A manera de ejemplo, en la campaña presidencial de 2014, el FMLN se expresó contrario a modificar las regulaciones que penalizan el aborto en cualquiera de sus formas, incluido el aborto terapéutico. Adicionalmente, el presidente de la asamblea legislativa del período 2012-2015 —miembro prominente del FMLN— se niega a recontratar a una trabajadora de la asamblea que fue despedida por rechazar el acoso sexual al que era sometida, pese a que sobre el caso ya se han pronunciado a favor de la trabajadora todas las instancias jurídicas del país, incluida la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En suma, hace falta mucho para que los derechos de las mujeres sean parte de la agenda de trabajo del FMLN.

El FMLN como partido de gobierno

Los Acuerdos de Paz, como se ha dicho, permitieron construir condiciones para el establecimiento de elecciones competitivas y legítimas, donde las antiguas fuerzas políticas, contendientes y excluidas, pasaron a formar parte de la institucionalidad política.

La primera participación electoral del FMLN fue en 1994 y logró consolidarse como el partido de oposición más importante y la segunda fuerza electoral. Sus apoyos electorales, en aquel momento, no lograban ser suficientes para otorgarles una victoria en las elecciones presidenciales.

Desde la firma de los Acuerdos de Paz, se celebraron elecciones presidenciales en 1994, 1999 y 2004. Todas fueron ganadas por ARENA. Según datos del Tribunal Supremo Electoral (2015), para 1994, la victoria fue con

el 68,3 % de los votos válidos. En 1999 el porcentaje fue de 52 % y en 1999 de 57,7 %.

Sin embargo, luego de 20 años de gobierno de ARENA, con el desgaste correspondiente y la inclusión de un candidato foráneo al partido, pero con mucha popularidad por su trayectoria de trabajo periodístico, se abrió la posibilidad real de alcanzar una victoria electoral con el 51,3 % de los votos y se cierra un círculo con la inclusión plena y completa de los contendientes al sistema político y al control de gobierno.

En efecto, en las elecciones de 2009, el FMLN se lanzó con un candidato que no formaba parte del Frente. El periodista Mauricio Funes Cartagena se inscribió al FMLN para participar en las elecciones —la ley no permite candidaturas no afiliadas a partidos políticos—, pero no era un militante tradicional de este partido.

Con la victoria en las elecciones se inauguró oficialmente el primer gobierno de izquierda en el país, si bien su composición no fue completamente partidaria, ni unipartidaria. En él, participaron muchos miembros del FMLN —especialmente en el gabinete social y de seguridad—; pero asimismo fueron incorporados académicos independientes, e incluso, miembros de otros partidos, para el manejo del gabinete económico y de algunos programas sociales.

> “En el área social, los cambios registrados tienden a reducirse a programas focalizados, pero sin que se trascienda a políticas universales de bienestar para la población”

Las novedades no partidarias de 2009 no eran resultado ni origen de cambio o renovación en el FMLN, sino más bien una necesaria estrategia electoral. El Presidente siempre desligó su accionar al del partido y el mismo Frente calificaba al gobierno de Funes como de coalición y no como un gobierno FMLN. Para muestra, un par de declaraciones: “Una cosa es la opinión del FMLN y otra cosa es la política de gobierno” (Arauz, 2014b), sostuvo el director del equipo de programa de gobierno del FMLN para el período 2014-2019. En el 2014, el FMLN ganó la presidencia con Salvador Sánchez Cerén, quien no solo es miembro del partido, sino también un líder histórico y miembro de la comandancia general, y uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz. Para ese nuevo período (2014-2019), las autoridades del FMLN consideran que ya no se trata de un gobierno de coalición, sino completamente del FMLN; por ello, el secretario de prensa de este partido sostuvo que es en el nuevo gobierno donde se podrá ver el “Poder real del FMLN” (Arauz, 2014a).

Política Pública alrededor de la exclusión social

Las expectativas sobre el primer gobierno de izquierda en la historia política salvadoreña, se esbozaron de manera especial en el área socioeconómica. Si los acuerdos habían derivado en transformaciones político-institucionales importantes, un gobierno de izquierda se perfilaba como la oportunidad para impulsar cambios económicos relevantes y de impacto sobre los factores de exclusión y desigualdad social.

Sin embargo, las variaciones en esta materia respecto a gobiernos anteriores han sido mínimas o, desde algunas visiones, no las ha habido. El sistema económico basado en servicios, especialmente financieros, y comercio, con un escaso y poco desarrollado sector productivo nacional, sigue sin alteraciones y sin mayores señales de transformación en el futuro próximo. La situación de exclusión social[5] de la mayoría de la población, que conlleva a que la mayoría de salvadoreños viva en la pobreza y enfrente el deterioro de sus condiciones de vida, tampoco ha observado alteraciones que puedan destacarse. Como lo señala el informe del Índice de Desarrollo Humano, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2013) correspondiente al año 2013, en más de 50 años de políticas públicas se identifican:

> ...de manera recurrente tres situaciones no resueltas sobre la sociedad salvadoreña: a) la sociedad salvadoreña no ha invertido de forma sistemática el suficiente dinero y voluntad para aprovechar el tesoro y potencial que representa su gente; b) es tolerante con la pérdida, el desperdicio y la fuga de su principal riqueza: la gente; c) todavía se diseñan e implementan políticas públicas sin tomar en

5 Se entiende “exclusión social” como el resultado de los procesos de desempoderamiento extremo de ciertos grupos sociales, generado por desigualdades de acceso y participación en los mercados básicos (laboral, de capitales y de seguros; pero también tierras y conocimiento); lo cual, si no es neutralizado por el acceso a la ciudadanía social, desemboca en la no participación en dinámicas básicas de pertenencia en la sociedad (Pérez, 2012).

cuenta las aspiraciones anhelos, necesidades y derechos de las personas (p. 1).

Según este informe, para 2013, más de la mitad de la población económicamente activa (PEA) se encuentra subempleada o desempleada y más del 60 % de la población habita en viviendas con al menos una carencia importante, solo uno de cada cinco empleos es calificado bajo los parámetros de empleo decente, el acceso a servicios como educación y salud es altamente inequitativo, las condiciones de vida son precarias para la mayoría de la gente y las oportunidades y posibilidades de mejorar la situación se realizan fundamentalmente en el extranjero (entre un cuarto y un tercio de la población salvadoreña se encuentra viviendo en el extranjero, especialmente en los EE. UU.). El informe concluye tristemente que "las personas han sido solo un medio para alcanzar la riqueza" (PNUD, 2013, p. 6).

En el área social, los cambios registrados tienden a reducirse a programas sociales focalizados de atención a ciertos grupos en situación de vulnerabilidad por pobreza extrema, pero sin que se trascienda a políticas universales de bienestar para la población y superación de las carencias históricas de grandes grupos de personas. Es decir, si bien el gobierno en manos del FMLN no ha caído en una estrategia liberal, sí es posible afirmar que no ha trascendido del populismo y, como consecuencia, no se ha desarrollado en la gente una cultura de derechos y de ciudadanía, sino más bien, la continuación de una cultura clientelar que juega, nuevamente, en favor de los partidos políticos.[6]

Desafíos en seguridad ciudadana

Otra de las grandes problemáticas del país es la falta de seguridad ciudadana y, con respecto a ella, las pandillas representan una de las más evidentes dificultades. Las mismas se han convertido en redes delincuenciales vinculadas con tráfico de armas, drogas y personas. Paralelamente, son percibidas como las principales causantes de las muertes en el país y son, en efecto, las principales redes de extorsiones para familias, pequeños y medianos negocios; habiendo llegado a controlar territorios y barrios.

Han penetrado el entorno familiar, escolar y comunitario, transformando las redes sociales y de solidaridad de las comunidades y familias, pero también tocan las expectativas para la vida de muchas personas, especialmente jóvenes, que se incorporan al delito y la transgresión desde muy temprano en sus vidas. Demorará décadas minimizar o revertir estos efectos, por lo que hay que tomar cartas en el asunto más temprano que tarde.

Para el año 2011, los delitos contra el patrimonio eran un asunto grave para el país y constituían un índice de 327,7 por cada 100.000 habitantes; mientras que las extorsiones sumaban un total de 53 por cada 100.000 habitantes. Entre 2005 y 2011, la tasa de homicidios era cerca de 62 por cada 100.000 habitantes y para el 2012, esta cifra llegó a 70 (FundaUngo, 2012).

Un problema muy grave, ciertamente. La respuesta del gobierno fue en dos vías abordadas casi simultáneamente. Una, la militarización de la estrategia de seguridad ciudadana, y la otra, la negociación con los líderes de las pandillas, otorgando privilegios carcelarios bajo el compromiso de disminuir los homicidios por conflictos entre las pandillas.[7] Los resultados de esta negociación no se hicieron esperar. Los homicidios bajaron radicalmente a 40 por 100.000 habitantes. Sin embargo, los efectos nocivos a mediano y largo plazo —tales como el fortalecimiento del control territorial y los vínculos con

6 Siguiendo a Reygadas y Filguerira (2011), en su trabajo sobre políticas públicas en América Latina, entenderemos estrategia liberal como la que pone en el centro la igualdad de oportunidades e incluye programas de transferencias condicionadas y formación de cuasi-mercados de servicios públicos (el país que más lo aplica sería Chile); mientras que la populista promueve campañas sociales para suplir bienes básicos –como alfabetización, salud, etc.–, políticas focalizadas, subsidios y fuerte intervención del Estado en la economía, a través del control del tipo de cambio, precios e insumos; nacionalizaciones, imposiciones de salarios; etc. (caso tipo: Venezuela). En medio, existe otra estrategia que sería la socialdemócrata, que hace énfasis en la igualdad de capacidades e impulsa derechos universales, reformas tributarias y programas de promoción al desarrollo (Caso Uruguay).

7 El gobierno no ha admitido haber negociado con las pandillas, sino solamente haber facilitado una tregua entre ellas. Sin embargo, las investigaciones de varios medios de comunicación, más las declaraciones de exfuncionarios de gobierno dejan entrever que efectivamente estas negociaciones existieron y que el gobierno adquirió compromisos con estos líderes. El nuevo gobierno inaugurado en 2014, ha tomado distancia respecto a esta negociación. El nombre oficial de este fenómeno es "tregua entre pandillas".

el crimen organizado trasnacional— relativos al empoderamiento de las estructuras criminales dentro de los barrios, tampoco fueron disimulados. Adicionalmente, esta negociación con las pandillas contó con la aprobación y participación de las Fuerzas Armadas.

Un académico salvadoreño, José Miguel Cruz (2013), nos dice, en referencia a la "tregua entre pandillas":

> El problema fundamental de la tregua del gobierno de Funes es que la misma no se basa en una estrategia institucional de reconstrucción del Estado de derecho en el país, sino en la búsqueda desesperada de legitimidad política a través del manejo de los homicidios. En un contexto en el cual el Presidente (no pertenecía orgánicamente ni representaba a un partido político) y, además, el partido que lo llevó al poder tenía muy poco interés en ayudarle a gobernar, el presidente y su gobierno tuvieron primero que pactar con militares y algunos partidos para poder pactar con las pandillas, y luego entonces mostrar ciertos resultados en seguridad pública (párr. 1).

Relación entre el FMLN y las Fuerzas Armadas

Las Fuerzas Armadas, pese a las resistencias iniciales,[8] especialmente antes y durante la negociación de los Acuerdos de Paz, han sido de las instituciones que más han cambiado y su cumplimiento con los acuerdos fue bastante exitoso. Según Córdova (2005):

> ...en el marco de los procesos de paz que se han desarrollado en Nicaragua, Guatemala y El Salvador, se ha producido una primera generación de reformas militares que han promovido un proceso de desmilitarización y han sentado las bases para la subordinación del poder militar al poder civil (p. 71).

Estas reformas modificaron principios doctrinarios, redujeron número de efectivos y presupuestos, promovieron investigación y depuración, reformaron el sistema educativo, reorganizaron los servicios de inteligencia del Estado y reformaron el servicio militar en su conjunto. Como resultado, las Fuerzas Armadas se encuentran en una situación de legitimidad y se definen como institución apolítica, obediente y no deliberante.

Curiosamente, en el gobierno 2009-2014, los militares han gozado de mayores privilegios y mayores cuotas de participación en políticas de Estado de las que habían mantenido durante la posguerra. Se desconoce, eso sí, si esta nueva alianza está siendo apoyada desde el partido FMLN en su totalidad o si ha habido discusiones internas al respecto.

Los siguientes datos ilustran este fenómeno:

a. Para 2011 (Arauz, 2011), se reportaba que el número de militares había aumentado en un 57 % desde la llegada del FMLN al gobierno. Estos efectivos serían utilizados para patrullajes preventivos en zonas controladas por las pandillas, a fin de brindar protección a la población. Esto implica una modificación a la vocación civil de la estrategia de seguridad ciudadana.

b. En 2012, un militar fue puesto al frente del Ministerio de Seguridad y Justicia; y otro militar fue colocado al frente de la Policía Nacional Civil. Con ello, se trastocó uno de los pilares de los Acuerdos de Paz respecto a la concepción de la seguridad ciudadana como un tema que merece un tratamiento civil y no militar; y se violenta la Constitución de la República. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a mediados de 2013, dictaminó la inconstitucionalidad de estos nombramientos y el Presidente de la República rectificó sacando a estos funcionarios de esos puestos y colocándolos en áreas de competencia de las FF. AA.

c. En 2013, los militares claramente han desobedecido órdenes del Presidente de la República respecto a homenajes a victimarios de violaciones a derechos humanos, cometidas durante la guerra salvadoreña. El Presidente de la República, en enero de 2012, durante un acto público en memoria de las víctimas de la masacre de El Mozote, una de las peores masacres cometidas por las Fuerzas Armadas contra la población civil en la época de la guerra, prometió revisar la historia de los considerados héroes por las Fuerzas Armadas (el coronel al mando del operativo mencionado aún hoy día recibe honores militares) y aseguró que no habría más honores para implicados en violaciones a derechos humanos. A la fecha, estos militares siguen siendo honrados por las Fuerzas Armadas y sus nombres no se han eliminado de monumentos y edificios. A finales de 2013, el ejército volvió, en un acto público, a homenajear a los comandantes de la masacre El Mozote.

8 Según algunos cables de la CIA que fueron hechos públicos por el periódico El Faro, el 12 de enero de 2012, el ejército se intentó amotinar en 1989 contra el entonces Presidente Cristiani, para impedir las negociaciones de paz.

d. En 2013, los militares también han desobedecido dos llamamientos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que reclamaban la comparecencia del ministro de defensa para aclarar las vinculaciones de los militares en casos de niños desaparecidos durante el conflicto. Los casos eran llevados por la organización Pro Búsqueda, cuyos archivos fueron incendiados una semana antes de los citatorios. Los archivos destruidos fueron principalmente los que vinculaban los casos para los que fue llamado el ministro de defensa a la Sala de lo Constitucional.

e. En 2013, el ministro de defensa, en medio de un conflicto limítrofe con Honduras, en el cual ya se había vulnerado el derecho al libre tránsito por el territorio salvadoreño de un grupo de compatriotas, declaró que las FF. AA. no tenían capacidad de defender la soberanía nacional, sin que el Presidente de la República sancionara a dicho funcionario.

f. En 2013, las Fuerzas Armadas compraron una flotilla de aviones a Chile que databan de la guerra de Vietnam, pese a las críticas de todos los sectores que señalaban la inutilidad de este gasto (dado que El Salvador no se encuentra bajo amenaza militar y por la antigüedad de las aeronaves) y mostraban sospechas por la forma en que fue desarrollada esta compra.

g. En 2013, uno de los asesores del plan de gobierno de la fórmula presidencial del FMLN fue un militar implicado en el asesinato de los sacerdotes jesuitas y dos trabajadoras, según el informe de la Comisión de la Verdad. Dicho militar, además, fue el que dio refugio en la Segunda Brigada de Infantería a los implicados en la causa judicial que se conduce en España sobre este caso, justo cuando la Interpol decretó alerta roja sobre estos militares.

En América Latina en general, y hasta 2008, la subordinación de los militares al poder civil parece una situación estable. Según Pión-Berlin (2008), si se involucran en funciones diversas a pedido de los funcionarios electos democráticamente y no en contra de ellos, los militares participan en operaciones de seguridad interna sin que el control civil se vea disminuido; los líderes civiles, aunque no manejen temas de defensa, mantienen el control de los militares y la defensa nacional no parece ser una prioridad de los actuales gobiernos latinoamericanos. Este investigador no prevé "...amenazas militares serias a la democracia y al control civil de las fuerzas armadas en América Latina" (p. 62); sin embargo, advierte que el hecho de que los ejércitos se estén involucrando en tareas de seguridad interna no deja de ser un tema por observar. Lo usual es pensar que si "[...] los gobiernos dependen de las fuerzas armadas para llevar a cabo misiones internas, éstas pedirán más a cambio, presionarán para tener más recursos o más poder" (p. 52).

No necesariamente esto se aplica en todos los casos, pero habría que reflexionar qué pasa en El Salvador. En este caso, un partido de izquierda, antiguo contendiente en una guerra civil, ha llegado a gobernar, por lo que las presiones para su ejercicio de poder pueden ser múltiples. En un entorno de oposición agresiva por parte de la derecha, sus partidos y sus agentes; con problemas urgentes y crecientes de seguridad ¿es la alianza con los militares una opción? ¿Es un peligro del que hay que estar pendientes?

Conclusiones

Las fuerzas contendientes en El Salvador han dado saltos de calidad en el último medio siglo. Pasaron de ser organizaciones político-militares —claramente disidentes y contestarías al orden establecido, con una propuesta revolucionaria y accionar guerrillero—, a ser un ejército revolucionario con capacidad de disputar el poder a un ejército armado por la potencia hegemónica en el continente (Estados Unidos de América), pero también con capacidad de negociar las nuevas reglas del Estado y la democracia; luego, a ser un partido político plenamente insertado en la vida legal del país, y finalmente, a ser un partido en el gobierno.

Claramente, su transición ha sido exitosa hacia la inclusión política. De grupos relativamente marginales para las decisiones de Estado y gobierno, pasaron a ser no solo incluidos, sino en posición de incluir (o no) las demandas sociales de la ciudadanía en la agenda de gobierno. Los Acuerdos de Paz de 1992 han sido los catalizadores de esta promoción.

Pero, si bien la inclusión en el caso de lo político ha sido evidente para el FMLN, no lo es tanto para las deman-

das sociales y para los colectivos que incluso apoyaron la lucha política y militar del FMLN. O al menos, ello no parece tan claro y lineal.

Las demandas originales de las organizaciones que formaron el FMLN tenían que ver con la pobreza de las mayorías; las pésimas condiciones de trabajo y de vida de las personas; la ausencia de espacios para la participación política plena de las disidencias y la construcción de una sociedad socialista donde esas injusticias fueran atenuadas y la riqueza mejor distribuida. Empero, estas demandas no formaron parte de los Acuerdos de Paz y si bien estos establecían que serían abordadas en el FES, éste tampoco tuvo los respaldos políticos suficientes. Probablemente, la situación de la guerra y la urgencia de ponerle fin con garantías de inclusión para el contendiente no permitía ir más allá. Probablemente, como relata el PNUD (2013): el Acuerdo de Paz fue, en el fondo, un acuerdo político del cual no se podía esperar mucho en los campos social y económico, al menos no en el corto plazo. No obstante, el Acuerdo de Paz y la experiencia de los diez años siguientes sí guardan correspondencia con los objetivos que se fijaron las partes cuando comenzaron las negociaciones: la paz, el respeto a los derechos humanos, la democratización y la reconciliación. El Acuerdo de Paz es, en palabras del Secretario General de las Naciones Unidas, "un plan maestro" para alcanzar esos objetivos. La voluntad necesaria para construir con base a ese plan le corresponde a todas y todos los salvadoreños.

Pero, 22 años después y con un FMLN como partido en el gobierno, ¿podemos esperar que la inclusión alcance a la población y sus demandas? Las señales aún no son claras. Las políticas públicas tienen un carácter populista con lo que el concepto de ciudadanía[9] aún no tiene pase de abordar en el país; los pactos con los militares para aliviar el problema de la inseguridad tienen sombras que podrían llegar a comprometer la sumisión del ejército al poder civil; el sistema de partidos políticos les ha otorgado a éstos muchos poderes y pocos controles con lo que los espacios no fiscalizados siguen abiertos a la búsqueda de rentas y la cooptación de las instituciones por parte de las élites. Dentro de estas élites, además, ahora encontramos al Frente.

Lo que es evidente, sin embargo, es que todos los nuevos escenarios que se han configurado en los últimos años, parecen indicarnos que si bien los Acuerdos de Paz dieron de sí lo que era posible, hay temas del proceso de democratización que regresan y se posicionan como prioridades: el sistema económico excluyente de las mayorías, un sistema político de élite y un sistema de partidos políticos excluyente a su vez; problemas sociales que desbordan la capacidad de maniobra de los gobiernos y, como un actor —ahora a la sombra— los ejércitos.

Aun hay que investigar más. Probablemente habría que pensar en una segunda generación de Acuerdos de Paz; se plantea esto como una hipótesis para acciones futuras.

9 El concepto de ciudadanía implica la conciencia de derechos, con lo cual las personas no se perciben como beneficiarias de la voluntad magnánima del gobierno, sino como derechohabientes demandantes de derechos que les pertenecen y a los cuales los gobiernos deben responder. El ciudadano es mandante y no cliente.

Referencias

Arauz, S. (7 de diciembre de 2011). Cantidad de militares ha crecido un 57% en primer gobierno de izquierda. *Periódico El Faro.* Recuperado de http://www.elfaro.net/es/201112/noticias/6827/

Arauz, S. (13 de marzo de 2014a). Ahora van a negociar con el poder real del FMLN. *Periódico El Faro.* Recuperado de http://www.elfaro.net/es/201403/noticias/15038/

Arauz, S. (13 de enero de 2014b). Una cosa es la opinión del MLN y otra cosa es la política de gobierno. *Periódico El Faro.* Recuperado de http://www.elfaro.net/es/201401/noticias/14424/

Benítez, R. (1989). *La teoría militar y la guerra civil en El Salvador*. San Salvador, El Salvador: UCA Editores.

Córdova, R. (2002). Las relaciones cívico militares en Centroamérica a principios de siglo. *Fasoc, año 17*(4), 65-77.

Cruz, J. M. (19 de junio de 2013). Dimensión política de la tregua. *Periódico El Faro.* Recuperado de http://www.elfaro.net/es/201306/opinion/12436/Dimensi%C3%B3n-pol%C3%ADtica-de-la-tregua.htm

Ellacuría, I. (2005). A sus órdenes mi capital. En I. Ellacuría, *Veinte años de historia en El Salvador (1969-1989)* (Escritos políticos, Tomo I). San Salvador, El Salvador: UCA Editores.

FMLNhttp://www.fmln.org.sv/. (s.f.). *Historia del FMLN.* Recuperado de http://www.fmln.org.sv/sv/oficial-v3c/index.php/nuestro-partido/historia-del-fmln

FundaUngo. (2012). *Atlas de la violencia en El Salvador, 2005-2011*. San Salvador, El Salvador: FundaUngo.

González, L. A. (2009). El Golpe de Estado de 1979. *Diario Digital Contrapunto*. Recuperado de http://www.archivocp.contrapunto.com.sv/columnistas/el-golpe-de-estado-del-15-de-octubre-de-1979

Martínez, J. (2012). El Salvador. The guarantees of security: the FMLN and the Salvadorean peace process. En V. Dudouet, H. Giessmann & K. Planta K. (Eds.), *Post War Security Transitions*. Oxon, UK: Routledge.

Menjivar, R. (1995). *Acumulación Originaria y Desarrollo Del Capitalismo en el Salvador.* San Salvador, El Salvador: Editorial Universitaria Centroamericana, EDUCA.

Pérez, J. P. (2012). Exclusión social. Una propuesta crítica para abordar las carencias materiales en América Latina. En J. P. Pérez (Ed.), *Sociedades Fracturadas. La exclusión social en Centroamérica*. San José, Costa Rica: FLACSO.

Pion–Berlin, D. (enero-febrero, 2008). Militares y democracia en el nuevo siglo. Cuatro descubrimientos inesperados y una conclusión sorprendente. *Nueva Sociedad*, (213), 50-63.

PNUD [Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo]. (2013). *Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013*. La Libertad, El Salvador: Impresos Múltiples S.A. de C.V.

Puyana, J. R. (2008). *El proceso de selección de los candidatos a diputados del FMLN en 2005*. Universidad de Salamanca, Instituto Interuniversitario de Iberoamérica, Observatorio de Partidos Políticos de América Latina. Recuperado de http://americo.usal.es/oir/opal/disc/OPAL_FMLN_Puyana.pdf

Ramos, C. G. (1995). *El proceso electoral 1994*. San Salvador, El Salvador: FLACSO Programa El Salvador.

Ramos, C. G. (1996). *El Salvador: En el incierto camino de la gobernabilidad democrática*. (Cuaderno de trabajo N° 11). San Salvador: FLACSO Programa El Salvador.

Ramos, C. G. (1998). De los Acuerdos de Chapultepec a la construcción de la democracia. En C. Ramos. (De la serie) *Colección Aportes N° 5*. San Salvador: FLACSO Programa El Salvador.

Reygadas, L. & Filgueira, F. (2011). Desigualdad y crisis de incorporación: la caja de herramientas de políticas sociales de la izquierda. En Theotonio Dos Santos (Ed.), *América Latina y el Caribe: Escenarios posibles y políticas sociales* (pp. 133-160). Montevideo, Uruguay: FLACSO y UNESCO.

Villalobos, J. (julio-septiembre, 1999). Sin vencedores ni vencidos. Pacificación y reconciliación en El Salvador. *Fasoc, Año 14*(3), 23-36. Recuperado de http://www.fasoc.cl/files/articulo/ART41125bf1e2f50.pdf

3.

Particularmente, en conflictos armados que siguen lógicas regionales heterogéneas, las soluciones negociadas deben responder también a las características del nivel subnacional y tener en cuenta las relaciones de poder de las regiones. Un ejemplo del peligro que albergan negociaciones que no siguen este principio es el caso, prácticamente desconocido, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, uno de los grupos insurgentes colombianos que se desmovilizaron a principios de la década de 1990, participaron en la Asamblea Nacional Constituyente y buscaron posteriormente su camino a la arena política legal. Este artículo busca contar una de las historias no contadas del conflicto armado colombiano y presentar lecciones aprendidas, al analizar tanto las raíces, las bases ideológicas y las características del PRT, como el proceso de negociación y transición a actor político legal realizado por el mismo grupo. Tales lecciones pueden ser de alto valor en el contexto del actual proceso de negociación con las FARC.

La historia no contada del Partido Revolucionario de los Trabajadores: la transición del PRT de un partido clandestino a un actor de la política legal

>>

Por David Rampf, David Castillo y Marcela Llano

> Nosotros pensamos y decidimos que [...] podíamos a través de este proceso creer y crecer en la vía democrática para construir desarrollo con inclusión social y pluralismo político; que la dejación de armas [...] abriría espacios políticos para incidir de manera civilizada o racional en la solución de los problemas de la región y del país que por décadas no resuelve el Estado Colombiano ni la dirigencia política tradicional, sumiendo a los diferentes actores sociales en la desesperanza, la miseria y la violencia (PRT, 2014, párr. 7).

La solución a los problemas regionales y nacionales, a través de su participación en la arena política legal, fue la expectativa del *Partido Revolucionario de los Trabajadores* colombiano (PRT) en el momento de su desmovilización el 26 de enero de 1991. Sin embargo, el 17 de julio 2014, en un foro regional sobre víctimas convocado por el PNUD, una delegación del antiguo PRT hizo un balance sombrío de los años transcurridos desde que se arrojaron las armas del partido al mar Caribe, al denunciar una campaña de exterminio realizada en contra de algunos exmiembros del partido. En lugar de la deseada y prometida puerta abierta a la política colombiana y de una verdadera oportunidad de cambiar las injusticias estructurales, el PRT, a su propio juicio, solo encontró violencia y una cultura política excluyente. Frente a esta situación, y al culpar a la élite tradicional de la región de ser la principal autora de la campaña, la delegación planteó la cuestión de si en realidad era posible participar en la política colombiana, a nivel regional, después de un acuerdo de paz con el Gobierno Nacional (PRT, 2014).

Esta experiencia de desmovilización manifiesta la importancia de que, en especial, en conflictos armados que siguen lógicas regionales altamente heterogéneas, como lo hace el colombiano, se exploren soluciones que respondan también a lógicas locales. Aunque remotamente nombrada en textos que no sobrepasan una página,[1] la historia del PRT, uno de los grupos guerrilleros que se desmovilizaron en Colombia entre 1990 y 1994, representa una fuente importante de lecciones aprendidas para futuros procesos de paz entre grupos insurgentes con enfoques primordialmente regionales y autoridades del nivel nacional. A pesar de haber contado con cierta influencia en otras regiones del país, el partido centró su enfoque tanto en la negociación de paz como en el proyecto político previsto para el tiempo del post-acuerdo, en especial en departamentos de la Costa Caribe, como Atlántico, Bolívar y Sucre. Estos lugares tradicionalmente se han caracterizado por altos niveles de concentración del poder político y económico en manos de una pequeña élite regional. Debido a esto, durante las últimas cinco décadas la región ha sido el escenario de una movilización campesina intensa en búsqueda de reformas agrarias que así ha provocado respuestas violentas de la élite, la cual poco a poco formó estrechas alianzas con grupos paramilitares (González 2014, pp. 14-ss.).

Con base en entrevistas y tres talleres con exmiembros de diferentes rangos del PRT y representantes de su antigua base social, realizados en Bogotá y Ovejas (Sucre), así como en una amplia revisión de diversas fuentes

1 Ver por ejemplo: Jiménez (2003, p. 211); Isaza (1993, p. 144); Medina y Sánchez (2003, p. 403).

primarias, este artículo pretende arrojar luces sobre un capítulo desconocido de la historia colombiana y sistematizar la experiencia del PRT con el fin de analizar los diversos factores que llevaron a la relativamente poca incidencia de su proyecto político. Mientras que en un primer momento se reseñan los orígenes del partido en el maoísmo colombiano de la década de 1970 y se pone de relieve la ideología (inicial) y las características del PRT, la segunda sección se centra en el cambio ideológico que condujo a las negociaciones de paz y a la desmovilización final en 1991. Posteriormente, el documento analiza las expectativas de los miembros del partido proyectadas hacia el tiempo que vendría después de dejar las armas y subraya la participación exitosa inicial del PRT en la política legal. La cuarta y última sección, finalmente, analiza los factores que causaron que el proyecto político no alcanzara las altas expectativas.

Origen, ideología y características del PRT

Las raíces del PRT se remontan a la gama de diversos movimientos de orientación maoísta en torno al *Partido Comunista de Colombia - Marxista Leninista* (PCC-ML), que formaron parte de la nueva izquierda latinoamericana, caracterizada principalmente por su crítica a los comunistas tradicionales (partidos y grupos armados) como reformistas. Al insistir en que solo una verdadera revolución podía conducir a la dictadura del proletariado (como fin último), este sector ortodoxo de la izquierda revolucionaria colombiana rechazó la posibilidad de una convivencia pacífica de ideas capitalistas y socialistas y, por lo tanto, también de todo tipo de participación en las instituciones burguesas. La mejor expresión de este principio fue una estricta política de abstención en cualquier tipo de elecciones (Archila, 2008).

> “La principal justificación de la no participación electoral fue que era un mecanismo que perpetúa el sistema (...) o como decía la famosa consigna ´votar es apoyar la tiranía”
> Enrique Flórez

A finales de 1974, y debido a discrepancias sobre la ruta estratégica del partido, el PCC-ML experimentó una crisis interna, que dio lugar a la expulsión de la mayoría de sus miembros bajo el nombre de *Tendencia Marxista-Leninista-Maoísta* (TMLM). Mientras que el Comité Central del PCC-ML, en este momento, aún estaba siguiendo dogmáticamente el ejemplo de la revolución china de Mao, al subestimar la importancia de los sectores urbanos del proletariado y adherirse a la lucha armada centrada en el campo como única estrategia capaz de dar lugar a una verdadera revolución, la TMLM cuestionó este principio rector, exigió una orientación más dirigida hacia la realidad nacional, que hacia otros países y criticó especialmente la desconexión del partido con los movimientos urbanos de protesta, los cuales ganaron importancia durante la década de 1970. Aunque la Tendencia en su órgano de partido “Viraje” insistió en que “la resistencia violenta de la reacción marcaba el carácter violento de la vía hacia el poder que inevitablemente tendrían que transitar las fuerzas de la revolución” (Viraje, 1979, p. 18) y reconoció el importante papel del sector campesino en la revolución, también destacó particularmente la tarea esencial de vincularse más estrechamente con los movimientos urbanos de protesta ([ee.][2] Flórez, 2013; Flórez, 2014a).

Al compartir principalmente sus discrepancias de opinión frente a la posición del Comité Central y su orientación general maoísta, y a pesar de su esfuerzo por unir los dispersos grupos de orientación marxistas leninistas, pero sin contar con una estrategia común, la TMLM experimentó una serie de divisiones internas, poco después de haber sido expulsada del PCC-ML. Después de la división de un sector llamado *Ruptura* y del *Movimiento Revolucionario de los Trabajadores* (MRT), la Tendencia finalmente sufrió una segmentación entre una minoría y una mayoría. Mientras que la primera se unió posteriormente con el Nuevo MIR y formó en 1984 el *Movimiento de Integración Revolucionaria - Patria Libre* (MIR-PL), que, a finales de la década de 1980 entró al *Ejército de Liberación Nacional* (ELN), la segunda fundó el PRT durante una conferencia en Sucre en 1982

2 Con una abreviatura “e.” o “ee.” se señalará que la fuente consultada es una entrevista; esta consideración, dispuesta como una aclaración directa del texto, resulta relevante para la comprensión del mismo.

(Archila, 2008; Restrepo y Contreras, 2000; Villarraga & Plazas, 1994).[3]

Al menos inicialmente, el PRT se atuvo a sus raíces ideológicas y a la orientación maoísta de la TMLM. Por un lado, y de acuerdo con el enfoque maoísta del tipo "todo o nada", la verdadera revolución que lleva a la creación de la dictadura del proletariado siguió siendo la meta general (y el objetivo mínimo), lo que significó que cualquier tipo de solución negociada y de reformas fueran rechazadas. Cuando el *Movimiento Autodefensa Obrera* (ADO), las *Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia* (FARC), el *Movimiento 19 de Abril* (M-19) y, posteriormente, el *Ejército de Liberación Popular* (EPL) entablaron negociaciones con el Gobierno de Betancur entre 1983 y 1985, el PRT, junto con el ELN y otros grupos menores, rechazaron la iniciativa presidencial categóricamente como un "juego al propósito burgués" y "cualquier acuerdo que implique cesar la actividad operativa [como] una derrota y retroceso para el campo popular" (Viraje, 1984, p. 11-12). En este momento, y en línea con la antigua retórica del PCC-ML; las FARC, por ejemplo, se entendieron despectivamente como traidores de la revolución.[4]

Por otra parte, la lucha armada aún se consideró la única estrategia capaz de lograr el objetivo general, como la respuesta inevitable a un régimen político opresivo y excluyente controlado por una pequeña élite colombiana e influenciado por las potencias imperialistas. Al seguir esta ideología, la estrategia del grupo se dividió principalmente en dos líneas de acción: en primer lugar, la agitación, la formación y la organización de las masas populares con el fin de atraer su apoyo para la revolución, en segundo lugar, y estrechamente relacionado con la primera línea de acción, la movilización de un ejército del pueblo que finalmente debía derrocar el aparato estatal controlado por las clases explotadoras (Viraje, 1983; 1984).

3 A diferencia del MIR-PL y a pesar de su tradicional cercanía, el PRT se negó a entrar al ELN principalmente por su rechazo a la práctica de condenar a muerte a antiguos y actuales miembros por sus divergencias con la línea oficial. Sobre todo el asesinato de Ricardo Lara Parada, antiguo dirigente del ELN, en 1985 (según el PRT, a manos del mismo grupo insurgente), llevó al PRT a alejarse del ELN. Anteriormente, el partido había intercedido a favor de Lara en la dirección del ELN (Flórez [e.], 2013; Taller Equipo Iniciativas de Paz & PRT, 2014c).

4 Durante el V. Pleno del Comité Central del PCC-ML en 1973, integrantes del partidos llamaron a las FARC por ejemplo "una organización contrarrevolucionaria al servicio de los revisionistas y de la oligarquía colombiana" (Villarraga & Plazas, 1994, p. 92).

De acuerdo con la primera línea de acción, el PRT siguió las orientaciones tácticas de la TMLM y buscó aumentar su influencia no solo en el campesinado rural, sino también en los movimientos sociales urbanos. Mediante el fomento de las relaciones que se remontaban al TMLM e incluso al PCC-ML, y a través de la conquista de nuevos simpatizantes, la organización logró alcanzar una influencia significativa en la *Asociación Nacional de Usuarios Campesinos* (ANUC), varios sindicatos, movimientos estudiantiles y en algunos barrios populares de ciudades como Medellín y Bogotá. Mientras que en la Costa Atlántica muchos líderes regionales de la ANUC se convirtieron al mismo tiempo en cuadros del PRT, otros miembros del partido ocuparon cargos en todos los niveles de las organizaciones sindicales, tanto a nivel regional como nacional, y en algunos casos, incluso en las direcciones de éstos. Entre otros, el partido contó con una fuerte influencia en el *Sindicato Textil Coltejer* (Sedeco), el *Sindicato de Trabajadores de Anchicayá*, ambos organizaciones regionales en Medellín y Cali respectivamente, y en sindicatos del sector bancario, como el de los Trabajadores del Banco Popular (Sintrapopular) y del Banco de Santander. Luego, miembros del partido ocuparon cargos en la *Federación Nacional de Sindicatos Bancarios* (Fenansibancol). Igualmente, el PRT logró tener una influencia significativa tanto en la *Federación de Empleados Públicos* (Fenasintrap) y en la *Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo* de Cartagena (USO) como en uno de los sindicatos colombianos más grandes e influyentes, que es la *Federación Colombiana de Educadores* (Fecode), e influir en comunidades indígenas, especialmente en la región del Cauca ([ee.] Tobón, 2014; Cuello, 2014).

Con el fin de lograr una mejor armonización de su trabajo de masas, el partido estableció una organización central, la *Corriente de Integración Sindical* (CIS), formada por ejecutivos de direcciones sindicales nacionales, un dirigente campesino y un líder indígena vinculados en la clandestinidad al PRT. Más allá de sus tareas de coordinación, la CIS buscó, a través de su periódico *Integración* y, posteriormente, con su cercanía al movimiento democrático alternativo *Colombia Unida,* construir puentes entre la acción clandestina del partido y las actividades de protesta y oposición legal (Cuello [e.], 2014).

De acuerdo con la segunda línea de acción, la militar, el PRT buscó, en el corto plazo, la formación de pequeños grupos de autodefensa y milicias que, en el largo plazo, deberían convertirse en un ejército popular, mediante la articulación con grupos militares superiores (Viraje, 1984, p. 38). Al igual que en la TMLM, la aplicación de este segundo componente estratégico enfrentó, sin embargo, desde el inicio serias limitaciones, tanto de recursos económicos, como de capacidades técnicas. Tal situación impidió que a lo largo de los años 80, y hasta la desmovilización en 1991, la segunda línea de acción alcanzara el mismo impacto que la primera (Taller Equipo Iniciativas de Paz & PRT, 2014c).

A pesar del discurso militar que el PRT utilizó desde su fundación, no fue sino hasta 1983 cuando el partido logró construir sus propias, aunque, todavía muy limitadas, estructuras militares, primero en la región del Cauca y Nariño y, posteriormente, en los Montes de María. Mientras que las primeras estructuras tuvieron sus raíces tanto en los movimientos de reconstrucción después del terremoto de Popayán en 1983 como en algunas comunidades indígenas de la región del norte del Cauca, y fueron debilitadas tras enfrentamientos con el Frente XI de las FARC (Flórez [e.], 2014a),[5] la segunda experiencia se remonta a grupos de protección débilmente armados del movimiento campesino local que ganaron importancia bajo el mando del comandante del PRT "Pablo". Dicha experiencia en Sucre y Bolívar logró cierta consolidación hacia finales de la década de 1980. Además de estas estructuras armadas rurales, que conservaron en su mayoría el carácter de actor armado con poco impacto militar (Aguilar 2013, p. 147), el PRT mantuvo una estructura militar urbana responsable de tareas logísticas, llamada el *Equipo Nacional de Operaciones* (ENO). Con el fin de conseguir recursos, el ENO se vio comprometido, por ejemplo, con una serie de robos a bancos y secuestros en Barranquilla, Medellín y otras ciudades ([ee.] Barrios, 2014; Camilo, 2014; Del Rio, 2014).

Por consiguiente, el desarrollo y la influencia del brazo armado del PRT tienen que ser considerados como mínimos. Mientras que un exmiembro del Secretariado, al hacer un balance de la importancia real del brazo armado del partido, pone de relieve las experiencias militares como "una cosa muy poco significativa, con una marginalidad completa en el conjunto de lo que podríamos decir el movimiento armado colombiano que para la época ya tenía unas [...] expresiones tan fuertes como el EPL [...]" (Tobón [e.], 2014, p. 4); la organización en sí habló, en el marco de una evaluación interna en 1990, de un "escaso desarrollo militar" (Viraje, 1990, p. 53) y demostró con ello, una vez más, otra de sus características: la capacidad de autorreflexión que a menudo condujo a la autocrítica.

Desde el principio, el PRT mantuvo un animado debate interno acerca de la línea estratégica, del estado de la propia organización y de la izquierda revolucionaria colombiana en general. Por lo tanto, retomó, en cierto sentido, la tradición de dicho sector ideológico de debatir constantemente acerca de la manera correcta de desarrollar la revolución. Sin embargo, a diferencia de otras organizaciones, especialmente del campo ML, el partido toleró una discusión interna más o menos libre, sin expulsar fracciones simplemente por sus opiniones divergentes ([ee.] Del Rio, 2014a; Urueta, 2014b). Así, en varias ocasiones, evaluaciones críticas acerca de la condición del propio partido no solo destacaron las limitaciones generales en ambas líneas de acción, sino también los problemas más específicos. Un ejemplo de ello fueron las críticas a las limitaciones de comunicación interna que afectaron la capacidad de liderazgo de arriba hacia abajo de la Dirección Nacional y que causaron, de tal manera, el hecho de que muchas de las operaciones fueran más iniciativas individuales de líderes regionales del partido, que parte de un plan de operación nacional coherente (Viraje, 1984, p. 21). Así mismo, la inadecuada formación táctica e ideológica de los cuadros provocó otra discusión interna perpetua (Viraje, 1984). En cuanto a la dirección estratégica y táctica del PRT y de la izquierda revolucionaria en general, la discusión se centró especialmente en el equilibrio óptimo entre el dogmatismo y el empirismo (Viraje, 1983).

Otro aspecto que caracterizó al PRT durante su existencia es el llamado a la unidad de las fuerzas revolucionarias, tanto en el ámbito nacional como internacional, que se

5 De acuerdo con Enrique Flórez, antiguo miembro del Secretariado del partido, el intento de crear un frente en el norte de Cauca fracasó, entre otras razones, también por permanentes hostilidades con las FARC que mataron a 15 cuadros en un ataque al campamento del PRT (Flórez [e.], 2013).

puede ver, por un lado, como una herencia de la TMLM[6] y, por otro lado, como resultado de la fuerte influencia que sobre todo la revolución sandinista en Nicaragua y la exitosa experiencia del salvadoreño Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) tuvieron en la izquierda colombiana. En esta línea de pensamiento, el sectarismo tradicional de la izquierda fue visto por el partido como uno de los mayores obstáculos en la ruta de la revolución (Viraje, 1983; Viraje, 1984, p. 15; Falla [e.], 2014; Flórez [e.], 2013). Aunque en un principio la iniciativa de buscar una articulación más estrecha de planificación y acción con otras organizaciones solo se centró en los movimientos revolucionarios cercanos al PRT, en términos de su respectiva orientación ideológica, como el MIR-PL y el ELN, el partido luego adoptó un enfoque más incluyente, con el objetivo de lograr una coordinación de todo el espectro revolucionario. Poco a poco, posturas pragmáticas prevalecieron sobre los paradigmas ideológicos anteriores.

> En ese momento [al inicio] se le daba mucha importancia a la línea ideológica y política. Después eso va perdiendo importancia, pero en ese momento teníamos muchas discusiones teóricas y políticas sobre cuál era la línea y se pedía como prerrequisito para la unidad, que hubiera, digamos, afinidad ideológica y política. Después vamos minimizando los criterios para llegar a la unidad y terminamos discutiendo programas pragmáticos: llegar al gobierno etc. (Flórez [e.], 2013, p. 2).

Impulsado por este creciente pragmatismo, el PRT comenzó a construir fuertes lazos con el M-19[7] y formó parte en cada coordinadora guerrillera durante la década de 1980 (Hernández, 1993). Por una parte, iniciativas como la *Trilateral*, la *Coordinadora Nacional Guerrillera* (CNG) y, finalmente, la *Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar* (CGSB) debían unir fuerzas con el fin de maximizar su impacto militar, aumentar la presión sobre el régimen y, con ello, desestabilizar la hegemonía de las élites. Por otra parte, el PRT percibió internamente el enfoque colectivo y especialmente la correspondiente transferencia de conocimientos como una posible solución para las limitaciones internas. Con el fin de fortalecer sus propias capacidades militares, el partido participó, por ejemplo, en escuelas militares de la CGSB y del *Batallón América*[8] (Taller Equipo Iniciativas de Paz & PRT, 2014c).

> “El PRT percibió que la lucha armada perdía cada vez más su legitimidad, tanto dentro de la sociedad colombiana, como dentro de sus propias filas”

Ruptura ideológica y negociaciones de paz

Desde su fundación, los grupos guerrilleros colombianos vivieron de cierto modo en lo que Zuluaga (1999) llama una “época de utopías, en la que los sueños en torno a una futura e inevitable sociedad superior justificaba el recurso de la violencia” (p. 2). La revolución era percibida como inevitable e irreversible. Sin embargo, la década de 1980 se convirtió en el momento en que esta visión del mundo revolucionario entró en crisis. Diversas experiencias internacionales mostraron que la revolución no solo era evitable, sino también que su resultado en muchos casos no era tan perfecto como se imaginaba y, a veces, también era reversible. Frente a esto, el PRT estuvo lejos de ser una excepción. Con los años, la ideología del PRT cambió gradualmente, en relación con la estrategia general del partido y sus objetivos. Este cambio ideológico era atribuible, principalmente, tanto a las evaluaciones respecto al contexto nacional e internacional como a la condición de la izquierda revolucionaria en general.

Por un lado, y en la medida en que los dogmas ideológicos perdieron importancia, el PRT se desvió gradualmente del enfoque maoísta de tipo “todo o nada” hacía una valoración de la posibilidad de una “simple” reforma del sistema. En vez de luchar por la destrucción del régimen existente y la creación de una dictadura del proletariado sobre las cenizas del mismo,

6 A finales de los años 70, la TMLM creó el *Comité por la Unidad de los Marxistas Leninistas* (CPU) con el fin de avanzar hacia la unidad de las dispersas organizaciones del Campo ML (Nuñez, 1992).

7 Según Flórez ([e.] 2014a), Carlos Pizarro planteó la posibilidad de una entrada del PRT al M-19. El primero rechazó la propuesta por divergencias tácticas respecto al rol de la lucha armada. El PRT criticó especialmente el enfoque del M-19 en la propaganda armada.

8 Al haber sido conformado por guerrilleros nacionales e internacionales, el *Batallón América* fue un proyecto del M-19 en búsqueda de crear un movimiento armado pan-americano.

el partido cambió sus objetivos hacia una apertura de la democracia. Mientras que antes se había entendido la democracia, de acuerdo con la aproximación maoísta al concepto, más en un sentido socio-económico que uno político,[9] el PRT ahora reclamó una reforma política que garantizara el derecho a participar libremente en las discusiones políticas y los procesos de toma de decisiones. El pluralismo político, un sistema eficaz de control y contrapesos entre los diferentes poderes, la descentralización del Estado, el reconocimiento del carácter pluricultural y multiétnico del Estado colombiano y la protección de las libertades civiles y de los derechos políticos se convirtieron en elementos esenciales de la nueva agenda. Por otra parte, el partido al final de la década de 1980, comenzó a reivindicar una "economía mixta" en vez de una economía de planificación socialista. Aunque este nuevo concepto también implicaba el control estatal sobre sectores claves de la economía, tales como el agua, la energía y el sector bancario, la nacionalización, de por sí, ya no era considerada como una "panacea" (Viraje, 1990, p. 35). Bajo ciertas condiciones, la coexistencia de la propiedad privada y la propiedad estatal debería ser posible (Viraje, 1990; Falla [e.], 2014; Urueta [e.], 2014a).

Según Flórez y Falla, ambos exmiembros de la Dirección Nacional del PRT, el cambio de objetivos se basó principalmente en las experiencias personales que algunos miembros del partido tuvieron en el extranjero. Mientras que Falla, después de su viaje a Cuba, comenzó a criticar la represión de opiniones divergentes por el régimen de Fidel Castro y empezó a destacar la importancia del pluralismo político y cultural (Falla [e.], 2014); Flórez, en cierta medida, cambió su visión idealista de Cuba y Libia después de haber experimentado la realidad de la vida cotidiana en ambos países. Sobre todo, la crisis económica que sufrió Cuba, después de la retirada del apoyo financiero de la Unión Soviética, generó dudas sobre la verdadera cara del socialismo real (Flórez [e.], 2014a).

El cambio gradual del objetivo iba de la mano con modificaciones respecto a la estrategia del partido. A medida que los nuevos objetivos que se planteaban no precisaban de una total destrucción del viejo orden político y podían alcanzarse, posiblemente, a través de reformas en el sistema político existente, la participación legal se convirtió poco a poco en una estrategia viable. En estrecha relación con el cambio de los objetivos, la lucha armada se hizo cada vez menos importante —un proceso que se apoyó, asimismo, por una serie de experiencias nacionales e internacionales de la década de 1980—.

Por un lado, desde la primera conferencia de la CGSB, el PRT contó las limitaciones del enfoque de cooperación. Al contrario de las expectativas del partido, la coordinadora no era capaz de superar las divergencias internas de opinión entre sus integrantes, y mucho menos de conducir a una acción verdaderamente unificada.[10] A lo largo de su existencia, el impacto militar quedó limitado, un hecho que llevó a algunos participantes incluso a admitir que la izquierda revolucionaria colombiana, después de casi tres décadas de lucha revolucionaria por medios violentos, no había sido capaz de alcanzar la misma capacidad desestabilizadora que el cartel de Medellín había desarrollado en solo pocos años (Flórez [e.], 2014a). Junto con el auto-reconocimiento de las limitaciones financieras continuas, que seguían impidiendo el fortalecimiento de las estructuras militares del partido, esta evaluación llevó a la conclusión de que la "perspectiva de una victoria por derrota militar no existe" (Viraje, 1990, p. 48).

> Nosotros éramos un grupo pequeño que no teníamos esa fuerza militar para convertir ese ideal de tomarnos el poder por las armas. Veíamos también que de parte de las otras fuerzas guerrilleras eso estaba como muy lejano. [Además,] ya se comenzaba a hablar de la elección popular de los alcaldes. Entonces yo ahí me convencí más [...] de que eso no tenía futuro. Uno podía durar mucho tiempo por allá haciendo cosas marginales, [...] subsistiendo desde el punto de vista militar, pero que eso nunca iba a trascender a lo que uno quería (Del Rio [e.], 2014a, p. 3).

Por otro lado, el PRT percibió que la lucha armada perdía cada vez más su legitimidad, tanto dentro de la sociedad colombiana, como dentro de sus propias filas. En medio del fuego cruzado del conflicto acelerado entre el Estado y los barones del narcotráfico, y al vivir un número cada

9 Desde el enfoque maoísta se entiende democracia "más en el sentido socio-económico, como satisfacción de necesidades básicas, que en el sentido político como vigencia de las libertades ciudadanas" (Archila, 2008, p. 174). Más que al acceso a la toma de decisiones, el concepto se refiere aquí a una justicia social.

10 Según Flórez ([e.] 2014a) y Fernández ([e.] 2014), sobre todo el asesinato del candidato presidencial de la UP, Jaime Pardo Leal, en octubre 1987, justo después de la primera reunión de los integrantes de la coordinadora, marcó el primer momento decisivo que provocó cambios hacia las expectativas del PRT frente a la CGSB. A pesar de la unidad simbólica de los grupos guerrilleros, la organización no fue capaz de mandar una respuesta militar frente al hecho.

vez mayor de ataques de paramilitares y de la guerrilla contra políticos y líderes de la sociedad civil, muchos colombianos exigieron el fin de la violencia. Igualmente, las prácticas de la guerrilla, el secuestro y la extorsión, así como informes sobre excesos de violencia al interior de los grupos armados, como, por ejemplo, la masacre de Tacueyó,[11] y los rumores acerca de las conexiones entre algunos grupos insurgentes y el narcotráfico, destruyeron el ideal romántico de las guerrillas, que en ese momento de alguna manera todavía perduraba en algunos sectores de la sociedad ([ee.] Fernández, 2014; Urueta, 2014a). Incluso, entre los miembros del partido, las críticas acerca de las prácticas del PRT, como los robos a bancos y secuestros, se hicieron más fuertes (Del Rio [e.], 2014a).[12] De tal manera, la fatiga pública de la guerra, cada vez más evidente, también influyó en las discusiones internas del PRT y en las evaluaciones que el partido hacía de la realidad nacional, como Falla ([e.] 2014) recuerda:

> No, es que Colombia no aguanta más. Nosotros no podemos ser un combustible más de la guerra en Colombia; tenemos suficientes violencias con el narcotráfico, los paras, las autodefensas, con el ejército, la policía, con las guerrillas, o sea, no podemos darle más combustible a la guerra, sino que hay que quitársela (p. 5).

En línea con las evaluaciones del contexto nacional, el progreso del diálogo de paz salvadoreño fomentó especialmente el reconocimiento del PRT sobre soluciones negociadas como una opción estratégica viable (Flórez [e.], 2014a).

Con sus nuevos objetivos y su ajustada orientación estratégica, la posibilidad de diálogo con el Gobierno fue adquiriendo poco a poco protagonismo en la agenda del PRT. Dicha actitud fue, desde 1989, fuertemente apoyada por dos evaluaciones adicionales del partido sobre la realidad colombiana de finales de 1980: el éxito relativo del M-19 en la política legal y la oportunidad que brindaba la *Asamblea Nacional Constituyente* (ANC).

A principios de 1989, el M-19 había roto con la CGSB y entrado unilateralmente en negociaciones con el gobierno de Barco, hecho que se hizo oficial a través de una primera declaración conjunta el 10 de enero de 1989. Después de su desmovilización en 1990, la organización no solo experimentó un importante respaldo público de parte de la sociedad, sino que también participó con bastante éxito en la política legal. Además de algunos cargos políticos a nivel local, el grupo desmovilizado obtuvo dos curules en la Cámara de Representantes en las elecciones de marzo de 1990, solo dos días después de su desmovilización.[13] En la percepción del PRT, esta experiencia marcó un paso significativo para los grupos insurgentes desmovilizados. Éxitos electorales y, por lo tanto, una verdadera participación en la política, parecían ser alcanzables (Flórez [e.], 2014a).

Por otro lado, hacia el final de la década de 1980, el partido comenzó a percibir ciertas rupturas dentro de la burguesía que llevaron a la identificación de al menos una facción abierta a cambios. Mientras que antes, la posibilidad de formar alianzas con las elites se habían descartado categóricamente, el (fracasado) proyecto de reforma constitucional de Barco y más tarde el apoyo a la ANC de algunos políticos tradicionales eran considerados ahora como señales de voluntad y un posible punto de partida. En este nuevo contexto, una renegociación del acuerdo político parecía ser una opción viable y, la ANC, la herramienta adecuada para ello (Flórez [e.], 2014a; Viraje, 1990).

Después de haber promovido, inicialmente, una negociación conjunta entre todos los miembros de la CGSB y la administración Barco (García, 1992, p. 142), el PRT percibió con preocupación el creciente dominio de las FARC y la radicalización progresiva de la coordinadora guerrillera, después de la salida del M-19. Como reacción a un comunicado del Gobierno que cuestionó la verdadera seriedad de las anteriores propuestas de paz de las FARC, la CGSB cambió su enfoque en su V. Cumbre, en abril de 1990. Al apostar de nuevo por la lucha armada, la coordinadora provocó una división interna entre las FARC y el ELN, por un lado, donde ambos rechazaron las negociaciones con el Estado y, por el otro, el EPL, el *Movimiento Armado Quintín Lame* (MAQL) y el PRT, que por su parte siguieron

11 Durante la masacre de Tacueyó en 1985, 164 miembros del *Frente Ricardo Franco* fueron asesinados por sus propios comandantes tras haber sido acusado de ser infiltrados del ejército.

12 Respecto a estas críticas internas, entrevistados recuerdan sobre todo el menosprecio que algunos cuadros sintieron por las alianzas puntuales que el partido y su ENO, al buscar un intercambio de conocimiento, en ocasiones mantuvieron con actores de la delincuencia común, como por ejemplo con la organización criminal barranquillera "*Los Patojos*" ([ee.] Cienfuegos, 2014; Del Rio, 2014a).

13 Vera Grabe con 31.147 votos y Nelson Campo Núñez con 18.679 votos (Dirección General para la Reinserción 2000, pp. 18-ss.).

insistiendo en la viabilidad de una solución negociada del conflicto armado (Villarraga, 2009, pp. 121-ss.).

De acuerdo con el segundo grupo, la ANC no era solo una posibilidad para renegociar el acuerdo político excluyente, por medio de un pacto nacional incluyente, sino que también era un asunto que merecía ser promovido por todas las organizaciones de la izquierda colombiana, incluidos ellos mismos. Por su parte, el PRT subrayó en varias cartas al Gobierno, a la sociedad civil y a los líderes de los partidos que la ANC significaba una oportunidad histórica y expresó su pleno apoyo (PRT 1990c; 1990b).

> “Ni el gobierno ni la clase política regional fueron capaces de aprovechar esa semillita de paz que sembramos en los Montes de María”
> Enrique Flórez

Tras algunas aproximaciones iniciales entre el EPL, el MAQL y el PRT con el Gobierno, las partes publicaron el 4 de junio de 1990 una declaración conjunta, proclamando el inicio de las conversaciones de paz entre el Gobierno, el EPL, el MAQL y el PRT (Gobierno Nacional, EPL, MAQL y PRT, 1990). Por su parte, este último firmó, dos meses más tarde, como resultado de una reunión con representantes del Gobierno en el corregimiento de La Haya en el municipio de San Juan Nepomuceno, un acuerdo que definió los términos y la agenda de la posterior negociación de paz (PRT, 1990a). El PRT concentró la mayor parte de sus militantes en el campamento de negociación en La Haya, que en octubre del mismo año fue traslado al corregimiento de Don Gabriel en el municipio de Ovejas, con el fin de garantizar un acceso más fácil. Para este momento, el Secretariado ya había decidido, en contra de reparos de algunas facciones del partido,[14] buscar seriamente una solución negociada del conflicto armado y aprovechar al máximo, de este modo, la histórica oportunidad política abierta por la ANC. Según Flórez ([e.] 2014a),[15] en la percepción del secretariado el presidente Gaviria quería mostrar resultados rápidos mediante la vinculación de la mayor cantidad posible de grupos insurgentes a la lista de desmovilizados.

A pesar de su autocomprensión como partido clandestino de alcance nacional y del carácter de la negociación con el Gobierno Nacional, el PRT defendió desde el inicio de las negociaciones la importancia de un enfoque regional de al menos una parte de los aspirados acuerdos. En línea con esta postura, ya el preacuerdo de La Haya incluyó el tema de planes de desarrollo para las zonas de influencia en el itinerario de los diálogos. No obstante, y si bien el PRT intentó llevar tal enfoque a la práctica —a través de su incidencia para transmitir las peticiones de los alcaldes de la zona de los Montes de María en la mesa de negociación o con la convocatoria de una cumbre regional por la paz en noviembre de 1990 que buscó el diálogo con otros actores de la zona—,[16] el Gobierno Nacional se opuso a una participación directa de las autoridades locales en las conversaciones, con el argumento de que tal diseño no correspondía al grado de influencia real del PRT (Flórez [e.], 2014b). Como consecuencia, pero también debido a la falta de interés por parte de las elites regionales, la negociación de paz se caracterizó, principalmente, por la ausencia de las mismas y se volvió para algunos entrevistados en una posibilidad perdida de solución de los conflictos históricos de los Montes de María en general, y de reconciliación entre terratenientes y el movimiento campesino en especial ([ee.] Barrios, 2014; Flórez, 2014b).

> Si estas élites regionales hubieran querido resolver el problema, hubieran querido desarrollar soluciones económicas ahí, ni siquiera se hubiera necesitado la plata del gobierno. Se habrían podido estructurar proyectos conjuntamente que resolvieran la situación social de muchas zonas. [...] Pero ese [era] uno de los grandes déficits del proceso: No [hubo] un proceso real de reconciliación donde [...] parti-

14 Muchos cuadros de las fracciones de Antioquia y Nariño se oponían a las negociaciones. De acuerdo con Gabriel Tobón, se opusieron al proceso de negociación ya que se veía más como el aprovechamiento de una coyuntura política que le permitía a un grupo armado una salida digna.

15 Sobre todo entrevistados de bajo rango critican retrospectivamente la falta de discusión interna respecto a la decisión de dejar las armas. Por su parte, el antiguo líder campesino y miembro del PRT Gabriel Barrios ([e.] 2014) incluso critica la falta de concertación con las bases sociales del partido.

16 Según Flórez ([e.] 2014b), muchos alcaldes de la zona vieron en las negociaciones adelantadas por el PRT, primordialmente, un canal de interlocución directa con el Gobierno Nacional. Más que un interés en la negociación como tal, la declaración de alcaldes, publicada el 15 de agosto 1990 (PRT, 1990e), entre otras, buscó expresar inconformidades de los mandatarios locales con el plan de desarrollo para la Costa Caribe y solicitar recursos adicionales para sus respectivos municipios. Por su parte, la cumbre regional por la paz convocada por el PRT para el 19 de noviembre de 1990 tenía el propósito de “abrir espacios de acercamiento y diálogo en esta región (Montes de María)” (“El PRT convoca”, 1990).

ciparan los sectores de poder con los sectores que [habían] sido excluidos del poder [...] (Flórez [e.], 2014b, p. 3).

Durante los meses siguientes, y aparte de otros temas relacionados con el proceso de Desmovilización, Desarme y Reintegración (DDR), las garantías de seguridad, el indulto general para los desmovilizados y los proyectos concretos para promover los Derechos Humanos y el desarrollo regional en la Costa Caribe,[17] el tema de participación política se convirtió en uno de los principales asuntos de la negociación.[18] Por un lado, el PRT reclamó una representación directa en la ANC y resaltó de nuevo positivamente su carácter de "escenario para la configuración de un pacto político y social que abra el camino a las grandes transformaciones democráticas, económicas y sociales que necesita el país, sin las cuales sería imposible pensar en una paz estable y duradera" (PRT, 1990d). Por otro lado, el partido exigió el apoyo gubernamental para el lanzamiento de su propio proyecto político y, en general, para establecer un entorno favorable, que permitiera la fundación y la participación de nuevas fuerzas políticas alternativas.

Finalmente, asuntos relacionados con la participación política recibieron un lugar prominente en el acuerdo final de paz firmado el 25 de enero de 1991. Mientras que el primer punto del acuerdo otorgó el derecho a enviar un delegado a la ANC (aunque sin derecho a voto),[19] los puntos dos a cinco definieron el apoyo estatal para la transformación proyectada del PRT en un partido político legal. Dicho apoyo se debería dar de dos maneras: la facilitación del reconocimiento legal y el apoyo financiero dirigido a la promoción pública del nuevo partido. Al seguir el ejemplo del M-19, el segundo tema incluyó, además de anuncios en medios nacionales y regionales de comunicación, la instalación de cinco *Casas de la Vida* en diferentes ciudades del país, con el objetivo de crear puntos de encuentro entre el partido y la sociedad colombiana (PRT, 1991).

Un día después de que las negociaciones habían llegado a su fin, el PRT y la mayoría de sus miembros[20] culminaron, durante una solemne ceremonia en Cartagena, el capítulo de su lucha armada y arrojaron sus armas al mar Caribe.

Entrando en la política nacional y regional y la primavera democrática del partido

Se cambian armas por curules: La participación electoral del partido

Al igual que la discusión interna sobre la posibilidad de una solución negociada, las reflexiones sobre el camino futuro del PRT[21] hacia la política legal y su papel en el escenario de post-desmovilización fueron limitadas. A pesar de un consenso interno que subrayó la importancia de la participación política en general, también predominaba una divergencia frente a dos posiciones ligeramente diferentes sobre el enfoque planeado del partido, que se remontaba básicamente a una discrepancia de expectativas. Mientras que algunos miembros antiguos —principalmente la antigua dirección del partido— se centraron en los cambios constitucionales y una transformación general del país —un objetivo que debía lograrse a través de la participación en la política nacional y en la ANC—, otros buscaban, especialmente, una solución de los problemas puntuales a nivel local, mediante la incidencia activa en la política regional. La participación en los gobiernos locales debía mejorar el acceso a los servicios públicos (educación, salud y vivienda) de la base social del PRT y permitir la aplicación de reformas agrarias ([ee.] Del Rio, 2014a; Zambrano, 2014). Como resultado, las diferentes posiciones sobre el "qué hacer" después de la desmovilización llevaron a dos enfoques diferentes y contribuyeron a una división gradual entre los antiguos dirigentes nacionales

17 A pesar de que en la lista de desmovilizados no aparece ningún antiguo integrante del PRT del Cauca, debido principalmente a los problemas de seguridad en ese momento, un acuerdo adicional definió algunos municipios del área como beneficiarios del Fondo Nacional de Paz (Flórez [e.], 2014a).

18 Al igual que en las negociaciones de paz del EPL y MAQL, el tema de reformas políticas sustanciales fue aplazado para la ANC (Villarraga, 2013, pp. 40-ss.).

19 Para Flórez ([e] 2013), la decisión del Gobierno de aprobar solo un delegado sin voto para el PRT y el MAQL reflejaba, sobre todo, el temor de Gaviria de que la ANC podría ser dominada por fuerzas de la izquierda. Tal preocupación se basó primordialmente por el éxito inesperado de la ADM-19 en encuestas de opinión justo antes de las elecciones para la asamblea.

20 Tras su rechazo a las negociaciones de paz y a la desmovilización del PRT, una pequeña disidencia del partido continuó su lucha armada bajo el nombre Colombia Libre, aunque sin lograr un impacto significativo.

21 Es importante resaltar que algunos exdirigentes no consideran que el PRT, como proyecto político, haya dejado de existir con el acto de su desmovilización.

del partido, sus antiguas estructuras regionales y la base social, en particular, en la Costa Atlántica.

Los promotores del enfoque nacional consideraron la adhesión del PRT a la *Alianza Democrática M-19* (ADM-19) y la estrecha coordinación de José Matías Ortiz —delegado del PRT en la ANC— con la bancada del ADM-19 —liderada por Antonio Navarro Wolff—, el siguiente paso lógico. Aunque tanto el acuerdo de paz como varias declaraciones de voceros del PRT durante el proceso de negociación podrían haber indicado la clara idea de transformar el PRT en un partido independiente, garantizando la conservación de su propia identidad política (Nullvalue, 1991; PRT, 1991), estas decisiones significaron una continuación del curso ya establecido antes de la desmovilización. Mientras que el objetivo postulado por la ADM-19 fue la creación de un movimiento nacional unificado de izquierda y de fuerzas reformistas de la política colombiana, coincidió con la reivindicación tradicional del PRT por la unidad. La decisión de unirse a la alianza representó además una continuación de la relación cercana del partido con *Colombia Unida*, miembro fundador de la ADM-19, que también se remontaba a la época anterior de las negociaciones de paz.[22] En una carta del 15 de abril de 1990 a varios líderes de movimientos sociales y partidos que participaron en la fundación de la ADM-19, el PRT había expresado, además, su respaldo para el movimiento político emergente y su interés en el acompañamiento de la iniciativa, en función de observador (PRT, 1990c). Por otra parte, la entrada a la ADM-19 era en cierta medida percibida como un paso bastante pragmático, debido al éxito abrumador del nuevo partido en las elecciones para la ANC en diciembre de 1990[23] ([ee.] Del Rio, 2014a; Flórez, 2013a).

Por su parte, muchos partidarios del enfoque regional estaban preocupados por la posibilidad de que la disolución del PRT en la ADM-19 pudiera causar la pérdida de su identidad política propia y, por lo tanto, poner en peligro los vínculos con la base social del partido. Aunque no se oponían en principio a la adhesión, y aunque la gran mayoría de los antiguos cuadros del PRT que se lanzaron en las elecciones locales lo hicieron como candidatos de la ADM-19, muchos de ellos, sin embargo, continuaron identificándose como miembros del PRT e hicieron campaña bajo la bandera del partido desmovilizado ([ee.] Barrios, 2014; Del Rio, 2014). Por ejemplo, el exconcejal de Barranquilla, Jorge Urueta ([e.] 2014a), destaca: "Nosotros hicimos campaña a nombre del PRT. Yo fui elegido como concejal por el PRT, dentro de la ADM-19, pero era claro que era del PRT" (p. 8).

Posteriormente a su desmovilización, el PRT logró una participación respetable en la política a nivel nacional y regional, y experimentó lo que Flórez ([e.] 2014a) denomina su "primavera democrática" (p. 12). Mientras que antiguos miembros del partido, como Flórez, Fernández u Ortiz ganaron cierta influencia en la dirección nacional de la ADM-19 y formaron parte de sus listas electorales para el Congreso; Ortiz, de acuerdo a su propio juicio, defendió con éxito la agenda del PRT en la ANC y logró posicionar propuestas claves en la nueva Constitución de 1991. Una muestra de ello fue, por ejemplo, la descentralización de la autoridad política (Ortiz [e.], 2014). En 1994, Ortiz entró al Senado, aunque no como diputado de la ADM-19.

En el ámbito regional, en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre, exmiembros del PRT, por su parte, consiguieron igualmente considerables resultados electorales en las elecciones municipales de 1992 y 1994. Al obtener 45.43 % del total de los sufragios emitidos, el exmiembro del PRT Raúl Enrique Tovar Barreto fue elegido alcalde de Chalán (Sucre) y resultó ser el único candidato de la ADM-19 exitoso en las elecciones para alcalde en marzo de 1992 (Dirección General de la Reinserción, 2000, p. 83).[24] En las mismas elecciones, otros cuatro desmovilizados del PRT entraron a tres consejos municipales de los departamentos de Atlántico y Sucre como candidatos de la ADM-19; uno de ellos fue Reinaldo Rivas, firmante del acuerdo de paz y antiguo comandante militar, alias "Pablo". Dos años más tarde, siete antiguos miembros del partido ganaron escaños en diversos consejos municipales de la región —cuatro de ellos en el ámbito de la Circunscripción Territorial Especial de Paz, la cual se aplicó para la elección de un concejal adicional en determinados municipios, reconocidos por haber contado con una presencia histórica de los grupos desmovilizados resaltados en el Decreto 1388 del 1994— (ver tabla 1).

22 Con Gabriel Barrios, el PRT incluso contó, entre 1990 y 1992, con un representante en el concejo municipal de San Juan de Nepomuceno (Bolívar) por parte de *Colombia Unida*.

23 La ADM-19 ganó 26,7 % de los sufragios emitidos en la elección para la ANC.

24 La ADM-19 participó con un total de 87 candidatos propios en las elecciones.

Tabla 1. **Elecciones de 1992**

Elecciones para concejales de 1992		
Castañeda, Pedro	Galapa / Atlántico	ADM-19
Esmeral, José	Malambo / Atlántico	ADM-19
Pizarro, Jaime	Ovejas / Sucre	ADM-19
Rivas, Reinaldo	Ovejas / Sucre	ADM-19
Elecciones para concejales de 1994		
Barrios, Gabriel*	San Juan de Nepomuceno / Bolívar	
Esmeral, José*	Malambo / Atlántico	ADM-19
Medrano, Never	Colosó / Sucre	ADM-19
Robles, Cesar	Colosó / Sucre	
Tovar, Eberto	Colosó / Sucre	
Urueta, Jorge*	Barranquilla / Atlántico	ADM-19
Zambrano, Carlos*	Baranoa / Atlántico	ADM-19

Nota: Tabla elaborada por los autores.

Circunscripción Especial de Paz.

Además de sus candidaturas propias, en algunas ocasiones, desmovilizados del PRT también apoyaron las campañas electorales de la ADM-19 o de candidatos independientes. Como Del Rio ([e.] 2014a) recuerda, exmiembros del PRT apoyaron, por ejemplo, las campañas de Luis Miguel Vergara de León, quien fue elegido en Corozal (Sucre) para las elecciones de alcalde de 1992, y la de Apolinar Díaz Callejas, elegido gobernador de Sucre el mismo año.

Una forma distinta de hacer la diferencia: la obra social de la ONG Corpadec

Adicionalmente a su participación directa o indirecta en la competencia electoral, el grupo desmovilizado buscó llenar las diversas expectativas de otra forma. Al igual que los otros grupos insurgentes desmovilizados de la época y de manera promovida por el Gobierno Nacional, el PRT fundó su propia organización no gubernamental encargada de la administración de los recursos asignados para el proceso de reintegración. No obstante, durante los años 90 la *Corporación para el Desarrollo de la Paz y de la Comunidad* (Corpadec) no limitó su trabajo al proceso de reinserción, sino que entendió su misión en un sentido más amplio como la promoción y la aplicación de: "proyectos de desarrollo social, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las comunidades, [a] generar procesos de participación y [a] aportar en la consolidación de la democracia en Colombia" (Corpadec, 1998, p. 2). En concordancia con la misión, y al concentrarse no solo en los antiguos miembros del PRT como beneficiarios sino también en toda la población de sus áreas de influencia, la ONG se convirtió así en una herramienta para mantener el vínculo entre el PRT y sus antiguas bases, para aumentar su influencia en la región y poder sacar provecho político de esta (Corpadec, 2000; Del Rio [e.], 2014b).[25]

> Nosotros crecimos en Corpadec [...]. O sea, cuando hicimos la negociación con el gobierno teníamos unas influencias comunitarias, pero luego con Corpadec nosotros logramos que eso creciera. Logramos llegar a más sectores. Logramos vincular a más personas que no eran del PRT, pero que sí nos reconocían nuestro liderazgo (Del Rio [e.], 2014b, p. 2).

Tras su fundación, y de acuerdo con su misión, la ONG implementó, sobre todo en la Costa Caribe,[26] proyectos de capacitación de líderes comunitarios y de resolución de conflictos. Además, una serie de proyectos económicos fueron diseñados e implementados con fondos del Estado. Con el fin de apuntar a la transformación de la

25 Adicionalmente, en algunas ocasiones, la ONG apoyó en la financiación de campañas electorales de antiguos miembros del PRT (Urueta [e.], 2014a).

26 Aunque sus proyectos se enfocaron sobre todo en la Costa Caribe, Corpadec también contó con oficinas en Cali y Pasto.

cultura política del país (con frecuencia violenta), la socialización de los valores de la paz y de los derechos fundamentales de la nueva constitución se volvió un punto importante de la agenda. Particularmente, el proyecto *Ciudadelas para la Paz*, promovido por el desmovilizado Héctor Rivas, creó un impacto considerable en la región, al construir cientos de viviendas sociales en los municipios del Carmen de Bolívar, Cartagena y San Juan de Nepomuceno, entre otros (Arrieta, 2006 ; Del Rio [e.], 2014b).

Fue en el trabajo de Corpadec, cuando por primera vez en la historia del PRT, el enfoque de género adquirió importancia y rompió con el carácter tradicionalmente machista de la organización. Antes de la desmovilización, la participación e incidencia de las mujeres en el partido clandestino, e incluso en las negociaciones de paz, habían sido notoriamente escasas, prueba de esto es que ninguna de ellas llegó a la dirección nacional ni mucho menos al secretariado. Según Flórez ([e.] 2014b), esta situación puede ser explicada por las estructuras sexistas que persisten aún en la composición socio-cultural colombiana, que no excluían a los proyectos políticos de izquierda de la época, y por la herencia machista que traían desde el PCC-ML.

A pesar de que ninguna mujer formó parte del equipo negociador, las mujeres del partido lograron poner de presente algunas de sus inconformidades respecto al acuerdo de paz, derivadas en su mayoría de la falta de un enfoque de género en el programa de reintegración, y de las necesidades inminentes que se presentaban en las familias[27] de las y los desmovilizados durante y después de las negociaciones, tal como lo relata Flórez ([e.] 2014b):

> [...] empiezan a luchar por incorporar una perspectiva de género, [yo diría que] la primera expresión de eso también estuvo ligada a reconocer que la desmovilización no se podía limitar a los guerrilleros sino que había que involucrar a las familias... de hecho esa demanda por involucrar a las familias empezó porque [las mujeres] se sentían excluidas, entonces las compañeras de los que estaban en la lista reclamaban también beneficios de desmovilización para sus hijos, para ellas mismas y empezó toda una lucha por el núcleo familiar [...] (p. 3)

Ahora bien, el momento de mayor incidencia, y donde se hace más visible la participación de las militantes del PRT, se da en el desarrollo y trabajo político que realizaron dentro de Corpadec; ya que presionadas por la necesidad de empoderarse y al entrar en contacto con el movimiento de mujeres y grupos feministas (Flórez [e.], 2014b), empezaron a generar propuestas de organización para ellas mismas, sus familias y las mujeres de las zonas donde el PRT tuvo presencia, principalmente en los Montes de María y otros municipios de la Costa Atlántica.

En uno de sus órganos de difusión, Corpadec-Área Mujer, la ONG dio cuenta de los pilares de su trabajo y de algunos de los proyectos que gestionó y realizó en la región. Así pues, su trabajo fue fundamentado bajo tres ejes: perspectiva de género, fortalecimiento organizativo con enfoque autogestionario y generación de actividades específicas que respondieran a necesidades concretas, esto con el fin de fortalecer y empoderar los liderazgos femeninos, generando mayores niveles de incidencia de las mujeres en sus comunidades y de lograr niveles más altos de interlocución con las instancias gubernamentales de la región.

Entre los proyectos del área de mujer, el más destacado fue el trabajo adelantado con madres comunitarias[28] pertenecientes a varios municipios de la Costa Atlántica, incluidos 12 barrios de Barranquilla y algunas asociaciones de Bogotá; un proyecto que dio como resultado la producción de la cartilla "Construyamos entre todas las madres una propuesta pedagógica".[29] Aunque el trabajo del área de mujer fue secundario en comparación con las otras líneas de trabajo de Corpadec, las mujeres también implementaron proyectos con campesinas que tenían como principal objetivo fortalecer sus lazos organizativos y aportarles conocimientos en áreas de generación de proyectos económicos y conocimiento de sus derechos

27 La importancia de la problemática familiar radica también en que tal como lo identifican Fucude y Asopropaz (2006), el entorno cercano de las y los desmovilizados se vio afectado por la persecución, amenaza y demás hechos de violencia que padeció la población desmovilizada de los años 90; siendo víctimas de graves violaciones a los derechos fundamentales, a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, por hechos como asesinatos, desplazamientos forzados, desaparición forzada, entre otros (pp. 69-ss.).

28 El principal objetivo de este proyecto fue fortalecer los conocimientos de las Madres Comunitarias en pedagogía, seguridad social y perspectiva de género.

29 Se produjeron 7000 ejemplares que sirvieron como herramienta de organización y movilización de las Madres Comunitarias en torno a sus reivindicaciones.

con visión incluyente. De igual manera realizaron foros y talleres que buscaban cuestionar el estado de los programas gubernamentales en el tema de mujer en la región, resultando con ello la propuesta de crear una Oficina para la Mujer en Atlántico.

La incidencia del proyecto político: el papel de la ADM-19 y la reacción de las élites regionales

A pesar del éxito prometedor que Corpadec y algunos exmiembros del partido pudieron alcanzar durante los primeros años después de su regreso a la vida civil, el balance que el PRT hizo, algunos años más tarde, sobre la situación encontrada tras su desmovilización, resultó ser negativo. Si bien los desmovilizados reconocieron en 1998 que la "constituyente del 91 [había creado] bases legales e instrumentos iniciales para avanzar en la democratización del país y en la construcción de una paz con justicia social" (Corpadec, 1998, p. 7), también argumentaron que "la pluralidad política [y] la profusión de movimientos cívicos [...] quedaron absorbidos por la hegemonía política [de las élites] de siempre" (Corpadec, 1998, p. 9). Desde el punto de vista de muchos de los entrevistados, el proyecto político del PRT enfrentó especialmente dos factores que finalmente llevaron a su relativo fracaso y a esta evaluación negativa: la estructura interna centralizada, y con un mayor enfoque a nivel nacional que regional, de la ADM-19; y el contexto hostil con el cual muchos nuevos protagonistas de la política regional (y también de Corpadec) fueron confrontados.

Por un lado, y de acuerdo con antiguos promotores del proyecto político del partido en la arena política regional de Sucre y Bolívar, como Astolfo, Barrios y Del Río, el hecho de formar parte de la ADM-19 y, por lo tanto, la obligación de aceptar y seguir decisiones y directrices internas, que a menudo se tomaron a nivel nacional, en varias ocasiones se volvió en vez de una ventaja más bien un obstáculo. Especialmente, la indiferencia por parte de líderes de la Alianza frente al contexto regional y a las bases de apoyo tradicionales, con las cuales el PRT y otros integrantes del movimiento contaron, junto con la estructura organizativa vertical que generalmente obstaculizó una incidencia de las estructuras locales en la toma de decisiones a nivel nacional, condujeron a decisiones fuertemente cuestionadas,[30] afectando a menudo el proyecto político regional de los desmovilizados. Al respecto, algunos entrevistados destacan, por ejemplo, experiencias en las cuales los candidatos del PRT, con una buena reputación en la región, tenían que competir por su posición en las listas electorales del partido con candidatos en gran parte desconocidos, nombrados directamente por Navarro Wolff ([ee.] Astolfo, 2014; Del Río, 2014a). Barrios ([e.] 2014) incluso se acuerda, para el caso de San Juan de Nepomuceno, de una reunión entre el líder de la ADM-19 y promotores del paramilitarismo en la región, con el fin de explorar posibles alianzas electorales.

Por su parte, desmovilizados del PRT como Flórez y Ortiz, que en ese momento estuvieron cerca de la dirección nacional de la ADM-19, no lograron incidir a favor del proyecto político regional de sus antiguos camaradas. Este fue un hecho que aumentó aún más la división entre los protagonistas regionales y sus líderes anteriores que, en la percepción del primer grupo, "dejaron [las bases] huérfanas desde el punto de vista de un liderazgo político" (Del Rio [e.], 2014ª, p. 12).[31] En este sentido, los espacios adquiridos en la política nacional no sirvieron para apoyar el proyecto político a nivel regional ni fueron utilizados para promover el trabajo de la ONG. "Cuando Matías [Ortiz] era Senador, no fue un Senador de puertas abiertas para nosotros. Yo recuerdo que [...] cuando uno iba allá no era que uno encontraba un ambiente de puertas abiertas [...]. No pusieron ese Senado al servicio de consolidar unas ideas políticas" (Del Rio [e.], 2014a, p. 15).

Tal sensación de abandono de amplios sectores de la antigua base social y de los desmovilizados de bajo rango, no se limita solo al liderazgo político, sino que se refleja también en el balance transversal que estos

30 Según Fernández ([e.] 2014), dentro de la ADM-19 prevaleció sobre todo el liderazgo autoritario de Navarro Wolff, quien normalmente insistió en tener, en decisiones importantes, la última palabra. También, por esta hegemonía interna del antiguo comandante del M-19 —quien por preferir un enfoque nacional por encima de un enfoque diferenciado regional, con frecuencia ignoró características regionales—, Ortiz decidió salir de la dirección nacional de la alianza y volverse a la política regional de Barranquilla (Ortiz [e.], 2014).

31 Por su parte, Flórez ([e.] 2014a) destaca la insistencia con la cual intentó incidir, casi siempre en vano, en Navarro en favor del proyecto político regional de sus camaradas.

grupos hacen del proceso de paz y la reintegración como tal. Al argumentar con indignación que: "aquí en los Montes de María la dirección política no hizo nada por nosotros" (Taller Equipo Iniciativas de Paz & PRT, 2014b), un grupo de entrevistados de Ovejas (Sucre), por una parte, expresa sus expectativas frustradas, ya que el proceso de paz y la firma del acuerdo final, en el corregimiento de Don Gabriel de su propio municipio, no lograron traducirse en cambios concretos en términos de infraestructura y calidad de vida y, por otra parte, también muestra implícitamente, que para muchos cuadros el proyecto colectivo (lo común) no había terminado con la desmovilización del partido. A pesar de que el proceso de transición a la vida civil fue diseñado como un proceso individual de transformación de guerrilleros en ciudadanos,[32] la esperanza de muchos participantes se centró en un proyecto colectivo con cierta orientación por parte de sus antiguos líderes. El hecho de que dichas expectativas no hayan sido cumplidas, junto con la impresión de que los antiguos comandantes disfrutaron una situación mucho más acomodada tras la desmovilización, profundizó la división entre antiguos líderes y sus bases sociales, caracterizada por la desconfianza y la desilusión.[33]

> "Sobrevaloramos el momento político de la constituyente, en el sentido en que era algo nacional. (...) Se nos olvidaba que lo local y lo regional tienen unas identidades propias que no entran dentro del concierto nacional"
>
> Ernesto Falla

> Entonces la dirigencia abandona a las masas y las masas ya se ponen incrédulas. No creen en nadie porque si un jefe de esos, que fue amigo personal que comió [...] con uno, y luego darle la espalda de esa manera (Taller Equipo Iniciativas de Paz & PRT, 2014b).

Por otro lado, y con mayor fuerza desde 1994, las acciones de Corpadec y la participación en la política regional, tanto de desmovilizados del PRT como de candidatos de la ADM-19 o de otros movimientos, se encontraron claramente afectadas por el contexto hostil de la región de la Costa Atlántica, que durante la década de 1990 mantuvo e incluso reforzó su modelo tradicional de exclusión política, económica y social (violenta) de sectores que amenazan supuestamente la hegemonía de las elites regionales. En especial, desde finales de los años 60 y 70, y como reacción a una postura radical asumida por la llamada línea Sincelejo de la ANUC, que buscó la organización del campesinado con el fin de lograr una verdadera reforma agraria, el miedo de las elites regionales de perder sus privilegios económicos y políticos condujeron a la utilización de medios violentos con el fin de conservar el statu quo (González, 2014; Porras, 2014, p. 358).

Posteriormente, miembros de estas elites promovieron la creación de pequeños grupos armados responsables de responder a las tomas de tierras, con frecuencia dirigidas por la ANUC, y para llevar a cabo el asesinato selectivo de líderes campesinos con el objetivo de desarticular sus movimientos. Particularmente, en el contexto del proceso de descentralización política de finales de los años 80 y del ascenso de la *Unión Patriótica*, esta dinámica alcanzó nuevas dimensiones debido a una alianza tripartita entre las élites tradicionales de la zona, algunos sectores del ejército y un actor nuevo, a saber, los narcotraficantes, los cuales se convirtieron gradualmente en terratenientes importantes de las regiones. A pesar de que las élites tradicionales participaron en el surgimiento de grupos paramilitares en casi todas las regiones del país, la alianza mencionada fue particularmente fuerte en los departamentos del norte de Bolívar, Córdoba y Sucre (y en la Costa Caribe en general), donde algunos de los miembros tradicionales no solo financiaron y se beneficiaron de acciones de los paramilitares, sino que también se convirtieron

32 A pesar de algunos proyectos empresariales colectivos, predominó un enfoque individual en el programa de reinserción, el cual proporcionó a desmovilizados beneficios (individuales) como el indulto, un auxilio de sostenimiento inicial, niveles de escolaridad, atención en salud y acceso a créditos productivos (Villarraga, 2006, pp. 50-ss.).

33 Es esencial resaltar que, sobre todo en la interpretación de qué significó para el PRT el proceso de desmovilización y la entrada a la ADM-19, se pueden encontrar claras divergencias entre las posturas de las bases y antiguos miembros de bajo rango, por un lado, y desmovilizados de la antigua dirección nacional por el otro. Desde el punto de vista de Flórez, por ejemplo, el proyecto PRT se ha terminado evidentemente con la disolución del partido en la ADM-19 (Taller Equipo Iniciativas de Paz & PRT, 2014c). Aunque el antiguo líder también argumenta que el enfoque individualista del programa de reinserción era un error y subraya la necesidad de que procesos de DDR tengan una fase de transición, Flórez percibe semejante fase, a diferencia del primer grupo, claramente como una disposición transitoria (Flórez [e.], 2014a).

en integrantes de las estructuras del paramilitarismo (González, 2014, p. 29; Sevillano, s.f.).

En este contexto, y a pesar del hecho que durante el proceso de negociación y justo después de la desmovilización, una serie de anuncios públicos de políticos regionales, como, por ejemplo, el de la gobernadora de Sucre, Luz Mariana Ojeda de Pinto, habían señalado una disposición general, de por lo menos algunas partes de las elites regionales, para dar la bienvenida al PRT en la vida civil (Nullvalue, 1991); el proyecto político del PRT, sus promotores y sus familias se encontraban en el centro de una campaña violenta contra todos los grupos desmovilizados de la región. Tal situación provocó el desplazamiento de la mayoría de sus miembros de la zona rural a los centros urbanos, como el exmiembro del PRT, Robinson Arrieta (2006) recuerda. Muchos desmovilizados del PRT que se habían lanzado a la política e incluso habían sido elegidos en cargos políticos entre 1992 y 1994, los promotores de proyectos de Corpadec y simples simpatizantes del partido recibieron amenazas de muerte; algunos abandonaron la región y otros fueron asesinados. En su declaración remitida en "*El Tercer Foro de Víctimas en Barranquilla*", convocado por las *Naciones Unidas* y la *Universidad Nacional*, una delegación de desmovilizados del PRT presentó una lista con 61 casos de compañeros asesinados solo en los departamentos del Atlántico, Bolívar, Magdalena y Sucre; entre ellos, tanto el exalcalde de Chalán, Raúl Tovar, sus hermanos Eberto y Jhony Tovar, como el exconcejal Reinaldo Rivas y su sobrino, promotor de Corpadec y director de la EPS *Mutual Montes de Maria,*[34] Hector Rivas (PRT, 2014).

Retrospectivamente, todos los entrevistados califican estos sucesos traumáticos como una "política de exterminio" (Astolfo [e.], 2014, p. 2) o "genocidio" (Corpadec, 2000; PRT, 2014; Urueta [e.], 2014a), diseñada por las élites regionales y ejecutada por grupos paramilitares —una interpretación que después de la desmovilización de las *Autodefensas Unidas de Colombia* (AUC), entre el 2003 y 2006, fue apoyada por una serie de confesiones judiciales de exparamilitares de la región de Sucre y Bolívar, como la de alias "Javier" entre otros ("Javier: De guía de", s.f.)—.

> Nosotros le generamos a la élite de Sucre una preocupación. [...] Entonces la clase política de Sucre hizo una lectura de eso [...] y con un nivel de cultura política muy bajo como para entender esos procesos de aceptar las diferencias y de aceptar que nuevas fuerzas políticas puedan surgir, con fuertes lazos con el latifundio, con la corrupción, que habían hecho de la corrupción una fuente de enriquecimiento patrimonial, pues veían que sus intereses podían estar amenazados si eso crecía. Esa clase política comenzaba a hacer un proceso de alianza con fueras paramilitares (Del Rio [e.], 2014a, p. 5).

Aunque esta respuesta violenta contra la naciente fuerza política siguió en cierta medida el modelo tradicional de exclusión, su dimensión, para muchos de los entrevistados, fue inesperada (Taller Equipo Iniciativas de Paz & PRT, 2014a). Falla ([e.] 2014), por ejemplo, admite que el partido

> [...] sobrevalor[ó] el momento político de la constituyente, en el sentido de que era algo nacional. [...] Se nos olvidaba que lo local y lo regional tiene unas identidades propias que no entran dentro del concierto nacional y entonces nos cogió de sorpresa, en el sentido de que comienza la arremetida paramilitar, el asesinato de los compañeros y entonces quedamos por fuera de los Montes de María (p. 7)

Al hacerlo, Falla plantea, implícitamente, la pregunta sobre el papel del Gobierno Nacional que, de alguna manera, se mostró incapaz de frenar los ataques a desmovilizados y candidatos políticos, a pesar de que el tema de la seguridad y las garantías había sido un punto importante de la agenda de negociación. Desde el punto de vista del antiguo PRT, la respuesta del Estado siempre ha sido "débil" (Corpadec, 2000, p. 4); Arrieta (2006) destaca incluso un incumplimiento gubernamental de los acuerdos. En esta línea de pensamiento, representantes del PRT compartieron las conclusiones de la conferencia de la primera asamblea nacional de la *Unión Temporal Acción Humanitaria para la Paz* (Asopropaz) realizada en el 2005, en la que hubo una amplia participación de las diferentes ONG nacidas de los procesos de desmovilización de los años 90,[35] la cual destacó, además de unos "serios vacíos estatales y gubernamentales para garantizar la seguridad" (p. 361), la evaluación de que "el Estado, frente a las violaciones registradas, no ha cumplido con su deber de garantía,

34 La iniciativa de fundar la EPS *Mutual Montes de Maria,* que a mitad de los años 90 contó con más de 150.000 afiliados, surgió de desmovilizados del PRT.

35 Asopropaz fue una entidad conformada por más de mil desmovilizados de los procesos de paz de los años 1990.

no ha brindado la suficiente seguridad y ha permitido el imperio local de los diversos grupos armados" (Fucude & Asopropaz, 2006, p. 361).

Otros entrevistados van incluso más allá y resaltan no solo una ausencia de apoyo estatal, sino que apuntan directamente a agentes del Estado involucrados en la campaña violenta (Urueta [e.], 2014a) —una acusación que asimismo está respaldada por testimonios de paramilitares desmovilizados ("Ex 'paras' destapan", 2008) y académicos (Villarraga, 2006, pp. 58-ss.)—.

En resumen, la campaña violenta contra desmovilizados del PRT y otros grupos insurgentes reveló varias limitaciones del programa de reinserción de la década de 1990, en especial respecto al componente de protección. Al concentrar el esquema de seguridad principalmente en los líderes públicos más visibles de la *Corriente de Renovación Socialista* (CRS), del EPL, M-19, MAQL y PRT, sus bases y los miembros de bajo rango, a menudo estigmatizados ya sea como simpatizantes de la guerrilla (por parte del ejército y paramilitares), o como traidores de la revolución (por parte del ELN y las FARC), se fueron quedando sin protección. Aunque el Gobierno Nacional, afectado por la crisis política de mediados de la década de los 90 y por el acelerado conflicto armado con los grupos guerrilleros restantes, en general, respetó los acuerdos y recibió las denuncias, esta situación no provocó un reajuste del programa (Villarraga, 2006, pp. 58-ss.). A pesar de que los miembros del PRT, de acuerdo con los puntos acordados en la negociación de paz, podían participar sin restricciones legales en elecciones nacionales y regionales, la realidad vivida en departamentos como Bolívar y Sucre —ambos con una cultura política violenta y excluyente promovida por las élites regionales— llevó a que esta participación política fuera más que todo un peligro para la vida de aquellos que deseaban luchar, por la vía legal, contra las injusticias sociales y la exclusión política.

Conclusión

Aunque la proyección de grupos insurgentes generalmente es nacional, su desarrollo, sus bases sociales, su área de operación y, por ende, el impacto de los mismos es con frecuencia regional. No obstante, y debido a su enfoque, las negociaciones de paz de grupos alzados en armas se centran normalmente en el Gobierno Nacional, como contraparte del diálogo. Ya sea por decisión del mismo grupo insurgente o por dictamen del Gobierno Nacional, tal diseño, a menudo, no tiene en cuenta las características, lógicas y relaciones de poder de las regiones —un hecho que, en últimas, puede complicar una aceptación amplia de los acuerdos, llevar a problemas de implementación y provocar rechazo por parte de actores excluidos—; en fin: puede conducir a una paz incompleta.

El caso del PRT es una de las mejores muestras de todo lo anterior. Si bien el partido había intentado incluir cuestiones específicas (de la Costa Atlántica) en la agenda y de vincular las autoridades locales al proceso, el rechazo de esta propuesta por el Gobierno Nacional, junto con el desinterés de gran parte de las mismas elites regionales, impidió finalmente un encuentro y una reconciliación entre los excluidos y los excluyentes de siempre. Al menos para muchos entrevistados del PRT es claro que esta limitación, entre otros factores, produjo la campaña violenta en contra de los desmovilizados, ordenada y liderada por las élites tradicionales, que obstaculizó la implementación de los acuerdos y destruyó así la posibilidad de una paz verdadera en la zona. Es por esto, que para Flórez (2014b), el proceso de paz entre el PRT y el Gobierno Nacional presentó sobre todo una oportunidad perdida. Según el antiguo dirigente del partido, la inclusión de factores y actores del nivel regional no representa un desafío, sino que es la clave para una implementación exitosa.

Referencias

Aguilar, M. (2013). Un pacto parcial de paz: La negociación con el M-19, el EPL, el Quintín Lame y el PRT (1990-1991). En R. Regalado (Ed.), *Insurgencias, diálogo y negociaciones: Centroamérica, Chiapas y Colombia* (pp. 125-157). México D.F.: Ocean Sur.

Archila, M. (junio, 2008). El maoísmo en Colombia: La enfermedad juvenil del marxismo-leninismo. *Controversia*, (190), pp. 147-191.

Arrieta, R. (2006). Experiencias en lo político y en lo social: Montes de María. En A. Villarraga (Ed.), *La reinserción en Colombia: experiencias, crisis humani-*

taria y política pública (pp. 235-238). Bogotá, D. C.: Fucude.

Astolfo. (21 de febrero de 2014). Entrevista realizada en Cartagena por D. Rampf a Astolfo (antiguo miembro del PRT y promotor del proyecto político en la Costa Caribe) [transcripción]. Archivo del equipo Iniciativas de Paz. CINEP/ Programa por la Paz.

Barrios, G. (10 de febrero de 2014). Entrevista realizada en Bogotá por D. Chavarro y D. Rampf a G. Barrios (antiguo dirigente de la ANUC y del PRT, exconcejal de San Juan de Nepomuceno) [transcripción]. Archivo del equipo Iniciativas de Paz. CINEP/ Programa por la Paz.

Camilo (27 de junio de 2014). Entrevista realizada en Bogotá por D. Castillo y D. Rampf a Camilo (antiguo miembro del PRT y del ENO) [transcripción]. Archivo del equipo Iniciativas de Paz. CINEP/ Programa por la Paz.

Corpadec. (s.f.). Área Mujer. Archivo del equipo Iniciativas de Paz. CINEP/ Programa por la Paz.

Corpadec. (enero, 1998). *Cuadernos.* Archivo del equipo Iniciativas de Paz. CINEP/ Programa por la Paz.

Corpadec. (abril, 2000). *Cuadernos: A diez años... ¿Cielo o infierno?* Archivo del equipo Iniciativas de Paz. CINEP/ Programa por la Paz.

Cuello, R. (9 de junio de 2014). Entrevista realizada en Bogotá por D. Chavarro y D. Rampf a R. Cuello (antiguo miembro del PRT y sindicalista) [transcripción]. Archivo del equipo Iniciativas de Paz. CINEP/ Programa por la Paz.

Del Rio, F. (18 de julio de 2014a). Entrevista realizada en Bogotá por D. Rampf a F. del Rio (antiguo miembro del PRT y director de Corpadec) [transcripción]. Archivo del equipo Iniciativas de Paz. CINEP/ Programa por la Paz.

Del Rio, F. (29 de julio de 2014b). Entrevista realizada en Bogotá por D. Chavarro, M. Llano y D. Rampf a F. del Rio [transcripción]. Archivo del equipo Iniciativas de Paz. CINEP/ Programa por la Paz.

Dirección General para la Reinserción. (2000). *Huellas de paz: Los desmovilizados y su participación en los escenarios de elección popular: Balance 1990-2000*. Santa Fe de Bogotá, D. C.: Ministerio del Interior.

El PRT convoca cumbre regional de paz. (21 de noviembre de 1990). *El Heraldo.* Base de datos CINEP. CINEP/ Programa por la Paz.

Ex "paras" destapan vínculos con Infantería de Marina y Policía. (29 de mayo de 2008). *El Tiempo*. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4215913

Falla, E. (10 de febrero de 2014). Entrevista realizada en Bogotá por D. Chavarro y D. Rampf a E. Falla (antiguo miembro del PRT e integrante del equipo negociador) [transcripción]. Archivo del equipo Iniciativas de Paz. CINEP/ Programa por la Paz.

Fernández, A. (11 de julio de 2014). Entrevista realizada en Bogotá por D. Castillo y D. Rampf a A. Fernández (antiguo miembro del Secretariado) [transcripción]. Archivo del equipo Iniciativas de Paz. CINEP/ Programa por la Paz.

Flórez, E. (12 de noviembre de 2013). Entrevista realizada en Bogotá por D. Chavarro y D. Rampf a E. Flórez (antiguo miembro del Secretariado del PRT, integrante del equipo negociador y ADM-19 candidato al Senado) [transcripción]. Archivo del equipo Iniciativas de Paz. CINEP/ Programa por la Paz.

Flórez, E. (25 de julio de 2014a). Entrevista realizada en Bogotá por M. Llano y D. Rampf a E. Flórez [transcripción]. Archivo del equipo Iniciativas de Paz. CINEP/ Programa por la Paz.

Flórez, E. (1 de agosto de 2014b). Entrevista realizada en Bogotá por D. Castillo y D. Rampf a E. Flórez [transcripción]. Archivo del equipo Iniciativas de Paz. CINEP/ Programa por la Paz.

Fucude, & Asopropaz. (2006). Elementos de diagnóstico, casos de violaciones e infracciones 1989-2005. En A. Villarraga, (Ed.), *La reinserción en Colombia: Experiencias, crisis humanitaria y política pública* (pp. 68-ss.). Bogotá, D. C.: Fucude.

García, M. (1992). *De la Uribe a Tlaxcala: Procesos de paz.* Santafé de Bogotá, D. C.: CINEP.

Gobierno Nacional, EPL, MAQL, & PRT. (4 de junio de 1990). Comunicado conjunto: La abrumadora mayoría logró convocar una Asamblea Nacional Constituyente popular y soberana. En A. Villarraga (Ed.). *Biblioteca de la paz – 1986-1990: Se inician acuerdos parciales – Pacto político con el M-19* (Tomo II, p. 380). Bogotá, D. C.: Gente Nueva Editorial.

González, F. (2014). Configuración regional y violencia: a modo de introducción. En F. González (Ed.), *Territorio y conflicto en la Costa Caribe* (pp. 7-40). Bogotá, D. C.: Odecofi – CINEP/PPP.

Hernández, M. (1993). *La unidad revolucionaria: Utopía y realidad.* Bogotá, D. C., Colombia: Ediciones Colombia Viva.

Hernández, N. (2006). La reinserción, los Derechos Humanos y la promoción de la paz y la convivencia: Sucre. En A. Villarraga (Ed.), *La reinserción en Colombia: experiencias, crisis humanitaria y política pública* (pp. 168-180). Bogotá, D. C.: Fucude.

Isaza, C. (1993). *Los caminos entre la guerra y la paz.* Santafé de Bogotá, D. C.: Fondo editorial para la paz.

'Javier': De guía de soldados, a 'para', a bacrim. (s.f.). *VerdadAbierta.com.* Recuperado de http://www.verdadabierta.com/victimarios/3349-javier-de-guia-de-soldados-a-para-a-bacrim

Jiménez, A. (2003). *Democracia en tiempos de crisis 1949-1994*. Bogotá D. C: Planeta.

Medina, M., Sánchez, E. (2003). *Tiempos de paz acuerdos en Colombia 1902-1994.* Bogotá D. C.: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Nullvalue. (24 de enero de 1991). El PRT se lanzará el domingo como nuevo partido político. *El Tiempo.* Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-14241

Núñez, J. (1992). Borradores y esbozos de programas. *Revista Contradicción*, (10), 5-36.

Ortiz, J. M. (21 de febrero de 2014). Entrevista realizada en Barranquilla por D. Chavarro a J. M. Ortiz (exmiembro del Secretariado, integrante del equipo negociador, constituyente y exsenador) [transcripción]. Archivo del equipo Iniciativas de Paz. CINEP/Programa por la Paz.

Porras, E. 2014. Conflictos, violencias y resistencias en los Montes de María: Un análisis de temporalidad extendida. En F. González (Ed.), *Territorio y conflicto en la Costa Caribe* (pp. 331-386). Bogotá, D. C.: Odecofi – CINEP/PPP.

PRT. (1990a). Acta de la reunión entre el Gobierno Nacional y el PRT. La Hoya (San Juan Nepomuceno) 8.5.1990. En A. Villarraga (Ed), *Biblioteca de la paz – 1986-1990: Se inician acuerdos parciales – Pacto político con el M-19* (Tomo II, pp. 388-390). Bogotá, D. C.: Gente Nueva Editorial.

PRT. (1990b). Carta del PRT al Gobierno Nacional: La Asamblea Nacional Constituyente es la oportunidad histórica y llama a pactar soluciones. 11.5.1990. En A. Villarraga (Ed), *Biblioteca de la paz – 1986-1990: Se inician acuerdos parciales – Pacto político con el M-19* (Tomo II, pp. 373-374). Bogotá, D. C.: Gente Nueva Editorial.

PRT. (1990c). Carta del PRT a los promotores del movimiento político democrático: Sin consenso en la CNGSB buscamos un acuerdo nacional por la paz y una alternativa política. 15.4.1990. En A. Villarraga (Ed.), *Biblioteca de la paz – 1986-1990: Se inician acuerdos parciales – Pacto político con el M-19* (Tomo II, pp. 371-373). Bogotá, D. C.: Gente Nueva Editorial.

PRT. (1990d). Carta del PRT al Presidente de la República César Gaviria. Bogotá, 7.12.1990. En A. Villarraga (Ed.), *Biblioteca de la paz – 1990-1994: Acuerdos con el EPL, PRT, MAQL y CRS: Diálogos con la CGSB* (Tomo III, pp. 178-179). Bogotá, D. C.: Gente Nueva Editorial.

PRT. (1990e). Declaración de la reunión de alcaldes de Sucre y Bolívar con el PRT, la Haya, San Juan de Nepomuceno de Bolívar 8.15.1990. En A. Villarraga (Ed.), *Biblioteca de la paz – 1990-1994: Acuerdos con el EPL, PRT, MAQL y CRS: Diálogos con la CGSB* (Tomo III, pp. 177). Bogotá, D. C.: Gente Nueva Editorial.

PRT. (1991). Acuerdo final entre el Gobierno Nacional y el Partido Revolucionario de los trabajadores. Don Gabriel (Ovejas), 25.1.1991. En A. Villarraga (Ed.), *Biblioteca de la paz – 1990-1994: Acuerdos con el EPL, PRT, MAQL y CRS: Diálogos con la CGSB* (Tomo III, p. 183-189). Bogotá, D. C.: Gente Nueva Editorial.

PRT. (17 de julio de 2014). Genocidio del Partido Revolucionario de los Trabajadores (P.R.T.), en los Montes de María, después del Acuerdo de Paz en 1991 [Documento presentado en el Foro de Víctimas de Barranquilla del 17 y 18 de julio de 2014, dirigido a 'Señores organizadores del Foro de Víctimas de Barranquilla']. Recuperado de http://www.arcoiris.com.co/2014/07/genocidio-del-partido-revolucionario-de-los-trabajadores-p-r-t-en-los-montes-de-maria-despues-del-acuerdo-de-paz-en-1991/

Restrepo, A., & Contreras, M. (2000). *Flor de Abril: La Corriente de Renovación Socialista: De las armas a la lucha política legal*. Bogotá, D. C.: Corporación Nuevo Arco Iris.

Sevillano, O. F. (s.f.). El paramilitarismo en Sucre, un proyecto armado por su clase política. *VerdadAbierta.com*. Recuperado de http://www.verdadabierta.

com/victimarios/845-el-paramilitarismo-en-sucre-un-proyecto-armado-por-su-clase-politica

Taller Equipo Iniciativas de Paz & PRT. (8 de febrero de 2014a). Taller realizado en Bogotá por el equipo Iniciativas de Paz con exmiembros del PRT [Archivo de audio]. Archivo del equipo Iniciativas de Paz. CINEP/ Programa por la Paz.

Taller Equipo Iniciativas de Paz & PRT. (17 de febrero de 2014b). Taller realizado en Ovejas por el equipo Iniciativas de Paz con representantes de antigua base social del PRT [Archivo de audio]. Archivo del equipo Iniciativas de Paz. CINEP/ Programa por la Paz.

Taller Equipo Iniciativas de Paz & PRT. (24 de mayo de 2014c). Taller realizado en Bogotá por el equipo Iniciativas de Paz con exmiembros del PRT [Archivo de audio]. Archivo del equipo Iniciativas de Paz. CINEP/ Programa por la Paz.

Tobón, G. (10 de julio de 2014). Entrevista realizada en Bogotá por D. Castillo y D. Rampf a G. Tobón (antiguo miembro del Secretariado) [transcripción]. Archivo del equipo Iniciativas de Paz. CINEP/ Programa por la Paz.

Urueta, J. (14 de febrero de 2014a). Entrevista realizada en Bogotá por D. Chavarro y D. Rampf a J. Urueta (antiguo miembro del PRT y exconcejal de Barranquilla) [transcripción]. Archivo del equipo Iniciativas de Paz. CINEP/ Programa por la Paz.

Urueta, J. (1 de agosto de 2014b). Entrevista realizada en Bogotá por M. Llano y D. Rampf a J. Urueta [transcripción]. Archivo del equipo Iniciativas de Paz. CINEP/ Programa por la Paz.

Villarraga, A. (2006). Procesos de paz, reinserción y crisis humanitaria. En A. Villarraga (Ed.), *La reinserción en Colombia: Experiencias, crisis humanitaria y política pública* (pp. 16-67). Bogotá, D. C.: Fucude.

Villarraga, A. (2009). *Biblioteca de la paz – 1986-1990: Se inician acuerdos parciales – Pacto político con el M-19* (Tomo II). Bogotá, D. C.: Gente Nueva Editorial.

Villarraga, A. (2013). Procesos de paz y tránsito de grupos alzados en armas a nuevos movimientos políticos. *Controversia,* (200), pp. 17-75.

Villarraga, A. & Plazas, N. (1994). *Para reconstruir los sueños: Una historia del EPL.* Bogotá, D. C.: Fondo Editorial para la Paz, Fundación Progresar.

Viraje. (noviembre, 1979). Órgano teórico de la Tendencia Marxista Leninista Maoísta: Conclusiones de nuestra I. Documento presentado en la Conferencia Nacional Extraordinaria de 1978, (2). Archivo del equipo Iniciativas de Paz. CINEP/ Programa por la Paz.

Viraje. (mayo, 1983). Órgano teórico del partido revolucionario de los trabajadores: Por la rectificación: Autocrítica y combate!!, (3). Archivo del equipo Iniciativas de Paz. CINEP/ Programa por la Paz.

Viraje. (octubre, 1984). *Conclusiones de la primera conferencia sobre el trabajo de masas*. (4). Archivo del equipo Iniciativas de Paz. CINEP/ Programa por la Paz.

Viraje. (julio, 1990). *Ponencia al II. Congreso: Propuesta de proyecto político: Análisis del periodo*. (6). Archivo del equipo Iniciativas de Paz. CINEP/ Programa por la Paz.

Zambrano, C. (21 de febrero de 2014). Entrevista realizada en Baranoa por D. Chavarro a C. Zambrano (antiguo miembro del PRT y exalcalde de Baranoa) [transcripción]. Archivo del equipo Iniciativas de Paz. CINEP/ Programa por la Paz.

Zuluaga, J. (1999). De guerrillas a movimientos políticos: Análisis de la experiencia colombiana: El caso del M-19. En R. Peñaranda, Ricardo & J. Guerrero (Eds.), *De las armas a la política* (pp. 1-74). Bogotá, D. C.: IEPRI - Tercer Mundo Editores.

Renunciar *a la* opción armada

Experiencias de reintegración política de grupos insurgentes en Colombia y El Salvador

Colección

Papeles de paz

9

Renunciar a la opción armada

Experiencias de reintegración política de grupos insurgentes en Colombia y El Salvador

Esta edición rescata algunas experiencias de negociaciones con grupos armados, con el ánimo de mostrar la primordial importancia de una verdadera inclusión política, la cual, al entregar la posibilidad real de un tránsito de los actores contestatarios del poder, a ser servidores públicos en cargos políticos relevantes, es capaz de generar argumentos contra una recaída en el conflicto armado por parte de desmovilizados, y de formar la base de una sensación de responsabilidad con el sistema político reformado, en los mismos. En este sentido, los artículos albergan aportes importantes para el actual proceso de La Habana, el cual, posiblemente, dará paso a la transformación de uno de los más viejos y poderosos opositores armados del Estado colombiano. Un proceso que debe ser muy eficaz en convencer a las FARC de la viabilidad de su nuevo camino no armado, si se quiere aprovechar la oportunidad de lograr una paz sostenible.

cinep
programa por la paz
Berghof Foundation
IDRC | CRDI
International Development Research Centre
Centre de recherches pour le développement international
Canada
FLACSO
EL SALVADOR